FUSADES
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

GDN Global Development Network

DES Estudios Sociales

Serie de investigación

Doing Research Project: Evaluación del desempeño del Sistema de investigación en ciencias sociales de El Salvador

El Salvador, Antiguo Cuscatlán, 14 de marzo de 2022

ISSN 2077-9534

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
FUSADES

Una publicación del Departamento de Estudios Sociales • **DES**

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe,
sin previa autorización de **FUSADES.**

La investigación para esta publicación concluyó en **marzo de 2022.**

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de Global Development Network (GDN). Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente las de GDN.

FUSADES
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

DES
Estudios Sociales

Serie de investigación

Doing Research Project: Evaluación del desempeño del Sistema de investigación en ciencias sociales de El Salvador

El Salvador, Antiguo Cuscatlán, 14 de marzo de 2022

Índice

Índice i

Índice de figuras iv

Índice de tablas iv

Índice de gráficas v

Autores del reporte vi

Agradecimientos vii

Resumen ejecutivo viii

Hallazgos principales ix

Palancas de cambio xi

1 Introducción 1

2 Análisis de contexto 2

2.1 Desarrollo de El Salvador en contexto 3

2.2 Estructura general del sistema de investigación 5

2.3 Contexto sociopolítico 7

Perspectiva histórica 7

Aspectos culturales 10

Democracia, Estado de derecho y libertad 12

Gobernanza y marco regulatorio de la investigación en ciencias sociales 14

2.4 Contexto económico 17

Capacidades humanas e institucionales 17

Recursos para la investigación 23

2.5 Contexto internacional 25

Participación en organismos y redes internacionales de investigación 25

Redes profesionales, becas y programas de intercambio académico 28

2.6 Limitaciones 30

2.7 Conclusiones y reflexiones 31

3 Mapeo de actores (y muestra) 33

3.1 Identificación de actores 34

3.2 Actores claves asociados con el desarrollo de investigaciones en ciencias sociales en El Salvador 36

Gobierno y agencias financiadoras 38

Instituciones de Educación Superior 41

Sociedad civil 43

Sector privado (industria) 43

3.3 Caracterización de los actores y sus relaciones 44

Percepción sobre las ciencias sociales 45

Relaciones entre actores 46

Motivación para hacer investigación 47

Retos comunes que enfrentan los investigadores en ciencias sociales 48

Retos específicos para las Instituciones de Educación Superior 51

La calidad de la investigación 52

Poder e interés en la investigación en ciencias sociales 53

Rol del CONACYT 59

3.4 Actores asociados con el desarrollo de investigación 61

Elaboración del listado de investigadores en ciencias sociales (marco muestral) 61

Marco muestral para la aplicación de las encuestas 63

Resultados de la encuesta 64

3.5 Consideraciones a partir del mapeo de actores 65

3.6 Conclusiones 66

4 DRA Framework 68

4.1 Producción de la investigación 68

Insumos de investigación 68

Cultura de investigación y servicios de apoyo 71

Resultado de investigación y formación 73

Oportunidades y sostenibilidad 73

4.2 Difusión de la investigación 75

Actores y redes 75

Comunicación de la investigación 76

Productos de comunicación de la investigación 78

Popularización de la ciencia 79

4.3 Uso de la investigación para la política pública 80

Investigaciones políticamente amigables 80

Formulación de políticas basadas en evidencia 84

Productos de política basados en evidencia 86

Investigaciones para mejores políticas 86

5 Conclusiones 87

Efectividad en la producción de investigación en ciencias sociales 89

Comunicación y capacidad de incidencia de la investigación 91

Adopción de la investigación en las políticas públicas de desarrollo sostenible 92

6 Recomendaciones de política 93

Gobernanza y cultura del sistema de investigación en ciencias sociales 94

Calidad de la producción de conocimiento 95

Difusión efectiva de la investigación social 96

Uso intensivo de la investigación social en las políticas públicas para el desarrollo 97

Índice de figuras

Figura 1. Ecosistema salvadoreño de investigación y sus elementos claves 6
Figura 2. Actores del sistema de investigación en ciencias sociales 44
Figura 3. Clasificación de actores según su interés y poder en la investigación social. Grupo focal IES. 54
Figura 4. Clasificación de actores según su interés y poder en la investigación social. Grupo focal Centros de Pensamiento. 55
Figura 5. Clasificación de actores según su interés y poder en la investigación social. Grupo focal mixto (incluyendo financiadores). 56
Figura 6. Clasificación de actores según su interés y poder en la investigación social. Grupo focal con investigadores independientes. 58
Figura 7. Clasificación de actores según su interés y poder en la investigación social. Grupo focal Sector público. 59

Índice de tablas

Tabla 1. Personal en I+D en el sector educativo y gobierno, según ocupación y sexo, 2018 21
Tabla 2. Investigadores en el sector educativo y gobierno, según sexo y nivel educativo, 2018 21
Tabla 3. Gastos internos en I+D en el sector educativo y gobierno, 2018 24
Tabla 4. Número de actores del entorno de investigación social en El Salvador 37
Tabla 5. Clasificación de actores que producen investigación social en El Salvador, de acuerdo con el número de investigadores que contratan** 38
Tabla 6. Clasificación de investigadores y administradores que forman parte del marco muestral según categoría y disponibilidad de información de contacto 63
Tabla 7. Resultados del levantamiento de información 65
Tabla 8. Percepción de investigadores y administradores sobre la influencia de formuladores de políticas en la independencia de las investigaciones 81

Índice de gráficas

Gráfica 1. Investigadores en ciencias sociales 69

Gráfica 2. Tiempo promedio asignado a actividades de investigación 69

Gráfica 3. Formación de investigadores en ciencias sociales 70

Gráfica 4. Número de actores del entorno de investigación social en El Salvador, según categoría 76

Gráfica 5. Número de capacitaciones en comunicación en las que participaron los investigadores encuestados en los últimos tres años 77

Gráfica 6. Número de actividades de difusión de investigación en los últimos tres años, según medios de comunicación 79

Gráfica 7. Porcentaje de investigadores que han trabajado bajo solicitud de formuladores de política 82

Gráfica 8. Cantidad promedio de materiales elaborados por investigador según la institución a la que pertenecen 83

Gráfica 9. Cantidad promedio de policy brief elaborador por investigador según su experiencia nacional e internacional 83

Gráfica 10. Frecuencia de interacción de investigadores con formuladores de políticas públicas 84

Gráfica 11. Tendencias anticientíficas percibidas 85

Autores del reporte

Departamento de Estudios Sociales, FUSADES

- Dra. Helga Cuéllar Marchelli, coordinadora e investigadora principal del proyecto DRA-El Salvador
- Lic. Alejandro Flores, investigador senior
- Licda. Gabriela Góchez, investigadora
- Licda. Kriscia Hernández, investigadora

Centro de Investigación y Estadística, FUSADES

- Ing. Margarita Beneke de Sanfeliú, investigadora principal del mapeo de actores
- Ing. Mauricio Shi, investigador senior
- Licda. Lissette Calderón, investigadora
- Licda. Andrea Rodríguez, investigadora

Agradecimientos

La elaboración de esta investigación fue posible gracias al apoyo de Global Development Network (GDN), a través de Francesco Obino, de su equipo técnico, Joao Costa y Daniel Fussy, y del asesor científico y técnico, Dr. Thomas J. Bossert. Se destaca la guía ofrecida en la aplicación de la metodología para el análisis utilizada en el desarrollo de la investigación, la cual fue definida por GDN y adaptada por los autores, de acuerdo con el equipo técnico de GDN y del asesor. Asimismo, se aprecian mucho sus observaciones y comentarios a las versiones preliminares del reporte final.

También se agradece la colaboración de la Licda. Jennifer Cañas en la elaboración del contexto internacional, y del Lic. Luis de la O, Ing. Oscar Flores, Patricia de Jule, y, al grupo de encuestadores del Centro de Investigación y Estadística (CIE) de FUSADES conformado por Fátima Sánchez Reyes, María Elisa Rivera Melara y Jaime Lisandro García, quienes apoyaron la realización del mapeo de actores, particularmente en la recolección de información relevante a través de los grupos focales, entrevistas y las encuestas a investigadores, administradores de investigación y la comunidad de políticas públicas. Además, se distinguen los interesantes aportes de todas las personas que participaron en estas actividades de investigación. Se reconoce la valiosa contribución del Dr. Knut Walter, historiador docente e investigador; de la Dra. Reyna Durán de Alvarado, con experiencia en el sector privado, gobierno y academia, y del Magíster Carlos Ramos, historiador e investigador, en el análisis del contexto y del sector de investigación y desarrollo.

Además, se agradece a la comisión asesora del Departamento de Estudios Sociales por su valiosa retroalimentación a los hallazgos del análisis del contexto y del mapeo de actores. Igualmente, se agradece la colaboración de Yolanda Cabrera de González por la revisión editorial minuciosa y la de Tracy Philip Dreyer por la traducción al inglés del documento investigativo.

Resumen ejecutivo

Previo a la pandemia por COVID-19, El Salvador aún no solventaba completamente las demandas de su población. Si bien se habían logrado avances en términos socioeconómicos, persistían áreas con aparentes estancamientos o se afrontaban retos relacionados con la calidad de los servicios y la cuarta revolución industrial. Además, la insatisfacción con las condiciones de vida y limitaciones en el desarrollo de las capacidades individuales estimulaban la salida de la población de sus regiones de origen hacia la zona metropolitana del país o al extranjero. En consecuencia, persistían desafíos para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que fueron agravados tras los efectos negativos de la pandemia, principalmente en aquellos más vulnerables.

Este contexto presenta la oportunidad para evaluar la agenda de desarrollo nacional, la pertinencia de las políticas públicas e implementar mejoras que permitan solventar los requerimientos permanentes de la población y responder a futuras emergencias. Por su enfoque en el estudio de las sociedades y los comportamientos humanos, un sistema de investigación de ciencias sociales robusto y competente es capaz de dar soporte, teórico y práctico para tales acciones. Esto, a partir del análisis crítico de la evidencia disponible e investigaciones específicas que den luz sobre los retos a considerar. Para fortalecer su potencial catalizador, es imprescindible comprender las características del sistema e identificar sus fortalezas y áreas de mejora.

El proyecto "Doing Research: Assessing Social Science Research Systems" es implementado en El Salvador por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), con apoyo de la Global Development Network (GDN). La evaluación de las ciencias sociales en El Salvador ha adaptado la metodología estándar de GDN para evaluar el sistema de investigación social en países en desarrollo y transición, denominado "Doing Research Assessment" (DRA). El estudio constituye la primera experiencia que consolida información y evalúa la evidencia disponible sobre las actividades de investigación social en el país. Su objetivo es apoyar la construcción de una agenda de desarrollo sostenible para El Salvador mediante el fortalecimiento del sistema local de investigación social. Las preguntas de investigación que este ejercicio busca solventar son:

- ¿Qué tan efectivo ha sido el país en la producción de investigaciones en ciencias sociales?, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades?
- ¿Hasta qué punto la comunicación de la investigación es efectiva para generar conciencia pública, discurso y activismo cívico?
- ¿En qué medida son incorporados en las políticas los resultados de la investigación?, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la adopción de la investigación en el desarrollo de políticas y cómo se pueden superar?

La iniciativa combina métodos de investigación cuantitativos y cualitativos para estudiar el funcionamiento del sistema de investigación en ciencias sociales en cuanto a la producción, difusión y uso de la investigación social. La metodología definida parte con el análisis de contexto, en el cual se identifican factores económicos,

políticos, históricos e internacionales que impactan al sistema de investigación salvadoreño. Posteriormente, se identifican y mapean los actores involucrados, categorizándolos y caracterizándolos por su rol e influencia en el sistema. Finalmente, se evalúan las funciones y procesos del sistema de investigación en ciencias sociales, partiendo de los indicadores del Doing Research Assessment Framework.

Hallazgos principales

En El Salvador existe un sector de investigación social relativamente pequeño, pero con actores diversos. Desde el fin del conflicto armado, en la década de los 90, la investigación social ha evolucionado e involucrado a más protagonistas en la realización de este tipo de actividades. Hasta 2014, la tasa de investigadores sociales era de 0.28 por cada mil trabajadores en el país. En cambio, Bolivia, con desarrollo humano alto e ingresos medios bajos, presentaba una tasa de 0.32 y Costa Rica, con desarrollo humano alto e ingresos medios altos, reportaba 1.79. En este estudio se estiman 140 investigadores sociales por cada millón de personas económicamente activas, pertenecientes a gobierno, sociedad civil, sector privado, instituciones de educación superior (IES) y agencias financiadoras.

El ecosistema salvadoreño de investigación social está concentrado, geográfica e institucionalmente; mas no articulado. De los académicos sociales identificados, tres de cada cuatro pertenecen a IES y dos de cada cinco actores relacionados son de sociedad civil. Además, más de la mitad del sector se localiza en torno de la capital salvadoreña. Pese a esta aglutinación, las colaboraciones entre instituciones locales son catalogadas como esporádicas o inexistentes por el 74% de los investigadores encuestados y definida como circunstancial entre los grupos focales.

El país presenta poca cultura crítica orientada a hacer investigación social o a debatir resultados. Aunque en el marco del DRA se encuentra que los productos de estudios parecen considerarse útiles por la comunidad de políticas públicas, también se identifica que no hay una agenda clara de investigación social, ni se reconoce la importancia de promover el desarrollo basado en evidencia. Los administradores de investigación consideran que la apertura para discutir abiertamente los hallazgos de las investigaciones es escasa, mientras que los actores del ecosistema de ciencias sociales perciben actitudes que ignoran o niegan los resultados de estudios científicos desde actores del sistema, percibidas como recientes por la mitad de los encuestados. En esta misma línea, la academia indica que los tomadores de decisión demandan pocos estudios como insumo de políticas públicas, siendo que solo uno de cada tres administradores señala haber trabajado bajo solicitud directa de un formulador. Además, la baja revisión de pares en las publicaciones es compensada únicamente por el acceso a mentores en el desarrollo de los estudios.

Las capacidades institucionales facilitan la producción de investigación, pero persisten limitaciones de financiamiento y acceso a información. Como país, se invierte poco en investigación y desarrollo, en comparación con la región. En 2018, por ejemplo, el país invirtió el 0.1% de su producto interno bruto (PIB)

en este ámbito; un año después Bolivia y Costa Rica invirtieron el 0.2% y 0.5% de sus PIB respectivos. Esto se agrava al considerar que una fracción aún menor se destina a las ciencias sociales. A pesar de ello, la academia encuentra recursos, infraestructura y equipamiento institucional suficientes para sus actividades; siendo las restricciones más apremiantes el financiamiento de estudios particulares y las dificultades en el acceso a información debidas a reservas legales, demoras en entrega, pérdidas históricas, falta de digitalización de información o producción de estadísticas.

La academia trabaja en sinergia con instituciones del exterior. El país ha logrado vincularse con la comunidad internacional: recibe financiamiento para la realización de estudios, forma parte de redes internacionales de investigación y participa en programas de becas e intercambio académico. No obstante, el potencial que tiene este tipo de relaciones para fortalecer la investigación científica social salvadoreña, aún no se ha explotado completamente. Se encuentra, por ejemplo, que solo 12% de los académicos encuestados en el marco de este estudio, indicaron haber trabajado en un artículo publicado en inglés durante los últimos 3 años.

Los académicos encuestados cuentan principalmente con formación de maestría, aunque hay pocos incentivos para el desarrollo en el sector. De tales profesionales, la mayoría poseen formación de pregrado (29%) o maestría (49%). Algunos expertos señalan que, en el país, los primeros desarrollan escasamente las competencias de investigación, la cantidad de programas de postgrados es baja y su calidad es cuestionada. Persisten dudas respecto a la pertinencia de la malla curricular nacional para el desarrollo de las habilidades necesarias para una producción sólida de investigaciones sociales, así como a la capacidad de atraer o retener a estudiantes en estas carreras. Respecto a desenvolverse en la academia, solo uno de cada cuatro investigadores cree que hay oportunidades atractivas y se advierte insatisfacción con las recompensas sociales y económicas asociadas con dedicarse a este tipo de actividad.

Debido a su carga laboral, los académicos dedican insuficiente tiempo a las actividades de investigación. Se desarrollan actividades administrativas y de docencia, particularmente dentro de las IES, paralelas a las de investigación, lo cual repercute en la cantidad de estudios en los que pueden trabajar y en la calidad con que son realizados. En promedio, dedican entre el 40% y el 60% de su tiempo estrictamente a actividades de investigación. Pareciera que esto se relaciona con la poca disponibilidad y asignación de fondos, así como con la disponibilidad de personal de apoyo en las instituciones a las que pertenecen.

Las capacidades de comunicación de los hallazgos de investigaciones constituyen aspectos a mejorar. Se identifica la necesidad de adecuar el lenguaje utilizado para transmitir la información a públicos no académicos, así como emplear los canales que utiliza este público para comunicarles sobre los estudios y hallazgos. Una fuente potencial de influencia en la toma de decisiones de política pública es la ampliación de las actividades de difusión por parte de las instituciones a las que pertenecen los académicos y el incremento de material efectivo para la divulgación de hallazgos. De estos documentos, por ejemplo, se encuentra que solo 1 de cada 3 investigadores elaboró algún material en los últimos 3 años.

La interacción entre academia y políticos parece ser concentrada y escasa. Muchos investigadores, además de recibir pocas o ninguna solicitud de estudios desde los tomadores de decisión, nunca conversaron con políticos tras la publicación de documentos conteniendo resultados de investigaciones y la mitad indica jamás haber interactuado con ellos. También, la pertenencia individual a cuerpos asesores de políticas es casi nula, mientras institucionalmente la mitad de la academia ha interactuado formal o informalmente con los políticos. No obstante, se presenta baja participación de investigadores sociales en la formulación e implementación de políticas públicas.

Palancas de cambio

La débil cultura de investigación frena la motivación de dedicarse a la ciencia y limita el impacto potencial de los hallazgos. La academia debe **acrecentar sus esfuerzos por popularizar la ciencia y generar confianza acerca del proceso investigativo y la independencia de sus resultados.** Esto conlleva usar un lenguaje sencillo con los ciudadanos y transmitir qué implicancias tienen los resultados de los estudios, o la incorporación de los mismos, en su calidad de vida. A su vez, deben priorizarse las temáticas relevantes para la población y la colaboración con otros actores relacionados que, además de dar soporte al proceso de investigación, sean replicadores de los hallazgos obtenidos en sus ámbitos de actuación.

Las inconveniencias para acceder a datos e información, inexistencia, desactualización o restricciones a la disponibilidad, afectan de manera directa la generación de conocimiento, el debate y el diseño de políticas públicas con base en evidencia. En el corto plazo, la academia puede **generar información en colaboración con distintos actores para garantizar confiabilidad y vigencia.** En el país, ya ha habido experiencias previas de trabajo conjunto, entre distintas instituciones, para proponer datos, investigaciones, conocimiento y soluciones de incidencia pública. En el mediano y largo plazo, es indispensable **fortalecer las instituciones nacionales de información**, de tal manera que se promueva la generación, difusión y uso de esta entre distintos actores sociales.

Lograr un equilibrio entre las actividades laborales de los académicos. Para ello es necesario que se gestionen fondos específicamente destinados a la realización de estudios y que se priorice institucionalmente la investigación social. Esto conlleva, por tanto, ajustes al interior de los distintos actores vinculados con la ejecución de investigaciones sociales, que reflejen la relevancia del área de investigación y desarrollo, entre los que se encuentran cambios en la asignación interna de presupuesto y personal, así como la simplificación de trámites y disminución o eliminación de cuellos de botella para la ejecución de los fondos.

Fortalecer capacidades humanas para producir investigaciones científicas de buena calidad y difundir sus hallazgos a diferentes tipos de audiencia. La formación de estas competencias debe de ser un proceso que abarque todos los niveles de educación formal y se mantengan mejorando continuamente a través de la educación no formal. Para ello, se requiere una revisión orientada a la mejora del currículo y oferta educativa que cubra estos tipos de habilidades. Además, mantener acciones de monitoreo y evaluación de calidad constante por parte de instituciones rectoras, tales como el Ministerio de Educación (MINED) y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).

Factores como el contexto económico y la prioridad asignada a la investigación en ciencias sociales, dentro del ámbito institucional y de país, inciden en la disponibilidad de fondos para su desarrollo. **Invertir para aumentar la producción, mejorar la calidad y difundir efectivamente los resultados de estas actividades** es esencial. Esto implica la combinación de esfuerzos, tanto del sector público como del privado, para gestionar y destinar recursos para la adquisición de herramientas, fortalecimiento de capacidades e implementación de investigaciones científicas sociales.

Identificar, aprovechar y ampliar el alcance de los espacios ya establecidos para compartir conocimiento entre la comunidad científica social salvadoreña. Los vínculos ya existentes entre actores, así como el establecimiento de sinergias con nuevas entidades, tienen la capacidad de suscitar la conformación formal de un sistema nacional de investigación en ciencias sociales. Al mismo tiempo, partir de iniciativas provenientes de las mismas instituciones, puede facilitar la generación de identidad hacia el sistema, por parte de sus integrantes.

De manera independiente, algunas instituciones dedicadas a la investigación en ciencias sociales, en El Salvador, han establecido alianzas con instituciones similares fuera del país o han gestionado fondos de cooperación internacional para generar nuevo conocimiento. **Robustecer e incrementar las relaciones con la comunidad científica internacional y las agencias de cooperación** tiene el potencial de fortalecer capacidades locales a través del acceso a recursos, intercambio de experiencias, adaptación de buenas prácticas, adquisición de nuevos conocimientos y herramientas, entre otros. Asimismo, pueden contribuir a que las ciencias sociales salvadoreñas adquieran mayor presencia más allá de las fronteras nacionales.

Para la incidencia en las políticas públicas, se requiere **fortalecer las relaciones entre academia y políticos, así como crear incentivos para su interacción funcional.** Particular relevancia cobra, en este sentido, que el trabajo de los investigadores responda a temas sociales vigentes y que sus resultados declaren, de manera explícita, su relevancia para la sociedad. Paralelamente, son necesarios esfuerzos institucionales e individuales por comunicar, de forma idónea, los frutos de las investigaciones a los tomadores de decisiones, con el fin de que estas sean tomadas como insumo en el diseño de políticas públicas efectivas y se reafirme la relevancia de esta actividad para procurar la mejora de la calidad de vida. Las agencias de cooperación también pueden contribuir a fomentar el diálogo efectivo entre investigadores y tomadores de decisiones, alrededor de temas sociales de interés nacional.

Siglas utilizadas en el documento

AMSS	Área Metropolitana de San Salvador
APES	Asociación de Periodistas de El Salvador
ARENA	Alianza Republicana Nacionalista
AUPRIDES	Asociación de Universidades Privadas de El Salvador
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
BCR	Banco Central de Reserva
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CdA	Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior
CENICSH	Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades
CESD	Centre for Economic and Social Development
CIE	Centro de Investigación y Estadística (FUSADES)
CLARA	Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas
COAMSS/OPAMSS	Consejo de Alcaldías y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
CONACYT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
DIGESTYC	Dirección General de Estadística y Censos
DRA	Doing Research Assessment
EHPM	Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
EIP	Índice de Fluidez en Inglés (por sus siglas en inglés)
FANTEL	Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL
FEPADE	Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo
FESPAD	Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho
FIES	Fondo de Investigación para la Educación Superior
FLACSO	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FMLN	Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
FUSADES	Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
GDN	Global Development Network
GIZ	Agencia Alemana de Cooperación Internacional (por sus siglas en alemán)
GOES	Gobierno de El Salvador
I+D	Investigación y desarrollo
ICEFI	Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
IES	Instituciones de Educación Superior
ILAIPP	Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas
INFOD	Instituto Nacional de Formación Docente
INSAFORP	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
ISBN	Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (por sus siglas en inglés)
IUDOP	Instituto Universitario de Opinión Pública

MINED	Ministerio de Educación
MINEDUCYT	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
NACETEM	National Centre for Technology Management
ONG	Organización no gubernamental
PIB	Producto interno bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
REDIBACEN	Red de Investigadores del Banco Central de Reserva
REDISAL	Red de Investigadores Salvadoreños
RICYT	Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Interamericana e Iberoamericana
SICA	Secretaría de Integración Centroamericana
UCA	Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
UES	Universidad de El Salvador
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus
UNICAES	siglas en inglés)
UNICEF	Universidad Católica de El Salvador
USAID	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés)
UTEC	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en inglés)
	Universidad Tecnológica de El Salvador

1. Introducción

Puntos a destacar

- El proyecto "Doing Research: Assessing Social Science Research Systems" en El Salvador es implementado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), combinando métodos cuantitativos y cualitativos para estudiar tres funciones del sistema de investigación en ciencias sociales: producción, difusión y uso de estudios sociales.
- El objetivo de este estudio es apoyar la construcción de una agenda de desarrollo sostenible para El Salvador, a través del fortalecimiento del sistema local de investigación en ciencias sociales.
- Este esfuerzo constituye la primera experiencia en El Salvador que consolida información sobre el desarrollo de investigaciones sociales en el país y aplica una metodología para evaluar sus procesos asociados.

Hasta 2019, la evidencia disponible señalaba la existencia de brechas entre las demandas sociales y la política pública en El Salvador. A pesar de que se habían logrado avances en materia socioeconómica, parecía que estos se encontraban estancados o que se habían encontrado con nuevos retos relacionados con la calidad de los servicios y la cuarta revolución industrial (FUSADES, 2019a). Posteriormente, la pandemia de COVID-19 tuvo impactos negativos en la calidad de vida de la población, principalmente en términos de pobreza, acceso a educación, alimentación y salud (Cuéllar-Marchelli et al., 2020).

La insatisfacción de los salvadoreños con su calidad de vida, combinada con los límites que experimentan para desarrollar sus capacidades, les provoca buscar salidas individuales a esta situación. En consecuencia, es común observar movilidad humana hacia el área metropolitana del país o al extranjero, particularmente Estados Unidos. Esta situación dificulta la consolidación de cohesión social, aspecto requerido para que diferentes actores integren sus esfuerzos en búsqueda del desarrollo sostenible del país. Asimismo, la ausencia prolongada de condiciones de vida digna puede conllevar a una insatisfacción con la conducción política del Estado (Cuéllar-Marchelli, 2019).

Este contexto representa una oportunidad para la investigación en ciencias sociales. Las ciencias sociales[1] se enfocan en el estudio de las sociedades y comportamientos humanos, lo cual contribuye a comprender de mejor manera los retos para el desarrollo, a la vez que es útil para planificar agendas de desarrollo global y nacional. Por tanto, tienen el potencial de catalizar transformaciones y promover la implementación de políticas que pongan al centro las necesidades de las personas (Camejo, 2014). Por su parte, a través de procesos de investigación para el desarrollo, es posible producir conocimiento para hacer un análisis crítico de la evidencia y los retos de las políticas públicas.

1 En el marco de este proyecto, se incluyen dentro de las ciencias sociales a las siguientes áreas de conocimiento: Economía, Ciencias Políticas, Antropología, Asuntos internacionales, Etnografía, Demografía, Desarrollo, Geografía, Educación, Estudios de género, Historia, Derecho, Lingüística, Administración, Filosofía, Psicología, Trabajo social, Administración pública, Desarrollo sostenible, Salud Pública y Medicina social.

Es necesaria la disponibilidad de información precisa y suficiente para planificar respuestas adecuadas a situaciones de crisis como, por ejemplo, la causada por la pandemia del coronavirus. Pero para ello, el país necesita un sistema robusto de investigación en ciencias sociales y con las capacidades que se requieren para asumir ese rol reductor de brechas entre demandas sociales y políticas públicas. Es por este motivo que FUSADES, con apoyo de la GDN, implementa el proyecto "Doing Research: Assessing Social Science Research Systems" en El Salvador.

Esta iniciativa combina métodos cuantitativos y cualitativos para estudiar tres funciones del sistema de investigación en ciencias sociales: producción, difusión y uso de estudios sociales. La información recabada y los análisis realizados son sistematizados en las tres secciones que integran este informe. La primera de ellas, es un análisis de contexto donde, a través de revisión documental y de bases de datos, se identifican factores económicos, políticos, históricos e internacionales que impactan de alguna forma al sistema de investigación salvadoreño. La segunda, es un mapeo de actores en el que se identifican, categorizan y caracterizan diferentes grupos relevantes a la investigación en ciencias sociales. Al mismo tiempo, se determina el tipo de relación que hay entre los distintos actores y su importancia relativa en términos del rol e influencia que tienen en las tres funciones del sistema. Finalmente, se utilizan los indicadores del DRA Framework, construidos a partir de información de fuentes bibliográficas y datos obtenidos de encuestas y entrevistas, para evaluar las funciones y procesos del sistema de investigación en ciencias sociales.

El proyecto constituye la primera experiencia en el país que consolida información relacionada a la actividad de investigación social y aplica una metodología para su evaluación. Su objetivo es apoyar la construcción de una agenda de desarrollo sostenible para El Salvador. Esto, a través del fortalecimiento del sistema local de investigación en ciencias sociales, de manera que ofrezca insumos esenciales para el diálogo democrático y el proceso de planificación para el desarrollo. Se espera que los resultados de este esfuerzo inspiren la creación de políticas de investigación, la identificación de fortalezas, el fortalecimiento de capacidades institucionales e incremente la calidad de los documentos de investigación que pueden ser utilizados en el proceso de toma de decisiones y el debate democrático.

2. Análisis de contexto

Puntos a destacar

- El análisis del marco regulatorio, asociado con la investigación salvadoreña, revela que aún no se comprende la importancia de las ciencias sociales y el papel que puede desempeñar en el desarrollo del país.
- A partir del final del conflicto armado, en la década de los 90, la sociedad civil asumió un rol importante en la generación de conocimiento científico social; sin embargo, esta producción puede verse afectada por el reciente aumento de hostilidades hacia el sector.
- El Salvador cuenta con condiciones mínimas para el funcionamiento óptimo del sistema general de investigación, pero para garantizar su sostenibilidad, es necesario asumir el compromiso, nacional e institucional, de asignar recursos para generar conocimiento, desarrollar capacidades y ejecutar acciones de investigación

y desarrollo (I+D).

- En el país hay instituciones que han establecido relaciones internacionales exitosas para desarrollar investigación en ciencias sociales; no obstante, esta integración todavía no constituye una herramienta para consolidar capacidades de investigación locales.

El análisis de contexto establece los parámetros y condiciones sobre los cuales operan los sistemas de investigación en ciencias sociales. Este busca identificar los factores relevantes que afectan su grado de evolución y desempeño en términos de la producción, difusión y adopción del conocimiento para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas. A su vez, este análisis brinda elementos para comprender en qué medida los sistemas de investigación en ciencias sociales pueden contribuir al debate democrático y la deliberación sobre distintas problemáticas del desarrollo y cómo afrontarlas.

El análisis de contexto ha sido elaborado siguiendo la metodología de evaluación del desempeño de los sistemas de investigación en ciencias sociales ("Doing Research Assessment toolkit") proporcionado por GDN (2020a). Esta consiste en dar respuesta a una serie de preguntas clave sobre el tema, mediante la revisión de literatura y la obtención de información a partir de entrevistas semiestructuradas a informantes clave[2]. También incluye la recopilación y análisis de algunos indicadores relevantes que ayudan a comprender mejor el contexto. El análisis inicia proporcionando información general sobre el nivel de desarrollo económico y social del país y su sistema de gobernanza, seguido por una breve caracterización de los componentes del sistema de investigación. Posteriormente se desarrollan los aspectos sociopolíticos, económicos e internacionales que influyen en cualquier sistema de investigación, destacando las particularidades del caso salvadoreño. Al final se resumen las conclusiones del análisis y se señalan algunos temas sobre los cuales se podría profundizar más adelante, a fin de comprender mejor los determinantes del desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales en El Salvador.

2.1 Desarrollo de El Salvador en contexto

El Salvador es el país más pequeño de América Central y uno de los más densamente poblados (Banco Mundial, 2020). Limita al norte y este con Honduras, al oeste con Guatemala y al sur con el Océano Pacífico. El idioma oficial es el castellano (GOES, 1983) y la moneda el dólar de los Estados Unidos de América, desde el 2001 (GOES, 2000). Su extensión territorial es de 21,040.79 km^2 y consta de 14 departamentos y 262 municipios (DIGESTYC, 2009). El Gobierno se define como republicano, democrático y representativo; mientras que sus órganos fundamentales son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (GOES, 1983). En los territorios, los concejos municipales son responsables del gobierno y son quienes deben aprobar los planes de desarrollo local. El gobierno central debe colaborar

1

2 En febrero de 2021 se entrevistaron a: Dr. Knut Walter, historiador y expresidente de la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (CdA) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT); Dra. Reina Durán de Alvarado, Coordinadora de Transferencia de Conocimiento del Instituto de Ciencia, Tecnología e Investigación de la Universidad Francisco Gavidia y exdirectora del Proyecto de USAID "Educación Superior para el Crecimiento Económico"; y, Mgr. Carlos Ramos, sociólogo, ex exdirector de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), El Salvador y hasta febrero de 2021 presidente de la CdA, MINEDUCYT.

con las municipalidades para alcanzar los objetivos que en dichos documentos se planteen, al mismo tiempo que los gobiernos subnacionales deben apoyar en la ejecución de planes de desarrollo nacional o regional (GOES, 1983). Por tanto, ambos niveles deben coordinarse para procurar el progreso del país desde sus respectivos ámbitos (FUSADES, 2019a).

De acuerdo con datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2020, la población de El Salvador a ese año era de 6,321,042 personas. De estas, la mayoría, 3,897,688, residían en áreas urbanas. Teniendo en cuenta el sexo, el 53.25% del total son mujeres, mientras que el resto son hombres. Aproximadamente, el 27% de los salvadoreños se concentra en el Área Metropolitana de San Salvador, la capital del país. Asimismo, cerca del 50% de las personas tienen menos de 30 años, lo cual representa un potencial productivo y de desarrollo favorable. La relación de dependencia, población con edad menor de 15 años o mayor de 65 con respecto a las del grupo etario de 15 a 64, fue de 50.4% para el año referido (DIGESTYC, 2021).

El Salvador permanece en un bajo nivel de crecimiento económico, con 2% en promedio anual entre 2000 y 2019, siendo el país centroamericano que menos creció, y 2.3% para el período de 2014 a 2019, solo superado por Nicaragua en cuanto a bajo crecimiento (1.8%) (Banco Mundial, 2020). De acuerdo con datos del Banco Mundial, el valor más alto alcanzado en la última década fue de 3.8%, en 2011, mientras que, en 2019, creció 2.4% y cerró el año con un PIB nominal de US$27,000 millones. El PIB per cápita fue de US$4,167.7 en 2019, y mostró un crecimiento anual promedio de 2.3% entre 2014 y 2019 (Banco Mundial, 2020).

Debido al impacto de la pandemia por COVID-19, en 2020 se estima una contracción de 7.9% del PIB. Para 2021, el Banco Mundial (2020) proyecta un crecimiento de 4.1%, superior a la trayectoria reciente pero insuficiente para volver al nivel de producción prepandemia. De acuerdo con datos de la misma institución (Banco Mundial, 2020), El Salvador es el país más igualitario de América Latina. El país ha reducido la desigualdad, medida con coeficiente de Gini, de 0.42 en 2014 a 0.39 en 2019 (Banco Mundial, 2020).

No obstante, a pesar de los avances positivos en algunos indicadores, El Salvador ha progresado poco en materia de desarrollo humano. Entre 1990 y 2010, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) aumentó en promedio 1.1% anualmente (PNUD, 2020a). En la última década el país se ha estancado. Entre 2010 y 2019 el IDH pasó de 0.668 a 0.673, con un crecimiento promedio anual de 0.08% (PNUD, 2020a).

Respecto a la situación de pobreza, el 26.8% de los salvadoreños se encontraba en esta condición en 2019, indicador que ha mejorado consistentemente desde 2015 (DIGESTYC citado en FUSADES, 2020a). Empero, debido al impacto de la pandemia de COVID-19, se esperaba un retroceso en este sentido, puesto que se estima que la pobreza alcanzaría al 40.7% de las personas (FUSADES, 2020b). Sin embargo, tras la implementación de medidas gubernamentales y el incremento en los flujos de remesas, la población en situación de pobreza llegó al 28.7% (DIGESTYC, 2021). Al mismo tiempo, aún hay brechas pendientes de cerrar en cuanto a acceso a servicios básicos como la electricidad: el 97.8% de hogares contaba con ella en 2020, pero si solo se consideran los del ámbito rural, entonces

el porcentaje se reduce a 95.3 (DIGESTYC citado en FUSADES, 2021a). Por otra parte, el 50.49% de la población usaba internet en 2019, indicador que históricamente ha crecido, y se ha acelerado desde 2016 (Banco Mundial, 2021a). Adicionalmente, El Salvador ha reducido sus niveles de desigualdad, con un índice de Gini de 41.6 en 2014 a 38.8 en 2019, siendo hasta ese año el país menos desigual de Centroamérica (Banco Mundial, 2020).

Las inequidades persistentes en el acceso a servicios básicos y tecnología podrían incrementar el coeficiente de Gini debido al impacto de la pandemia. También persisten limitaciones en cuanto al desarrollo de capacidades. Por ejemplo, no ha sido posible todavía erradicar del todo el analfabetismo, que a 2020 aún afectaba al 9.6% de salvadoreños con edad de 10 años o más. La proporción aumenta para el caso de las mujeres (11.1%) y es aún mayor en el área rural (15.1%) (DIGESTYC citado en FUSADES, 2021a).

El contexto actual de desarrollo del país representa una oportunidad para las ciencias sociales. Estas tienen el potencial de catalizar transformaciones y promover la implementación de políticas que pongan al centro las necesidades de las personas (Camejo, 2014). Para ello, El Salvador necesita un sistema robusto de investigación en ciencias sociales y con las capacidades que se requieren para asumir ese rol reductor de brechas entre demandas sociales y políticas públicas.

2.2 Estructura general del sistema de investigación

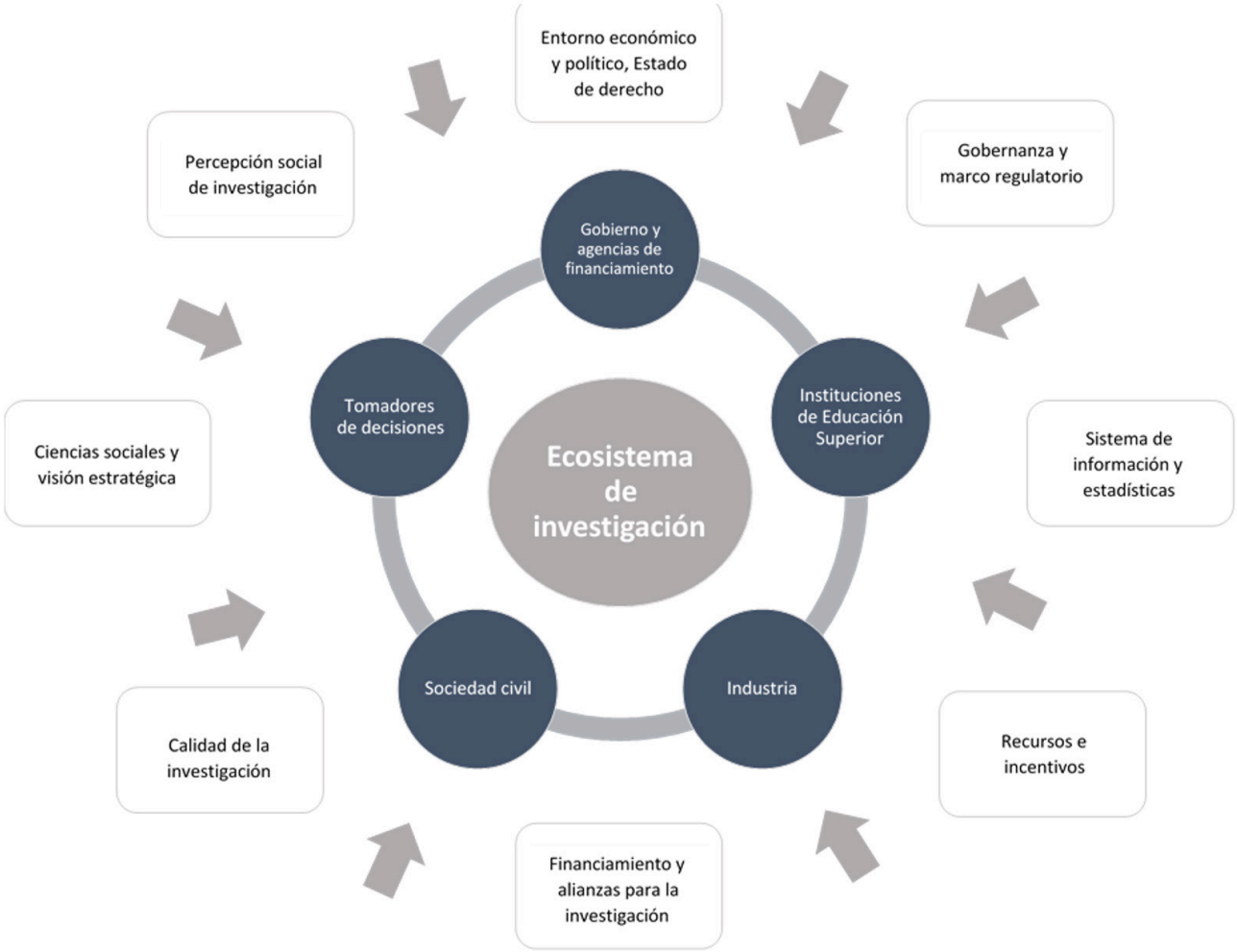
El marco legal salvadoreño considera la creación de un Sistema Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, conformado por cualquier institución que dedique esfuerzos a actividades científicas, en general, tecnológicas o de innovación (GOES, 2012). Sin embargo, no se identifica una estructura formal de un sistema de investigación enfocado en las ciencias sociales, específicamente. A pesar de esto, existen diferentes instituciones que actúan emulando un sistema de tal naturaleza y generan conocimiento que puede ser usado para informar a los tomadores de decisiones y la opinión pública.

Tomando como base las categorías de actores, definidas por la metodología del DRA, ha sido posible reconocer diferentes instituciones, las cuales de manera informal conforman el sistema de investigación en ciencias sociales. Entre ellas se cuentan: 13 instituciones de gobierno, 21 agencias de financiamiento, 34 instituciones de educación superior, 11 de sociedad civil y 6 del sector privado; todas estas con funciones relevantes a la producción de investigación en ciencias sociales. Además, se distinguen instituciones de sociedad civil y responsables de política pública como usuarios del conocimiento generado por dichas actividades de investigación. La información de estos actores será desarrollada más ampliamente en el de mapeo de actores. No obstante, es importante destacar el rol del Viceministerio de Ciencia y Tecnología como responsable de crear incentivos y coordinar esfuerzos de instituciones, tanto públicas como privadas, dedicadas a la investigación científica, en general. Asimismo, dentro de las instituciones de educación superior destaca la labor de la Universidad de El Salvador (UES) y de la Universidad Centroamericana

"José Simeón Cañas" (UCA), que producen tres de cada cuatro artículos de investigación generados por el ramo de educación superior (USAID, 2012).

La siguiente figura resume, de manera visual, las categorías de actores identificados en el ecosistema de investigación salvadoreño, así como elementos del entorno que inciden en este y que son desarrollados en el análisis de contexto.

Figura 1. Ecosistema salvadoreño de investigación y sus elementos claves



Fuente: Elaboración propia con base en GDN (2017) y los hallazgos encontrados en las secciones de análisis de contexto y mapeo de actores.

2.3 Contexto sociopolítico

Esta sección pretende explicar cómo el contexto sociopolítico salvadoreño influye en la capacidad para generar investigación en ciencias sociales que sea autónoma, libre e independiente. Para ello, se hace una revisión de factores históricos, culturales, sociales, políticos e institucionales que influyen en la organización actual de la investigación en ciencias sociales, en el sistema cómo esta se desarrolla y sus actores. A excepción del apartado sobre perspectiva histórica, donde incluso se repasan eventos del siglo pasado, el análisis que se presenta está enfocado en elementos y condiciones vigentes al momento de producir este documento. Además, los planteamientos aquí realizados se basan en información disponible en fuentes bibliográficas, así como en la opinión de expertos, en el área de la investigación salvadoreña, quienes fueron consultados para poder generar este producto.

Perspectiva histórica

En la primera mitad del siglo XX, la desigualdad caracterizó a la sociedad salvadoreña (PNUD, 2013). Los ingresos obtenidos de la exportación de café permitieron que el gobierno y las élites del país adoptaran ideas de progreso inspiradas en la experiencia, tanto de Europa como de Norteamérica. No obstante, persistieron grupos poblacionales que no se beneficiaron de estos recursos y que, por tanto, no podían cubrir el costo necesario para disfrutar de transformaciones en su calidad de vida al mismo ritmo. Según lo documentado por el Ministerio de Educación (MINED, 2009), la ideología del positivismo también tuvo influencia en este proceso, fundamentando la priorización de lo material por sobre los derechos y libertades individuales. Los positivistas consideraban que los cambios eran inevitables y que debían ser impulsados a través de cualquier medio: violaciones o alteraciones a derechos ancestrales de la población, imposición de dictaduras, modificaciones a la Constitución, todo era lícito con tal de lograr el progreso. En este contexto, el Estado prestaba poca atención al desarrollo de capacidades y la expansión de libertades de la población (PNUD, 2013).

En diciembre de 1931, sucedió un golpe de Estado que marcaría el inicio del militarismo en El Salvador. A partir de este, ascendió al poder el general Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó el país de manera dictatorial por casi 13 años (MINED, 2009). En este marco, las clases dominantes[3] ejercieron su control a través de coerción, sin llegar a desarrollar medios de dominio ideológico-políticos. Así, se estableció lo que se ha llegado a denominar como "cultura política del silencio", que afectó tanto a sectores democráticos como revolucionarios, quienes no desarrollaron capacidad de análisis y crítica a las ideas de los grupos gobernantes. Por esta razón, la producción de análisis social entre 1932 y finales de los 60 fue muy poca. Este período tampoco se caracterizó por un desarrollo relevante de las ciencias sociales en la UES[4], única universidad existente en el país en ese entonces (Lugo, 1986).

A partir de la década de los 60, el país se caracterizó por la continuación de dictaduras militares[5], procesos electorales fraudulentos, migraciones campo-ciudad y crecimiento de la exclusión y la marginalidad. El aumento de demandas sociales insatisfechas por el Estado iría motivando la organización social (Ramírez, 2013). En los 70, el auge de las ciencias

1

3 Conformadas por una alianza entre oligarcas y militares (MINED, 2009; PNUD, 2013)

4 Única universidad pública del país, fundada el 16 de febrero de 1841 (UES, 2021)

5 El militarismo finalizaría, a través de un golpe de Estado, el 15 de octubre de 1979 (MINED, 2009)

sociales en la región latinoamericana, la teología de la liberación y el marxismo contribuirían al proceso de radicalización social y a dotar de sustento teórico al surgimiento y desarrollo de organizaciones político-revolucionarias en El Salvador (Lugo, 1986; Ramírez, 2013). Este proceso desencadenaría en una situación de conflicto armado a finales de la década. Las necesidades políticas de la época motivarían que en el país se produjeran análisis sociales en dos vertientes: una académica, asociada con las universidades (Lugo, 1986; Ramírez, 2013) y otra político-organizacional, motivada por la evolución de organizaciones revolucionarias político-militares (Lugo, 1986).

En cuanto a difusión de investigación, a partir de mediados de los 70, la primera universidad privada de El Salvador, la UCA[6], inició la publicación sistemática de artículos en su revista "Estudios Centroamericanos". Estos trataban temas sociales como el Estado y los regímenes políticos, el militarismo, el papel de la iglesia, la educación y la política económica. Cerca del final de la década, la UCA también empezó a publicar análisis coyunturales en el boletín "Proceso". Por otra parte, los análisis sociales de la vertiente político-organizacional, eran utilizados para dar fundamento a lineamientos estratégico-tácticos y a plataformas programáticas de organizaciones revolucionarias. Por esta razón, solo algunos de ellos fueron públicos, mientras que muchos guardaron el carácter de documentos internos (Lugo, 1986).

Alrededor de la década de los 80, Lugo (1986) observó lo que denominó una "crisis de las Ciencias Sociales" en Centroamérica. Esto debido a que consideraba que los análisis producidos por los centros de investigación académicos de la región, sobre todo universitarios, no eran acordes con la realidad que los países estaban viviendo durante ese período. Este autor (Lugo, 1986) asoció la crisis a dos motivos: un "agotamiento del instrumental teórico del análisis social latinoamericano en general" que condujo al uso de "enfoques cada vez más ambiguos carentes de desarrollo teórico en donde predominan las ondas terminológicas de moda"[7]. La segunda causa fue lo que identificó como un "divorcio entre la investigación y la práctica política".

En este lapso de tiempo también hubo una desarticulación institucional de las universidades en El Salvador (Ramírez, 2013): la UES fue cerrada de 1980 a 1984 y su presupuesto fue recortado; mientras que, en el caso de la UCA, su desarticulación fue más simbólica debido al asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989. Según el informe de la Comisión de la Verdad (Naciones Unidas, 1993), algunos miembros de la Fuerza Armada consideraban a la UCA como un "refugio de subversivos". Al mismo tiempo, asociaban a la guerrilla con los clérigos jesuitas, debido a la preocupación de estos por los sectores de la población más pobres y afectados por la guerra (Naciones Unidas, 1993). De esta forma, el homicidio de los religiosos constituye una muestra extrema de los límites a la libertad de pensamiento y expresión que había en la época: toda persona u organización que postulara ideas contrarias a las políticas oficiales corría el riesgo de ser eliminada (Naciones Unidas, 1993).

6 La UCA fue fundada en septiembre de 1965 (UCA, 2021). Según el MINED, al 2021, existen en El Salvador 34 Instituciones de Educación Superior (IES): 22 universidades, 8 institutos especializados y 4 institutos tecnológicos.

7 Entre estas menciona los términos "estilos de desarrollo", "sectores informales" e "ingeniería política" (Lugo, 1986).

A partir de 1992, una vez finalizado el conflicto armado, la superación de condiciones represivas previamente vigentes creó un escenario favorable para la investigación académica (Lauria-Santiago, 1995). Lo social empezó a tener mayor importancia, incrementándose la inversión y mejoras en el acceso a servicios sociales básicos y el combate a la pobreza extrema. En el ámbito institucional, aumentó el respeto a libertades individuales y el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión. El inicio de un proceso democrático, a partir de los Acuerdos de Paz, también incentivó la participación política de diferentes expresiones sociales (FUSADES, 2018).

No obstante, la desarticulación institucional de las universidades, ocurrida en los 80, daría paso a la proliferación de actores como Organizaciones No Gubernamentales (ONG), centros y fundaciones privadas de investigación como nuevos generadores de conocimiento social. Estos se financiarían con fondos de cooperación de organismos internacionales, quienes tendrían mayor influencia en la definición de la agenda de estudio y el tipo de intervención que debían ejecutar los científicos sociales (Ramírez, 2013). Lugo (1986) llegó a asociar la importancia que fueron tomando las fuentes de financiamiento, y sus requerimientos particulares, con la adopción de las ciencias sociales de enfoques y términos "de moda". Ramírez (2013) afirma que, desde este punto, las ciencias sociales salvadoreñas demostraron su capacidad de adaptación "acomodándose a la nueva ola": conciliaron su pasado revolucionario, que perseguía un progreso acelerado, con el paso más pausado que proponía el proyecto modernizante del "desarrollo".

Posterior al conflicto armado, los dos partidos políticos protagonistas de la transición a la democracia (Alianza Republicana Nacionalista, ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN) gobernaron el país por casi tres décadas. Sin embargo, entre 2004 y 2018 hubo un contexto de continuo deterioro en la credibilidad del sistema político (Sociedad Interamericana de Prensa, 2020). En este período, la población salvadoreña manifestaba que la situación económica del país, la delincuencia y la inseguridad se habían convertido en problemáticas, que afectaban en gran medida la satisfacción con su calidad de vida (IUDOP, citado en Infosegura, 2021).

A partir de 2019, El Salvador inició un nuevo ciclo político con la elección de Nayib Bukele como presidente. Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (2020) registra que la nueva administración ha mostrado rasgos autoritarios en su trato hacia medios de comunicación, ciudadanía en general y su relación con otros órganos de Estado. Este detrimento en las condiciones de gobernabilidad democrática fue acentuado aún más en el marco de la pandemia de COVID-19 (FUSADES, 2020c). El autoritarismo tiene la capacidad de constituir una amenaza para el ejercicio de investigación social libre, autónoma e independiente ya que, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013), un régimen de este tipo se caracteriza por despreciar el disenso y la diversidad de pensamiento, además de que frena el diálogo para la resolución de problemas sociales. Para el caso salvadoreño, de hecho, una de las personas entrevistadas expresó considerar que, en tiempos recientes, se ha instalado, de manera abrupta, un proceso de cierre de espacios de diálogo y que, aunque algunos han logrado mantenerse en el tiempo, estos no necesariamente son en niveles de decisión.

Aspectos culturales

La identidad cultural de la población salvadoreña se ha construido sobre creencias y comportamientos que acentúan las diferencias y la desigualdad (PNUD, 2013; Rivas, 2015). Dos elementos de este tipo, aún muy arraigados, son el racismo y el machismo (PNUD, 2013).

El racismo supone la existencia de seres superiores e inferiores y avala el establecimiento de relaciones de poder y dominación entre grupos étnicos (PNUD, 2013). Asimismo, atribuye características y funciones a las personas según sus rasgos físicos, jerarquizando a los grupos sociales. Desde el punto de vista de las políticas públicas, esto implica que mientras algunos grupos poblacionales se ven favorecidos, otros se ven afectados o no son beneficiados de igual manera. Similar a otros países con historia de colonización, en El Salvador el racismo afecta especialmente a las poblaciones indígenas. Debido a la asociación que por sentido común se hace entre lo campesino y lo indígena, la permanencia y efectos del racismo todavía se aprecian en la brecha que persiste entre los indicadores de desarrollo socioeconómico del ámbito rural y urbano (PNUD, 2013). Rivas (2015) incluso asevera que la población indígena ha sido históricamente invisibilizada y desvalorizada, destacando el hecho que las estadísticas nacionales no registran las condiciones y necesidades específicas de estos grupos. Esta falta de información también constituye un límite para la producción de investigación en ciencias sociales enfocada en estas personas. De hecho, retomando los resultados de la encuesta a investigadores realizada en el marco de este proyecto, Doing Research Project: Assesing Social Science Research Systems in El Salvador[8], de los 194 consultados solo el 2% declaró desarrollar trabajos relacionados con la etnografía. Este factor brinda un indicio de la pequeña proporción de producción de conocimiento, investigación e, incluso, valor que se le da en el país a la revisión de temas sociales desde la perspectiva de distintos grupos étnicos.

En cuanto al machismo, su persistencia se explica desde la noción de poder, la cual se inculca en la subjetividad de las personas y se ejerce por hombres sobre mujeres desde etapas tempranas de la vida y en diferentes espacios sociales (PNUD, 2013). En El Salvador, por ejemplo, este aspecto se hace evidente en rezagos en la participación de mujeres en espacios políticos y económicos. Una muestra de cómo el machismo penetra, incluso, en el ámbito de la producción de conocimiento es que casi la mitad de la población salvadoreña (46%) considera que el trabajo científico desarrollado por hombres es más certero que el realizado por mujeres (CONACYT, 2018). Desde la perspectiva política, la relación desigual entre hombres y mujeres dificulta el diálogo y consenso en la construcción de políticas que busquen el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Sobre todo, si las mujeres no son vistas como pares y no logran participar de forma equitativa y activa en los procesos de toma de decisión de políticas públicas que inciden en sus vidas (PNUD, 2013). Paralelamente, con la encuesta

8 En total se realizaron encuestas a tres tipos de actores: investigadores, coordinadores de investigación y a miembros de la comunidad de políticas públicas. Estas permitieron obtener información para analizar las fortalezas, debilidades, desafíos y cuellos de botella relacionados con cómo llevar a cabo investigaciones de calidad y relevantes para las políticas públicas en El Salvador. En total se encuestaron a 194 investigadores, 48 coordinadores de investigación y 26 miembros de comunidad de política pública.

a investigadores que se realizó durante este proyecto (DRA), se constató que solo el 10.8% de ellos se dedica a realizar trabajos relacionados con estudios de género. En este sentido, sería interesante indagar, en futuros estudios, qué tanto incide la cultura machista del país para que dicho porcentaje no sea mayor.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013), aspectos como el racismo, el machismo y otras manifestaciones de discriminación, generan un orden social que legitima el control y dominio de ciertos grupos sociales sobre otros. A la vez, estas condiciones vuelven propicio el ejercicio autoritario de poder en los diferentes tipos de relaciones. En El Salvador aún persiste la aceptación de ciertas formas autoritarias de relacionarse. Como ejemplo, el PNUD (2013) destaca el nivel de confianza de la población hacia la Fuerza Armada, la cual es tradicionalmente jerárquica y autoritaria. De acuerdo con la Corporación Latinobarómetro, en 2020, los salvadoreños confiaban en dicha institución aún más que en el Poder Judicial, el Congreso y los partidos políticos. El PNUD (2013) asocia este rasgo cultural a la memoria de los gobiernos militares del siglo XX: "tenían más claridad de rumbo y eran capaces de mantener un orden aceptable, aunque fuera a costa de las libertades de determinados grupos de la población". La Corporación Latinobarómetro incluso revela que, en 2020, el 34% de los salvadoreños manifestó que "apoyaría un gobierno militar en reemplazo del gobierno democrático, si las cosas se ponen muy difíciles". Además, que el 14% de la población consideraba que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible (Corporación Latinobarómetro, 2021).

El PNUD (2013) afirma que el autoritarismo, combinado con la desigualdad, han abierto paso al clientelismo como forma de relación social alternativa para acceder al poder, incidir en políticas públicas y tener acceso a recursos económicos. Como ya se ha mencionado, factores asociados con el autoritarismo constituyen un peligro para las libertades necesarias para realizar investigación social autónoma e independiente. Al mismo tiempo, tienen el potencial de promover el cierre de espacios para que sus resultados sean retomados en los procesos de toma de decisiones de política pública.

En cuanto a la cultura de uso de investigación, se retoman los resultados del estudio "Percepción social de la ciencia y la tecnología en El Salvador" (CONACYT, 2018). En este se muestra que, en general, solo el 6.8% de los salvadoreños expresa no tener interés en temas relacionados con la ciencia y la tecnología. En el ámbito social, son la educación, la seguridad pública y el desarrollo económico los tópicos que más atraen a la población. La televisión y el internet se presentan como los principales medios a través de los que las personas se informan sobre el quehacer científico, mientras que solo el 1.4% lo hacen a través de revistas especializadas, documentales, charlas o libros. Además, existe una opinión generalizada de que los investigadores no se esfuerzan por dar a conocer el trabajo que realizan. En consecuencia, solo el 10% de las personas asegura conocer instituciones nacionales dedicadas a la investigación científica, mencionando entre estas solamente a las universidades y al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). En este sentido, aprovechar los canales más utilizados por los salvadoreños, como la televisión y el internet, podría ser clave para contrarrestar su desconocimiento sobre la investigación científica.

La misma fuente (CONACYT, 2018), presenta que el 86% de los salvadoreños considera que el conocimiento científico y técnico mejora la capacidad para tomar decisiones. Por tanto, el 72% de la población cree que los políticos deberían de basar sus decisiones en la opinión de investigadores y expertos. Sin embargo, solo el 12%, aproximadamente, piensa que las actividades científicas pueden aportar soluciones a los problemas sociales del país. Esto podría estar relacionado con el hecho de que alrededor del 75% de las personas cree que sí existe la posibilidad de que quienes financian investigaciones influyan en quienes la realizan para llegar a los resultados que les convienen. Esto revela que en el país existen dudas sobre la libertad, autonomía y calidad del quehacer científico.

Democracia, Estado de derecho y libertad

En la Constitución (GOES, 1983) se reconocen legalmente los derechos y libertades fundamentales de la población salvadoreña. Una libertad que ahí se respalda, muy relevante a la investigación en ciencias sociales, es la de expresión. No obstante, Loya (2011), basada en una Encuesta sobre Derechos Humanos en El Salvador, realizada en 2009, revela que la libertad de expresión es la que los salvadoreños consideraban menos garantizada de entre un conjunto de derechos.

De manera más reciente, la Sociedad Interamericana de Prensa (2020) ha declarado que, a partir del inicio de la administración del presidente Bukele, se ha acelerado el deterioro de la libertad de expresión. Esta fuente (Sociedad Interamericana de Prensa, 2020) argumenta que el Órgano Ejecutivo ha incrementado las hostilidades contra organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación críticos que han reportado abusos de poder y casos de corrupción. Ejemplos concretos de este tipo de conducta contra periodistas incluyen intimidaciones en plataformas digitales o de forma física, así como negar el acceso u oportunidad de preguntar en conferencias de prensa de actos oficiales (Hernández, Cáceres y APES, citados en Sociedad Interamericana de Prensa, 2020). La sociedad civil, por su parte, ha denunciado el uso de redes sociales, instituciones y órganos del Estado para deslegitimar y perseguir voces críticas al gobierno (Acción Ciudadana et al., 2021).

Adicionalmente, la Corporación Latinobarómetro (2021) encontró que, en 2020, el 47% de los salvadoreños consideraban que la libertad de expresión estaba poco o nada garantizada. Sin embargo, al mismo tiempo, otro de sus hallazgos fue que dos de cada tres personas estaban de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación "En caso de dificultades está bien que el presidente controle los medios de comunicación".

Dado el contexto, para el período de mayo de 2019 a abril de 2020, la primera edición del Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, ubicó a El Salvador en la posición 16 de 22 países del hemisferio, con un valor de 42.6 de un máximo de 100 puntos posibles (Sociedad Interamericana de Prensa, 2020). Preocupaciones por la situación del país, en cuanto a limitaciones a la libertad de expresión, han sido manifestadas por congresistas estadounidenses, el director de Reporteros sin Fronteras y la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Esta última, incluso, vaticinó que la situación empeoraría aún más durante 2021 (FUSADES, 2021b), año cuando

el país descendió dos escalones en el Índice de Chapultepec, posición 18 de 22 países, con 41.7 puntos y siendo catalogado como una nación con "alta restricción" en la Libertad de Expresión y Prensa (Sociedad Interamericana de Prensa, 2021; Mejía, 2021).

Otra condición fundamental para las actividades vinculadas con la investigación es la libertad de cátedra o libertad académica. Esta se reconoce en el artículo 24 de la Ley de Educación Superior (GOES, 2004). Sobre su cumplimiento, Freedom House (2021) asevera que la libertad académica es respetada en El Salvador, asignándole tres de cuatro puntos posibles a este factor. Por su parte, un reporte del Global Public Policy Institute y de la Scholar at Risk Network (Kinzelbach et al., 2021) asigna a El Salvador un Índice de Libertad Académica de 0.747, donde los valores más alejados del 0 y más cercanos a 1 indican un mejor desempeño de país en relación con este tema. Estos valores son muy similares a los de su país vecino, Guatemala, donde Freedom House (2021) asignó tres de cuatro puntos posibles al cumplimiento de este derecho, mientras que su Índice de Libertad Académica fue de 0.788 (Kinzelbach et al., 2021). Por su parte, Honduras, el tercer país perteneciente al Triángulo Norte de Centroamérica, recibió dos de cuatro puntos posibles por parte de Freedom House (2021) y un Índice de Libertad Académica de 0.927 por parte del Global Public Policy Institute y de la Scholar at Risk Network (Kinzelbach et al., 2021).

En relación con el Estado de derecho, los indicadores de buen gobierno del Banco Mundial (2021b) ubicaron al país en el percentil 23.6 en 2019. Esto significa que El Salvador se encuentra mejor que el 23.6% de los países considerados por el Banco (214 en total) en cuanto a la confianza que hay hacia las normas de la sociedad y su cumplimiento. Esto revela que hay un amplio margen de mejora aún pendiente de lograr. Por otra parte, respecto al estatus de la democracia, a pesar de que la transición a esta inició en 1992, 20 años después el PNUD (2013, p. 61) argumentó que todavía no brindaba las condiciones necesarias para facilitar el establecimiento de diálogos y consensos en torno a la política pública. Adicionalmente, la Corporación Latinobarómetro (2021) encontró que aproximadamente el 48% de los salvadoreños manifestaba estar "no muy satisfecho" o "nada satisfecho" con la democracia en el país. Además, las confrontaciones entre los Órganos Ejecutivo y Legislativo, a partir del gobierno de Nayib Bukele, deterioraron las condiciones de gobernabilidad democrática, situación que empeoró durante la pandemia (FUSADES, 2020c).

En febrero de 2021, se realizaron elecciones de alcaldes y diputados de la Asamblea Legislativa. De este proceso, el partido del presidente Bukele ganó la mayoría de los escaños en el Congreso (Alas, 2021). Esto le daría el control de prácticamente todas las ramas del gobierno, pues desde la Asamblea se eligen los funcionarios de segundo grado (Lima, 2021). Ante esto, y teniendo en cuenta los rasgos autoritarios previamente observados, un experto de la Universidad Internacional de Florida (citado en Lima, 2021) expresó que hay "temor entre muchos sectores de que esta acumulación excesiva de poder pueda significar la destrucción definitiva de las instituciones democráticas en el país".

El 1 de mayo de 2021, fecha cuando inició labores la nueva Asamblea Legislativa, los diputados decidieron destituir de su cargo al Fiscal General de la República y a los cinco magistrados de la

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Aunque la posición oficial argumenta que estos funcionarios obstaculizaban la capacidad del presidente para enfrentar la pandemia, actores nacionales e internacionales han calificado el hecho como un golpe a la democracia salvadoreña (Pozzebon, 2021). En la misma fecha, 1 de mayo, los diputados procedieron a nombrar sustitutos de los magistrados depuestos y del Fiscal General. Esto fue realizado con dispensa de trámites, sin deliberación y sin cumplir el procedimiento establecido en la Constitución y en la ley para el nombramiento de este tipo de funcionarios. Además, se omitió la estrecha relación que algunos de los funcionarios juramentados mantenían con el Ejecutivo. Estas acciones han sido interpretadas por organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales como "una clara transgresión al principio de separación de poderes y como el inicio de una etapa claramente autoritaria en la que el presidente Bukele concentrará más poder político" (FUSADES, 2021c, p.170). Por tanto, las características de la situación actual: deterioro de la libertad de expresión, debilitamiento de la democracia, señales de autoritarismo; plantean riesgos para la producción de investigación en ciencias sociales libre, autónoma e independiente en El Salvador.

Gobernanza y marco regulatorio de la investigación en ciencias sociales

En 2012 se creó la Ley de Desarrollo Científico y Tecnológico, la cual define los mecanismos e instrumentos necesarios para implementar la Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través de la ejecución del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Este último, a su vez, constituye el marco de referencia de la Agenda Nacional de Investigación (GOES, 2012). Por medio de la Ley (GOES, 2012) también se crea el Sistema Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología[9]. Este está coordinado por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología y se conforma por instituciones públicas y privadas que dedican, al menos, parte de sus esfuerzos o recursos a actividades científicas, tecnológicas y de innovación[10]. Asimismo, esta Ley (GOES, 2012) delega al Viceministerio de Ciencia y Tecnología la responsabilidad de crear incentivos y estímulos a la innovación, ciencia y tecnología.

La Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología más reciente corresponde a mayo de 2018. El enfoque de esta se centra en vincular estrechamente el trabajo científico con la innovación productiva, esto con el fin de mejorar la competitividad del país y promover el crecimiento económico. De acuerdo con el objetivo general de esta Política, el desarrollo y bienestar social son derivados del crecimiento económico que se puede lograr gracias a la generación y difusión de conocimiento. El sector público se declara responsable de la ejecución de la Política y la presidencia asume el rol de coordinador. El Órgano Ejecutivo también se establece como encargado de canalizar los fondos necesarios para apoyar las actividades estratégicas en Innovación, Ciencia y Tecnología (GOES, 2018). A pesar de esto, los salvadoreños perciben que son los organismos internacionales los que más invierten en el quehacer científico del país, pues, aunque se reconoce que el Estado brinda algún aporte, el 67% de las personas considera que este es insuficiente (CONACYT, 2018).

9 Subdivisión del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINED).
10 En la revisión del marco legal salvadoreño asociado con la investigación científica, no se identificaron instrumentos que regulen el trabajo del sector privado o las ONG, específicamente, en este tipo de actividades.

En relación con el Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, la versión más reciente que fue posible identificar es de agosto de 2010. Esta incluía una Agenda Nacional de Investigación que buscaba definir prioridades que sirvieran de base para el trabajo conjunto y coordinado entre investigadores y centros de investigación. Así, salud, energía, seguridad alimentaria y medio ambiente, fueron las áreas prioritarias de investigación que se establecieron para el período 2010-2014 (MINED, 2010). Se puede notar que no se consideraron áreas relacionadas con las ciencias sociales, de acuerdo con la definición que se ha establecido en el marco de este proyecto (DRA). Es importante mencionar que es la primera vez que se realiza un mapeo de la investigación en ciencias sociales en El Salvador siguiendo una metodología rigurosa, con el propósito de incluir a esta rama de las ciencias en el debate acerca de las capacidades nacionales de investigación. El análisis revela que, al contrastar el contenido de la Agenda Nacional de Investigación, anteriormente mencionada, con el enfoque que otros instrumentos legales dan a las actividades científicas, a estas solamente se les asocia sobre todo con el mundo productivo y con la promoción del crecimiento económico. Por tanto, surge la inquietud: ¿cuál es la relevancia que se asigna a las ciencias sociales en la visión estratégica de país?

Por otra parte, el 76% de la población salvadoreña opina que las prioridades de investigación nacional reflejan más los gustos personales de los investigadores que las necesidades de la sociedad (CONACYT, 2018). De forma similar, entre los entrevistados se expresó que la agenda de investigación de algunas instituciones, en especial cuando están sujetas a financiamiento externo, no siempre responde a intereses nacionales.

En agosto de 2017, surgió la Política Nacional de Popularización de la Ciencia y la Tecnología. Esta busca establecer estrategias para lograr la culturización científica de la sociedad, así como promover la difusión y divulgación del conocimiento científico. Este último aspecto está muy relacionado con el uso de la investigación, ya que se refiere a la forma en que el conocimiento científico se transfiere a un sector más amplio de la sociedad para que se apropie de él y lo use para mejorar su calidad de vida. Se define al Viceministerio de Ciencia y Tecnología como ente rector del marco institucional para dirigir esta política. A la vez, se establece la realización de estudios especiales y una encuesta bianual de percepción social de ciencia y tecnología que permita ir midiendo su efectividad (CONACYT, 2017a).

La revisión de las leyes y políticas anteriores permite identificar el papel relevante que tiene el Viceministerio de Ciencia y Tecnología en las actividades científicas del país. Algunas funciones clave, como la creación de incentivos a la ciencia (GOES, 2012) y la dirección de la Política de Popularización, las realiza apoyándose en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2017a). El CONACYT es una unidad desconcentrada del MINEDUCYT, bajo la dependencia directa del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene por objeto ser la implementadora estatal de políticas relacionadas con el desarrollo científico, tecnológico y de apoyo a la innovación (MINED, 2013).

Otra institución del MINEDUCYT, particularmente relevante para las ciencias sociales, es el Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (CENICSH). Este fue creado en 2010, en el marco del Plan Social Educativo

"Vamos a la Escuela 2009-2014", con el propósito de desarrollar investigaciones sobre la realidad nacional que diluciden transformaciones sociales para la reducción de desigualdades en la población (CENICSH, 2011). Además, busca aportar al desarrollo de las Ciencias Sociales y Humanidades en el país y facilitar la relación entre investigadores, diseñadores e implementadores de políticas públicas (CENICSH, 2011; GOES, 2018). El CENICSH posee, incluso, una revista propia e indexada (GOES, 2018): la "Revista de Humanidades y Ciencias Sociales", la cual se comenzó a publicar en 2011 (CENICSH, 2011).

De acuerdo con consultas realizadas a miembros del MINEDUCYT, actualmente, el CENICSH está en proceso de fusionarse con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). Este es otra dependencia del Ministerio enfocada en garantizar la calidad del recurso humano del sistema educativo (INFOD, 2021). En concordancia con este proceso, también se ha planteado reestructurar la "Revista de Humanidades y Ciencias Sociales" para que se enfoque en la publicación de trabajos relacionados con el ámbito educativo y que sean de utilidad para los docentes salvadoreños (Rodríguez, comunicación personal, 14 de octubre de 2019).

Finalmente, se destaca el rol que se le otorga a las universidades en la investigación salvadoreña. La Ley de Educación Superior (GOES, 2004) declara que uno de los objetivos de este nivel educativo es promover la investigación en todas sus formas (GOES, 2004). En el artículo 48 de esta Ley, se hace mención de subsidios y programas de apoyo estatales dirigidos a la investigación científica. En consecuencia, el MINEDUCYT pone a disposición de IES estatales y de calidad acreditada el Fondo de Investigación para la Educación Superior (FIES) (GOES, 2009). Sin embargo, en la Política Nacional de Innovación Ciencia y Tecnología, se delimita la prioridad del FIES a temas de salud, energía, seguridad alimentaria y medio ambiente por ser "áreas privilegiadas por la Agenda Nacional de Investigación" (GOES, 2018, p. 21). De esta forma, teniendo en cuenta la definición de ciencias sociales establecida en este proyecto (DRA), se aprecia que estas quedan excluidas del beneficio de este fondo. Adicionalmente, se identifica de nuevo el enfoque que se da en el país a la investigación como instrumento para el crecimiento económico. Esto, debido a que el FIES solamente financia proyectos de investigación de tipo tecnológica orientados a la producción, el mercado y la industria (MINED, 2011).

Además del aspecto económico, elementos más de tipo social también ejercen un alto nivel de incidencia en la calidad de vida de los salvadoreños. Por tanto, resulta importante que la investigación en ciencias sociales adquiera mayor relevancia en el marco institucional de la investigación científica salvadoreña. Esto implica, además, que haya una discusión seria en torno a la definición de una Agenda Nacional de Investigación que incluya a las ciencias sociales en sus áreas de estudio y en los incentivos disponibles para su ejecución. Así, podrían comprenderse de mejor manera las dinámicas propias de la sociedad salvadoreña, lo que, a su vez, permitiría contar con información valiosa para el diseño de políticas públicas pertinentes para la superación de obstáculos sociales en el desarrollo del país.

En resumen, el contexto sociopolítico de El Salvador evidencia cómo ha ido evolucionando la investigación en ciencias sociales en el país y

cómo esta se ha ido adaptando según los escenarios históricos vigentes. Se destaca que las condiciones, recursos y actores involucrados en la realización de este tipo de actividades han progresado a partir del fin del conflicto armado. No obstante, el reciente inicio de un nuevo ciclo político en el país, que ha sido catalogado con rasgos autoritarios, representa un riesgo de retroceso en el camino ya avanzado y en el establecimiento de un contexto que propicie el desarrollo de investigación social autónoma e independiente. Tal preocupación se vuelve aún más acuciante si se tienen en cuenta las agresiones a la libertad de expresión y el cierre de espacios de diálogo que ya se han comenzado a observar. Es posible identificar eventos históricos y aspectos culturales como elementos que, en cierta medida, sustentan la coyuntura actual de deterioro de la democracia. Al mismo tiempo, el análisis del marco regulatorio asociado con la investigación salvadoreña revela que aún falta comprender la importancia de la investigación en ciencias sociales y el papel que esta puede desempeñar en el desarrollo del país. A pesar de esto, las organizaciones de la sociedad civil han asumido un rol importante en la generación de conocimiento científico social, sobre todo en el período posterior al conflicto armado, labor que podría verse mermada ante el incremento reciente de hostilidades dirigidas hacia este sector.

2.4 Contexto económico

Además de los aspectos sociopolíticos, culturales e históricos, la situación económica del país influye en el funcionamiento del sistema de investigación. El capital humano, la disponibilidad de fondos y el mercado laboral determinan, en cierta medida, las capacidades y oportunidades de investigación en ciencias sociales. Debido a que no toda la información disponible está desagregada por área científica, este apartado caracteriza las capacidades humanas e institucionales y los recursos para la investigación en general y aquellos factores que influyen en su producción, difusión y uso en la política pública. Cuando la evidencia lo permite, se incluyen particularidades de la investigación en ciencias sociales.

Capacidades humanas e institucionales

El Salvador se caracteriza por un bajo crecimiento e insuficiente capital humano, tanto por la escolaridad y la calidad de la educación, como por la precaria situación de empleo, entre otras condiciones sociales (FUSADES, 2019b; Ruiz-Arranz et al., 2019; Foro Económico Mundial, 2017). El crecimiento real del PIB alcanzó 2.4% en 2019, nivel promedio en el cual se ha mantenido en los últimos años (FUSADES, 2020b). El sistema educativo, por su parte, enfrenta múltiples desafíos, siendo uno de estos la capacidad de retención de sus estudiantes: la escolaridad promedio fue de 7 años en 2018, es decir, los salvadoreños suelen cursar hasta primaria (FUSADES, 2019a). En 2018, la tasa neta de cobertura en educación superior fue de 11.9%, quedando al menos cuatro de cada cinco jóvenes de 18 a 24 años sin estudios superiores (MINED, 2019). De los 190,519 estudiantes matriculados, 25.1% opta por economía, administración y comercio, 19.2% por tecnología, 18.9% salud, 8.3% derecho, 7.3% ciencias sociales[11], 6.5% educación, 6.1% humanidades, 4.4% arte y arquitectura, 2.4% agropecuaria y medio ambiente y 1.8% ciencias (MINED, 2019). Aunque casi la mitad

11 Según la clasificación del MINED, ciencias sociales incluye las siguientes carreras: ciencias políticas, ciencias de la comunicación, comunicación social, métodos y técnicas de investigación social, periodismo, publicidad, relaciones públicas y sociología.

de los estudiantes están inscritos en una carrera de las ciencias sociales, según la definición utilizada en DRA, esto no significa que estas faciliten el desarrollo de habilidades de investigación bajo cierto estándar de calidad. El mercado laboral también tiene retos, tales como la informalidad, el desempleo y el subempleo. El sistema económico sigue sin lograr absorber la fuerza laboral ni brindar las mejores condiciones de trabajo: siete de cada diez personas económicamente activas no encontraron un empleo formal en 2018 (FUSADES, 2019a).

Estos aspectos, entre otros, son característicos de un país que produce poco y genera insuficiente empleo, dando lugar a diversos desafíos en la productividad y el progreso social del país. De hecho, en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, El Salvador obtuvo 52.6 puntos en 2019, ubicándose en la posición 103, cinco posiciones abajo en comparación con 2018 (Foro Económico Mundial, 2018 y 2019). En el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, obtuvo 0.673 puntos en 2019 ubicándose en la posición 124 bajo la clasificación de desarrollo humano medio, misma posición que en el año anterior (PNUD, 2019 y 2020b). Ciertamente, este contexto económico se traduce en barreras para la generación de capacidades y oportunidades socioeconómicas. El sector de investigación y desarrollo (I+D) no es la excepción. El bajo nivel educativo, las oportunidades escasas de empleo de calidad, el bajo crecimiento y los pocos recursos, frenan la acumulación de competencias de investigación en el sistema educativo y mercado laboral y la generación de oportunidades para la investigación. Sin duda, estos elementos influyen en la disponibilidad de capacidades humanas e institucionales.

A pesar de no poder dimensionar fácilmente la participación de los investigadores en el mercado laboral[12], la información disponible deja entrever un sector bien pequeño en comparación con el número de ocupados en otras actividades económicas. En 2018, el Observatorio de Ciencia y Tecnología del CONACYT registra 72 unidades de investigación; 306 investigadores, de los cuales 82 están en ciencias sociales; 628 docentes-investigadores, de los cuales 253 están en ciencias sociales; y 727 proyectos de investigación, de los cuales 100 son en ciencias sociales. Por lo tanto, había 335 profesionales que realizan acciones de investigación en ciencias sociales[13] en un mercado de 2.8 millones de ocupados, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2018 (DIGESTYC, 2019).

Tal como se mencionó anteriormente, las condiciones económicas influyen en el tamaño de dicho sector y sus capacidades. A partir de los datos recopilados por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Interamericana e Iberoamericana (RICYT), Honduras y Guatemala que tienen un desarrollo humano medio e ingresos medio bajos, al igual que El Salvador, registraron menos investigadores en ciencias sociales. Sin embargo, Bolivia que tiene un desarrollo humano alto e ingresos medio bajos, reúne 1,619 investigadores con 22.25% en ciencias sociales. Esto corresponde a un sector un poco más grande que el salvadoreño:

12 En los registros del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) no aparece la rama económica I+D, por lo que es difícil estimar la participación de los investigadores en el mercado laboral formal. A agosto de 2018, 18.1% de los empleados del sector privado que cotizan al ISSS trabajaba en "actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos de apoyo", ámbito en el cual podría estar la investigación (FUSADES, 2019b).

13 CONACYT incluye en ciencias sociales diversas ramas de investigación: psicología, economía y negocios, ciencias de la educación, sociología, derecho, ciencias políticas, geografía social y económica, medios y comunicaciones, entre otras (CONACYT, 2019a).

350 personas enfocadas en ciencias sociales aproximadamente. En términos generales, la tasa de investigadores por mil trabajadores en 2014 fue de 0.32 y 0.28, respectivamente. Costa Rica, por su parte, con un desarrollo humano muy alto e ingresos medio altos marca la diferencia con un sector de 3,781 investigadores. 31.7% de estos trabaja en ciencias sociales, es decir, aproximadamente 1,200 profesionales, lo que equivale a cuatro veces el tamaño del sector salvadoreño. En términos generales, la tasa de investigadores por trabajadores en 2014 de Costa Rica fue de 1.79, seis veces la de El Salvador. A su vez, relativamente la proporción de investigadores con doctorado y maestría es mayor, en comparación con El Salvador y Bolivia.

En cuanto a los registros nacionales, una de las principales limitaciones es que CONACYT únicamente cuantifica el sector de educación superior y el gobierno a partir de una encuesta a 39 instituciones de educación superior y 13 del gobierno. Por ende, los datos recolectados subestiman el tamaño real del sector dejando fuera ciertas entidades de gobierno y las instancias de la sociedad civil e industria que realizan acciones de investigación. Asimismo, la encuesta más reciente es de 2018, por lo que el registro de investigadores podría estar desactualizado. Sin embargo, esta información es útil para caracterizar el mercado. A continuación, a partir de los datos del observatorio de 2018, se examinan las oportunidades de investigación y las capacidades, exponiendo algunos de los factores que influyen en ellas.

Oportunidades de investigación

La investigación toma lugar en cuatro sectores principalmente, en el marco de análisis de este estudio: instituciones de educación superior, gobierno y agencias de financiamiento, industria (empresas consultoras y centros de pensamiento con fines de lucro) y sociedad civil (ONG, centros de pensamiento, medios de comunicación, líderes). Tal como lo demuestran las cifras oficiales y lo afirman los expertos en las entrevistas, la capacidad institucional para desarrollar investigación se ha ido fortaleciendo, pero todavía es poca. Sigue siendo necesario mejorar las condiciones para su producción, difusión y uso en la política pública.

Las unidades de investigación están bien definidas y, año con año, se desarrollan más proyectos en ciencias sociales y, por ende, más productos científicos[14] (CONACYT, 2016 y 2019a). En 2018, había 39 unidades en las IES y 33 en el gobierno, pero únicamente 13 de estas fueron encuestadas por CONACYT. En el sector educativo, hubo 624 productos en ciencias sociales, lo que corresponde al 45% de la producción científica total; el 55% restante aborda ciencias exactas y naturales, humanidades, ciencias médicas, entre otras áreas. En el gobierno, hubo 44 productos en ciencias sociales, equivalente al 20% de su respectiva producción. En concreto, los informes técnicos y los artículos en revistas y/o boletines con Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN, por sus siglas en inglés) son los más producidos. Asimismo, como lo exhiben

14 Entre los productos científicos que se producen, se destacan los artículos en revistas y/o boletines con y sin ISSN, libros con y sin el Sistema de Numeración Internacional Normalizado para Libros (ISBN, por sus siglas en inglés), artículos arbitrados en ISI y otros índices, patentes solicitadas y concedidas, ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales, capítulos en libros publicados e informes técnicos.

los datos y la historia, la investigación en ciencias sociales en el país está principalmente conducida por el sector educativo. Respecto a los otros dos sectores, industria y sociedad civil, es difícil mapear su capacidad instalada y dimensionar el alcance, ya que no hay un sistema que le dé seguimiento al mercado laboral propio de I+D. No obstante, a partir de las entrevistas para los fines de este estudio, los expertos sí consideran estos espacios como empleadores de investigadores. Incluso, agregan el sector empresarial como un rubro que puede proveer oportunidades, particularmente aquellas empresas que realizan estudios de mercado.

En general, la producción científica ha aumentado, pero todavía es poca. Si bien no se tiene la información para comparar la cantidad de productos nacionales con otros países, sí fue posible comparar la cantidad de publicaciones en bases internacionales de datos documentales. Según RICYT, en 2018, El Salvador obtuvo 1.58 publicaciones por 100,000 habitantes en Science Citation Index y 2.18, en SCOPUS. Mientras que Bolivia registró 3.20 y 3.54, respectivamente y Costa Rica, por su parte, 18.36 y 24.80. La cantidad de producción científica salvadoreña se asocia principalmente con el poco recurso humano y la escasa inversión en I+D, como se detalla a continuación (CONACYT, 2016). Además, pese al creciente número de investigaciones, aún no se difunde lo suficiente sus resultados (CONACYT, 2016).

Capacidades del recurso humano

El recurso humano dedicado a la investigación en todas las áreas científicas ha aumentado en los últimos diez años, pero todavía es poco, tal como se mostró anteriormente. Además, se enfrenta con varios aspectos que restringen sus acciones de I+D. En 2018, CONACYT registró 140 investigadores y 628 docentes-investigadores en universidades e institutos y 166 investigadores en entidades gubernamentales. En las IES, 47.9% de los investigadores y 40.3% de los docentes-investigadores se concentraron en ciencias sociales y, en el gobierno, únicamente el 9% de los investigadores. La mayor concentración estuvo en ciencias agrícolas, seguida por las ciencias exactas y naturales y las ciencias médicas. Por otra parte, el personal en I+D suele estar compuesto principalmente por investigadores y docentes-investigadores en el caso de las IES (tabla 1). En este sector, solo 11.3% era técnico o auxiliar en 2018, mientras que, en el gobierno, este porcentaje aumenta a 46.1%. Adicionalmente, los datos del CONACYT dejan entrever que predominan los hombres, tanto en las IES como en el gobierno: 95 contra 45 y 105 contra 61, respectivamente.

Tabla 1. Personal en I+D en el sector educativo y gobierno, según ocupación y sexo, 2018

	Instituciones de Educación Superior			Gobierno		
	Hombres	Mujeres	**Total**	Hombres	Mujeres	**Total**
Investigadores	95	45	**140**	105	61	**166**
Docentes-Investigadores	362	266	**628**	n/a	n/a	**n/a**
Técnicos	56	32	**88**	21	33	**54**
Auxiliares	8	2	**10**	64	24	**88**
Total	**521**	**345**	**345**	**190**	**118**	**308**

Nota: 67 investigadores y 253 docentes-investigadores de las IES y 15 investigadores del gobierno se enfocan en ciencias sociales

Fuente: Elaboración propia con datos del CONACYT.

Entre los factores que restringen las capacidades humanas y acciones en I+D, en primer lugar, se destaca la limitada formación (tabla 2). La mayoría, hombres y mujeres, tiene estudios de pregrado. 34.3% de los investigadores de las IES tiene maestría, 42.7% de los docentes-investigadores y 26.5% de los investigadores del gobierno. Muy pocos cursan un doctorado, 17.9%, 10.2% y 4.2%, respectivamente. Más aún, pareciera que la formación es todavía más limitada para las mujeres. Hay más hombres con estudios de posgrado, doctorado y maestría, que mujeres. Por ejemplo, entre los investigadores con doctorado, son 20 hombres y 5 mujeres en las IES y 4 hombres y 3 mujeres en el gobierno. Entre los investigadores con maestría, son 31 hombres y 17 mujeres en las IES y 25 hombres y 19 mujeres en el gobierno.

Si bien no hay datos propios de la formación de los investigadores en ciencias sociales a escala nacional, pareciera tener el mismo comportamiento. En la encuesta realizada a 194 investigadores en ciencias sociales en el marco de este proyecto, se constató que 29.4% tiene estudios de pregrado, 48.5% de maestría y solo 10.8% de doctorado. Estos también presentan diferencias en la formación según sexo: hay más hombres con doctorado. Algunos expertos señalaron que los estudios de pregrado desarrollan poco las competencias de investigación y a nivel de posgrado hay vacíos de cantidad y calidad de programas (Avelar et al., 2019). De igual manera, en las entrevistas fue un aspecto mencionado varias veces. La oferta académica en investigación y ciencias sociales frena la adopción de habilidades por parte del personal en I+D. En 2015, de 210

Tabla 2. Investigadores en el sector educativo y gobierno, según sexo y nivel educativo, 2018

	Instituciones de Educación Superior				Gobierno	
	Docentes investigadores		Investigadores		Investigadores	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Doctorado	13.8%	5.3%	21.1%	11.1%	3.8%	4.9%
Maestría	41.7%	44.0%	32.6%	37.8%	23.8%	31.1%
Licenciatura	37.6%	47.0%	44.2%	51.1%	69.5%	63.9%
Técnico	2.5%	1.5%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%
Otros	4.4%	2.3%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	**362**	**266**	**95**	**45**	**105**	**61**

Fuente: Elaboración propia con datos del CONACYT.

carreras disponibles, solo 81 eran en ciencias sociales (CONACYT, 2017b). En 2018, 1,363 se graduaron de ciencias sociales, 2,724 de educación, 1,681 de derecho, 852 de humanidades y 6,211 de economía, administración y comercio (MINED, 2019). Si bien esto corresponde a la mitad de los graduados de ese año, conviene explorar con detenimiento si los programas de estudio brindan las habilidades necesarias para la investigación.

En segundo lugar, la sobrecarga laboral también influye en las capacidades de investigación. El tiempo dedicado a tareas administrativas y docencia, en el caso de las IES, limita el ejercicio investigativo (Avelar et al., 2019; Rivera de Parada, 2020). Por ejemplo, CONACYT registra un promedio de 11.7 horas a la semana dedicado a la investigación en las universidades y 7.9 en los institutos. En el caso de los investigadores encuestados en el marco de este proyecto, 1 de cada 4 manifestó dedicar entre 40 y 60% de su tiempo, es decir, alrededor de 3 días a la semana. La mayoría piensa que no es suficiente el tiempo asignado a sus actividades de investigación. Según USAID, la sobrecarga laboral, junto a la falta de formación, son indicadores de la deficiencia en la cantidad y calidad de investigación en el país (USAID, 2012). Hay casos en los que investigadores capacitados están trabajando como docentes a tiempo completo (USAID, 2012).

No reconocer la importancia de la investigación para el desarrollo social es otro de los factores que influyen en las capacidades, tanto humanas, como institucionales. Según los expertos entrevistados, valorar la producción científica ayudaría a visibilizar la necesidad de formación en ciencias sociales, valorar más la profesión de los investigadores e incrementar la inversión en I+D desde distintos sectores. Prueba de ello es que, entre los 197 investigadores en ciencias sociales encuestados en el marco de este proyecto, 68.6% considera que no hay oportunidades de carreras atractivas para los investigadores en El Salvador. En esto, la influencia del sector educativo es clave. Tiene la capacidad de generar conciencia de la necesidad de investigaciones de calidad; sin embargo, no se ha estimulado lo suficiente la curiosidad innata de conocer y descubrir, así como tampoco se ha propiciado la investigación como uno de los mejores métodos de aprendizaje (Rivera de Parada, 2020; Calles, 2013). Si bien hay docentes que se esfuerzan en incentivar la investigación, la comprensión de la información y una conciencia crítica y creativa, no es una respuesta sistemática de la enseñanza salvadoreña (Rivera de Parada, 2020). Por otra parte, el sistema educativo también tiene la capacidad de impulsar más investigación educativa que fomente mejoras en la educación y, por ende, en el capital humano y las capacidades de investigación.

Por último, la ausencia de una agenda de investigación también incide en las capacidades. En 2012, USAID reconoció que no existía un sistema que impulsara la adopción seria de acciones de I+D (USAID, 2012). Al respecto, los expertos entrevistados señalaron la importancia de tener una instancia que promueva sistemáticamente la investigación en ciencias sociales, ya que permitiría invertir en I+D con base en una agenda, desarrollar programas que brinden información permanente, propiciar mayor articulación en el trabajo investigativo e intercambio de conocimiento y facilitar una toma de decisiones informada. De esta manera, se genera más oportunidades y mayor acumulación de capacidades.

Recursos para la investigación

Los recursos, tanto financieros, como físicos y técnicos, también tienen incidencia en la generación de oportunidades y capacidades. A su vez, estos van de la mano de una agenda de investigación, institucional y nacional, y del reconocimiento que la producción científica es clave para el desarrollo social. Según los expertos entrevistados y los datos del CONACYT, sí se registran recursos, pero son limitados. Pareciera que la I+D sigue sin ser prioridad, por lo que, a continuación, se explora si las instituciones cuentan con la inversión y los instrumentos necesarios.

El Salvador invierte muy poco en I+D, razón por la cual está detrás en este tema a nivel regional (USAID, 2012). En 2018, dicha inversión corresponde a 0.1% del PIB, ubicándose en la posición 131 de 140 economías en este indicador del Índice de Competitividad Global (Foro Económico Mundial, 2019). Si bien en los países de desarrollo, como los de la región latinoamericana, no ha habido una inversión significativa en I+D (GDN, 2020), sin duda, las condiciones económicas influyen en ello y, por ende, en el funcionamiento del sistema de investigación. Bolivia tiene un desarrollo humano alto e ingresos medio bajos e invirtió 0.2% del PIB en 2019 y Costa Rica con un desarrollo humano muy alto e ingresos medio altos invirtió 0.5%. Ciertamente, esto ha influido en el tamaño del sector y sus capacidades: en ambos países hay un mayor número de investigadores, una proporción más alta de profesionales con doctorado y maestría y mayor producción, en comparación con El Salvador.

Entre las barreras que tiene el país para tomar ventaja en la frontera del conocimiento, se destaca la disponibilidad del recurso humano e instituciones capacitadas (Ruiz-Arranz et al., 2019). El promedio de inversión en I+D en el sector educativo y gobierno es de US$12,470 miles por año, siendo todavía menor el promedio de inversión en ciencias sociales[15] (CONACYT, 2016). En 2018, en las IES, se asignaron US$15,486.5 para I+D, de los cuales 44.2% fue para ciencias sociales, seguida por ingeniería y tecnología (26.3%) y ciencias médicas (11.7%). En el gobierno, fueron US$13,529.5, de los cuales 38.0% fue para ciencias sociales, siendo mayor la inversión en ciencias agrícolas (43.9%). Tomando en consideración el monto y la cantidad de proyectos en ciencias sociales, en específico, el gobierno invierte más por proyecto que las IES: US$467.7 miles para cada uno de los 11 proyectos, contra US$26.7 miles para cada uno de los 256. Surge, entonces, la duda si conviene tener mayor cantidad de proyectos de I+D con menos asignación presupuestaria o, bien, tener menos proyectos y más fondos para cada uno de estos. También inquieta el tipo de investigación que se puede financiar con pocos recursos, su alcance y calidad, así como también la razón por la cual las instituciones del sector educativo no se destacan por tener proyectos de investigación con altos montos de financiamiento.

Por otra parte, tal como se constata en la tabla 3, 56.9% de los gastos en I+D de las IES son corrientes y 43.1% son de capital, mientras que, en el gobierno, solo 9.1% son de capital. Esto repercute la disponibilidad de recursos físicos y técnicos para desarrollar las acciones de investigación de cualquier área científica. Por ejemplo, las IES invierten 43 de cada 100 dólares en equipos, instrumentos, edificio y softwares y el gobierno solo nueve. Además, los

15 En 2018, las universidades y los institutos invirtieron US$6,837.45 en I+D enfocado en ciencias sociales y el gobierno, US$5,145.07.

Tabla 3. Gastos internos en I+D en el sector educativo y gobierno, 2018

	Instituciones de Educación Superior	Gobierno
Gastos corrientes	***$ 8,814.93***	***$ 12,294.73***
Gastos salariales de personal de investigación	$ 4,814.78	$ 5,873.77
Gastos salariales a técnicos y auxiliares	$ 232.90	
Otros gastos corrientes	$ 3,767.25	$ 6,420.96
Gastos de capital	***$ 6,671.56***	***$ 1,234.81***
Equipos e instrumentos	$ 1,701.96	$ 267.00
Terreno y edificio	$ 4,626.55	$ 927.30
Adquisición de software	$ 343.06	$ 40.51
Gastos I+D	**$ 15,486.49**	**$ 13,529.54**

Fuente: Elaboración propia con datos del CONACYT.

datos del CONACYT dejan entrever que cada sector es el principal proveedor de recursos para I+D. En 2018, del monto presupuestado de las IES, 74.5% lo financia la institución, seguida por cooperación internacional (14.9%) y empresa privada (7.4%). El gobierno, por su parte, financia casi su totalidad (99.2%) y cooperación lo restante.

Respecto a recursos, como infraestructura y tecnología, las unidades de investigación, tanto del sector educativo, como del gobierno, cuentan con múltiples espacios y recursos para realizar actividades de investigación (CONACYT, 2019b). Las IES tienen salas de oficina (82.3%), laboratorio (61.5%), campo experimental (28.2%) y talleres (25.2%). El gobierno, salas de oficina (60%), laboratorio (53.9%) y campo experimental (15.4%). En cuanto a recursos tecnológicos, a pesar de que en el ámbito nacional hay un déficit de infraestructura digital y dificultades de conectividad, la mayoría de las instituciones de investigación tiene acceso a internet e instrumentos para producir y difundir investigación. Según los datos del CONACYT, la mayoría de las instituciones de educación superior y del gobierno tiene computadoras, servidores, red de área local, conexión a internet, acceso a bibliotecas virtuales y bases de datos, entre otros recursos.

En suma, en El Salvador, el sector de investigación y desarrollo en general es pequeño y aún más el de I+D en ciencias sociales. Todavía no se conoce la totalidad de instituciones y recurso humano que lo conforman ni la inversión real en acciones de I+D, pero la información disponible del sector educativo y gobierno refleja cierto nivel de capacidad humana e institucional. El contexto económico, la limitada oferta académica, la sobrecarga laboral, la falta de reconocimiento de la importancia de la investigación y la ausencia de una agenda de investigación, entre otros factores, influyen en la acumulación de competencias. Sin duda, estos aspectos también tienen impacto en los recursos disponibles para I+D.

El país cuenta con las condiciones mínimas para el funcionamiento óptimo del sistema general de investigación. Todavía es necesario que nacional e institucionalmente se asuma el compromiso de generar conocimiento, capacidades y acciones de I+D y de asignar recursos para ello, de tal manera que se garantice la sostenibilidad de los proyectos de investigación. A su vez, es indispensable reconocer el impacto que podría tener la investigación en ciencias sociales, de

manera particular, en el desarrollo del país y valorar su profesión, a fin de aumentar la oferta académica, las oportunidades y las capacidades ad hoc. Esto permitirá fortalecer las competencias, no solo de producción, sino también de difusión, y propiciará el uso de los resultados de investigación en la política pública. Por ejemplo, una de las limitaciones en la planificación estratégica en el manejo de la crisis del COVID-19 por parte del Estado fueron las dificultades en la disponibilidad de información para focalizar las medidas para contrarrestar impactos de la pandemia e identificar la población vulnerable a quien asignar los beneficios (Cuéllar et al., 2020). En ese sentido, estos autores recomendaron generar conocimiento acerca de quién es la población vulnerable en dicho contexto y otra información necesaria, como evaluaciones de prefactibilidad técnica y financiera, para una mejor delimitación de la protección social. Ciertamente, esto es un claro ejemplo de que la investigación en ciencias sociales puede influir de manera eficaz y eficiente en el desarrollo del país. Sin duda, contar con organizaciones sólidas y personal capacitado ayudaría a potenciar una producción científica de calidad.

2.5. Contexto internacional

Participación en organismos y redes internacionales de investigación

El contexto internacional impacta directamente en el desarrollo del sistema de investigación en ciencias sociales de cada país, ya sea de manera positiva o negativa. La integración de los sistemas de investigación a redes internacionales estimula la producción de conocimiento, aumenta el acceso a conocimiento externo, y fomenta el intercambio académico que permite importar capacidades extranjeras (GDN, 2019). Sin embargo, un estudio realizado por el Centre for Economic and Social Development (CESD) y GDN (Glutting et al., 2020) sobre el sistema de investigación en ciencias sociales de Myanmar constata que la influencia internacional también podría ir en contra de su fortalecimiento. De hecho, se advierte que la investigación encargada por los donantes podría definir de manera desproporcionada la agenda y el sistema de investigación nacional en ciencias sociales, a menos que una parte de los fondos externos contribuya con el desarrollo de capacidades locales de investigación. Esta sección explora la influencia del contexto internacional en el desarrollo del sistema de investigación en ciencias sociales salvadoreño, tomando como punto de partida informes previos, y aportando datos más actualizados disponibles en las encuestas que se han conducido como parte del proyecto: Assesing Social Science Research Systems in El Salvador.

Los asocios con la comunidad internacional mejoran la calidad de la educación, fomentan la innovación y abren nuevas oportunidades laborales para los investigadores (Sloan & Arrison, 2011). La cooperación internacional que fomenta el desarrollo de las ciencias sociales permite al sistema nacional de investigación acceder, por un lado, a capacidades que incrementan la competitividad de sus resultados en el ámbito internacional, y por otro, a nuevas fuentes de financiamiento para realizar los proyectos de investigación. La apertura de un país a la comunidad internacional aumenta su capacidad de producir y difundir los resultados de las investigaciones, y la presencia de organismos internacionales en su elaboración estimula la participación de entidades gubernamentales y del sector empresarial privado (Sloan & Arrison, 2011).

El contexto internacional genera diversas oportunidades para que El Salvador desarrolle una economía basada en el conocimiento. Actualmente, El Salvador cuenta con oficinas de diferentes organizaciones internacionales, entre las que se cuentan catorce del Sistema de Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2020), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Embajada de Francia, 2020), así como seis agencias de cooperación (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018). Estas instituciones ofrecen fondos, canalizados a través de instituciones de gobierno, para proyectos de desarrollo e investigación en los que participan centros de pensamiento e instituciones de educación superior (IES); de esta forma, articulan a los diferentes actores nacionales, públicos y privados. Adicionalmente, las organizaciones integradas con los organismos y redes mundiales de investigación tienen mayor acceso a publicaciones y ponencias extranjeras (Sloan & Arrison, 2011).

Los tanques o centros de pensamiento proponen políticas públicas basadas en investigación, y articulan problemáticas nacionales e internacionales (McGann, 2021). El Salvador cuenta con catorce centros de pensamiento, todos integrados a redes internacionales de investigación (McGann, 2021). Tres de estos pertenecen a la Red de Investigación de América Latina y el Caribe del BID, junto a cuatro universidades: la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) y la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE) (BID, 2019). FUNDAUNGO y FUSADES pertenecen, además, a la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP). Las redes internacionales de investigación inciden directamente en la capacidad de las instituciones de acceder a información, lo que está vinculado con la calidad de sus resultados (Sloan & Arrison, 2011).

La calidad de los productos de investigación generados por los centros de pensamiento salvadoreños ha sido reconocida internacionalmente. En 2020, por ejemplo, FUSADES fue nombrado por el índice Global Go To Think Tank de la Universidad de Pensilvania como el mejor centro de pensamiento de El Salvador, y número doce en Centro y Sur América (McGann, 2021). Actualmente, está afiliado a 29 instituciones del sector público, privado e internacional. En esta última categoría se encuentran Southern Voice, Gender Action Project, Coalición Latinoamericana por la Excelencia Docente, y, en el marco de la pandemia por COVID-19, el Grupo de Trabajo sobre Inclusión Social, entre otros.

El Salvador está bastante integrado a la comunidad internacional, pero su capacidad de aprovechar los recursos en investigación está vinculada con la calidad de la educación superior. Además, las IES cumplen doble función en el sistema de investigación en ciencias sociales: producir conocimiento y capacitar al recurso humano de investigación. Ambos objetivos están interconectados al recurso humano y a las capacidades instaladas disponibles, percibidas como insuficientes para uno de los entrevistados.

Actualmente el país cuenta con 39 instituciones de educación superior, pero están rezagados en la producción de investigación en ciencias sociales. Solo siete instituciones publicaron, al menos, un

artículo entre 2009 y 2012, y únicamente una de cada cinco produjo una o más investigaciones de impacto internacional (USAID, 2012). De acuerdo con datos de Scimago Journal and Country Rank (2021), que mide el número de documentos publicados por país en diversas áreas de investigación, así como otros indicadores (número de citas en las publicaciones, número de citas promedio por documento, entre otros), El Salvador cayó 31 posiciones en la publicación de documentos de investigación en ciencias sociales entre 2015 y 2020; en 2020 publicó 12 documentos de investigación en ciencias sociales menos que en 2015 (36 y 24, respectivamente). En dicho periodo, la tendencia prevalente ha sido a la baja, mostrando una única reversión en 2019, cuando el país subió 14 posiciones respecto a 2018 y publicó 13 artículos más (Scimago, 2021).

El Salvador, en 2020, fue el cuarto país de Centroamérica con menor producción agregada de investigación en ciencias sociales, solo superando a Nicaragua (Scimago, 2020). De acuerdo con el ranking de publicación de documentos de investigación en ciencias sociales de Scimago (2021), para 2020 El Salvador produjo 88.9% menos que Costa Rica, el país de Centroamérica con mejor posición en el ranking; 59.3% menos que Guatemala y 41.5% menos que Honduras (Scimago, 2021).

El Salvador también está rezagado en producción de investigación en ciencias sociales respecto a países similares fuera de la región de América Latina. El Salvador, Birmania y Nigeria son países de diferentes regiones geográficas y contextos, pero con un Índice de Desarrollo Humano similar (PNUD, 2020a), y los tres están clasificados por el Banco Mundial en la categoría de "países de ingresos medio-bajos". Birmania, un país de ingreso medio bajo y poco crecimiento económico (Banco Mundial, 2020), se posiciona en el lugar 114 del ranking de Scimago (2021). En 2020, El Salvador produjo 72% menos artículos de investigación en ciencias sociales que Birmania (Scimago, 2021), a pesar de que El Salvador tiene 4.8 veces el número de investigadores por millón de habitantes que se han estimado para este país (Glutting et al., 2020). Nigeria, por otro lado, se posiciona en el lugar 41, 106 antes que El Salvador. En 2020, Nigeria produjo más de 2,100 artículos de investigación en ciencias sociales contra 24 de El Salvador (Scimago, 2021), aun cuando la estimación de investigadores por millón de habitantes para este país fue levemente inferior a la salvadoreña (National Centre for Technology Management (Egbetokun et al. 2020).

Se identifican dos factores potencialmente vinculados con la baja producción de investigación en ciencias sociales: la recepción de los tomadores de decisiones respecto a los resultados de esa investigación y la escasez de recurso humano capacitado dentro de plantilla docente. Algunos resultados han contado con el apoyo de los tomadores de decisiones y otros no; las instituciones que corresponden a la segunda categoría, muchas veces han sido excluidas en el proceso de elaboración de políticas públicas, y encuentran obstáculos adicionales para realizar su labor (Packard, 1997). Además, la disponibilidad de recurso humano con grado académico de postgrado determina tanto la cantidad como la calidad de la investigación producida. Solo un tercio de los docentes universitarios están acreditados con maestría y 2.3% con doctorado (MINED, 2019). Entre los investigadores en ciencias sociales encuestados en el marco de esta investigación, la mitad ha cursado maestría y 11% posee doctorado. Estos resultados

esbozan la escasa formación de los académicos al comparar, por ejemplo, con los resultados de Nigeria, donde 36% de los investigadores tienen maestría y poco más de la mitad poseen doctorado (Egbetokun et al., 2020).

La calidad de la investigación producida en IES, medida internacionalmente, es baja. La literatura indica que, en países desarrollados, la mayor parte de los productos de investigación se producen en colaboración con universidades, que están al centro del sistema (Godin & Gingras, 2000). En el caso de El Salvador, la UES es, por un lado, la universidad que gradúa a más profesionales y la única universidad pública del país. Sin embargo, USAID (2012) señala que los artículos de investigación de la UES han sido citados 40% menos que los de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En el sector de educación superior la relación entre integración en el contexto internacional y producción de investigación es más evidente. El 75% de la investigación que producen las IES en El Salvador proviene de dos universidades: la Universidad de El Salvador (UES) y la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) (USAID, 2012). Ambas mantienen vínculos con redes transnacionales de investigación. La UES es parte de la Red de macrouniversidades, cuyo propósito es fomentar la participación en proyectos de investigación para las universidades públicas de América Latina. La UCA forma parte de la Asociación de Institutos y Universidades Jesuitas, que cumple dos funciones: incorpora al país recurso humano con experiencia internacional en investigación e incrementa la movilidad externa de los investigadores que laboran en la institución. Además, las universidades privadas forman parte de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES), miembro fundador de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (CLARA), cuyo propósito es interconectar a investigadores y facilitar la difusión de la información (AUPRIDES, 2019).

Redes profesionales, becas y programas de intercambio académico

La comunidad internacional también ofrece la oportunidad de importar las capacidades necesarias para impulsar al sistema de investigación en ciencias sociales, y estimula el desarrollo económico. El recurso humano capacitado en el exterior puede ser un puente que permita coordinar la inversión extranjera en El Salvador, lo cual impacta directamente en el crecimiento económico (Li & Liu, 2005). Los programas de becas e intercambios académicos y profesionales son un puente para adquirir habilidades escasas en el país.

La apertura y colaboración con otros países abre oportunidades de becas para especialización en ciencias sociales para estudiantes salvadoreños. De acuerdo con datos de CONACYT, entre 2006 y 2016 un total de 2,985 estudiantes salvadoreños recibieron beca para sus estudios de grado o posgrado en el extranjero de parte de organismos internacionales y gobiernos de países amigos (CONACYT, 2017b). 21.6% de las becas disponibles en 2016 provenían de la Organización de Estados Americanos (OEA). Adicionalmente, el gobierno de El Salvador, a través del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL), durante el mismo período facilitó a 113 salvadoreños la oportunidad de cursar sus estudios de grado y postgrado en el extranjero.

Los programas de becas e intercambios en el extranjero permiten a los salvadoreños especializarse en diferentes áreas de ciencias sociales, dada la oferta limitada disponible en el país. Sin embargo, solo el 34.5% de becas para el extranjero se otorgaron para estudios de maestría y 0.9% para doctorado (CONACYT, 2017b), niveles académicos que construyen las capacidades que dan sostenibilidad al sistema nacional de investigación en ciencias sociales, de acuerdo con uno de los entrevistados. Además, desde 2013 el número de estudiantes becados presentaba una tendencia a la baja (CONACYT, 2017b). De igual forma, el sistema de educación básica nacional no ha generado las competencias necesarias para aprovechar las oportunidades de movilidad externas particularmente debido a la deficiencia existente en el manejo del idioma inglés.

En los últimos cinco años, el número de salvadoreños que han recibido becas para estudiar en el extranjero mantiene una tendencia a la baja. De acuerdo con datos del Ministerio de Relaciones Exteriores (2021), en 2016 se otorgaron 214 becas, donde el 8% estaban destinadas a estudios de maestría y el 0.5% a doctorado. En 2019 el número de becarios se redujo a 145, de los que el 18% cursarían una maestría; no se otorgó becas para estudios de doctorado en ese año. En 2020 solamente se otorgaron 38 becas, de las cuales 3 fueron para maestrías (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021) posiblemente debido a las restricciones y las incertidumbres surgidas de la pandemia por COVID-19. Este registro contiene únicamente datos de cooperantes internacionales y gobiernos de países amigos, y se excluyen fuentes privadas de becas, de modo que los datos podrían no ser precisos.

El bajo dominio del inglés es una barrera para la producción de investigación para profesionales hispanohablantes (Moreno et al., 2012). Escribir artículos de investigación en inglés se percibe como 24% más difícil que escribirlos en español (Moreno et al., 2012). Esto cobra especial relevancia para el desarrollo de la investigación en ciencias sociales debido a que las diez revistas más importantes de ciencias sociales se publican en inglés (Scimago, 2021).

El Salvador está calificado como un país con bajo dominio del idioma inglés en el Índice de Fluidez en Inglés (EIP, por sus siglas en inglés). El país se ubica en la posición 56 de 100, pero entre 2019 y 2020 subió cuatro posiciones, de 60 a 56, y ha mejorado sostenidamente desde 2017 (Education First, 2020). No se identificó un dato oficial acerca del porcentaje de la población que habla y/o escribe en inglés ni se cuenta con la proporción correspondiente para los investigadores en particular. No obstante, 12% de los académicos encuestados en el marco de este estudio indicaron haber trabajado en un artículo publicado en inglés durante los últimos 3 años. En este contexto, el gobierno tiene la responsabilidad de construir las habilidades para aprovechar los beneficios derivados de la participación nacional de actores internacionales, y de generar incentivos para apropiarse de estos beneficios.

El contexto internacional también genera obstáculos para el desarrollo del sistema de investigación en ciencias sociales en El Salvador. La literatura sugiere que cuando los investigadores concursan por financiamiento externo se ven obligados a dejar de lado temáticas consideradas controversiales (Laudel, 2006). En el contexto de El Salvador, con poca inversión nacional en ciencias sociales, la alta

dependencia de las instituciones e investigadores enfocados en esta rama conllevaría a desplazar temas coyunturales nacionales en favor de prioridades internacionales. Es indispensable incrementar la disponibilidad de fondos públicos que, en conjunto con el financiamiento internacional, garanticen que la investigación en ciencias sociales responda a las necesidades nacionales como al stock de conocimiento internacional.

En conclusión, el contexto internacional brinda solidez y sostenibilidad al sistema de investigación en ciencias sociales, si el país cuenta con las capacidades para acceder a este. El Salvador cuenta con instituciones que han establecido exitosamente asocios internacionales que han contribuido a crear y desarrollar investigación en ciencias sociales. Sin embargo, todavía no cuenta con las condiciones necesarias para que esta integración se convierta en una herramienta para consolidar las capacidades de investigación nacionales; en particular, es indispensable que el sistema educativo refuerce la enseñanza del idioma inglés, incremente la disponibilidad de becas para formación en ciencias sociales, e incentive la generación de conocimiento de calidad mundial desde los centros de educación superior.

2.6. Limitaciones

La identificación de distintos factores sociopolíticos, económicos e internacionales que podrían ejercer influencia en el desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales ha enfrentado varias limitaciones.

En primer lugar, no fue posible identificar, al menos, un estudio previo que analice específicamente la evolución y el desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales en sus funciones de producción, difusión y uso de la investigación en las políticas públicas. Sin embargo, una evaluación reciente de USAID (2012) sobre la situación de la educación superior en el país ofrece algunos elementos sobre las capacidades de investigación de este sector que han sido tomadas en cuenta. Este análisis no incluye información relacionada con la investigación generada por los centros de pensamiento u otras organizaciones que hacen investigación que sean distintas a las universidades e institutos tecnológicos de educación formal. De allí que, el análisis ha sido realizado con base en información disponible proveniente de diversas fuentes, las cuales generalmente abordan algún aspecto relacionado con el tema de interés. Existe un vacío de investigación en cuanto a las características, capacidades y poder de influencia de los cuatro actores (IES, gobierno, industria y sociedad civil) que conforman el sistema de investigación. Sin embargo, en este primer esfuerzo de evaluación del sistema de investigación en ciencias sociales, la información disponible ha permitido caracterizar mejor las capacidades de I+D de las IES y el gobierno que aquellas concernientes a la industria y la sociedad civil.

En segundo lugar, en el país no existe una institución pública que sea responsable o líder en el área de investigación en ciencias sociales específicamente. Tampoco se identifica una entidad que le dé seguimiento permanente al sector I+D y sistematice la información relacionada con este, particularmente en lo que respecta al desarrollo de las ciencias sociales. Si bien es cierto el CONACYT ha hecho esfuerzos para generar alguna información sobre las actividades científicas y tecnológicas, las estadísticas disponibles están desactualizadas y no

siempre están desagregadas para conocer el detalle específico de las ciencias sociales en materia de I+D.

En tercer lugar, alguna información simplemente se mantiene inexistente, está desactualizada o es inconsistente. Al respecto, se encontró que no existe un indicador sobre el porcentaje de población salvadoreña que domina el idioma inglés, ni literatura aplicada al caso salvadoreño sobre ética y calidad de la investigación, uso de la investigación en los procesos de política pública, y uso de la investigación para favorecer el clientelismo político. También la información sobre algunos aspectos de interés para este análisis, presente en las páginas web de varias instituciones es limitada o no es uniforme. Además, prevalecen inconsistencias entre los registros de CONACYT, la base de datos proporcionada por la Red de Investigadores Salvadoreños (REDISAL), y las páginas web de las instituciones académicas y del gobierno.

Reconociendo las limitaciones aquí listadas, el presente análisis debe considerarse un trabajo de carácter exploratorio. Este tiene la virtud de establecer el contexto general del sistema de investigación en ciencias sociales, logrando definir algunas tendencias relacionadas con los factores que ejercen influencia sobre el mismo, e identificar tópicos de interés que pueden ser investigados a profundidad posteriormente. Este análisis pretende llenar los vacíos de conocimiento que existen en torno al sistema de investigación en ciencias sociales de El Salvador; y, además, busca contribuir al debate informado sobre cómo fortalecerlo y aportar mejores insumos para la formulación de políticas públicas de desarrollo.

2.7. Conclusiones y reflexiones

En El Salvador, los retos del desarrollo social existentes representan una oportunidad para las ciencias sociales. El fortalecimiento del sistema de investigación en esta rama del conocimiento y su vinculación con la solución de problemas sociales estratégicos darían lugar no solo al diseño e implementación de mejores políticas de desarrollo sino también enriquecerían el debate público. Sin embargo, en la práctica, este sistema aún no es reconocido formalmente como tal y su nivel de desarrollo podría considerarse relativamente incipiente. Aunque lo social ha venido ganando importancia en las políticas públicas, el marco institucional vigente para la investigación en esas áreas no necesariamente distingue la presencia de un entramado que sirva de soporte a la investigación en ciencias sociales que esté vinculado con una agenda nacional de desarrollo. Cambiar esta situación exige visibilizar, de alguna manera, la existencia de un sistema de investigación en ciencias sociales que cuente con una institucionalidad propia, objetivos claros, y, además, es identificado como tal por los actores que lo conforman. Es decir, el sistema podrá consolidarse y ganar reconocimiento, en la medida que cuente con recursos para desarrollar su labor, y las normas formales e informales que lo rigen sean asumidas conscientemente por los actores que lo componen. La institucionalidad es una cualidad que puede estar no solo presente en mayor o menor medida en el sistema, sino también determinar su funcionamiento y las relaciones entre los actores en un contexto específico.

Diferentes factores afectan el desempeño del sistema de investigación y su vinculación con la promoción del desarrollo, a través de la definición de políticas públicas basadas en evidencia. Estos factores pueden

ser sociopolíticos, económicos o derivados del contexto internacional. Es importante recordar que la investigación no es un atajo al encuentro de soluciones para mejorar la calidad de vida y el bienestar social, sino la base para generar un debate informado entre diferentes opciones viables en un contexto particular.

A partir del análisis del contexto sociopolítico, se concluye que la evolución del sistema de investigación en distintos escenarios históricos ha dependido de la valoración de las ciencias sociales y su conceptualización en el entorno político. También ha influido la percepción de distintos actores sobre cuál debería ser su papel en la definición de políticas y programas para mejorar el nivel de bienestar. En general, el marco institucional para la investigación es bastante rudimentario, y, a la fecha, no reconoce un ecosistema propio para la investigación social. El grado de influencia de la investigación en ciencias sociales en los tomadores de decisiones y la opinión pública ha variado según el ciclo político y cuánto se ha respetado el Estado de derecho y las libertades individuales, principalmente la libertad de expresión. Actualmente, el resurgimiento de rasgos autoritarios en el régimen de gobierno podría traducirse en un retroceso en la autonomía e independencia intelectual de la investigación social. Dos atributos ganados gracias a los avances en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática posteriores a la finalización del conflicto armado, a principios de la década de los noventa.

Considerando el contexto económico, el sistema de investigación en ciencias sociales cuenta con condiciones mínimas para su funcionamiento óptimo. En el país, el sector de I+D es relativamente pequeño, y más aún el de las ciencias sociales. Su desempeño ha dependido de varios factores que contribuyen con la acumulación de capacidades, tales como: la inversión en I+D, la oferta académica, los incentivos y las oportunidades laborales para fortalecer las competencias en investigación. Desde el punto de vista de la formación de competencias para investigar, se afirma que aún no existe un estándar claro de calidad ni tampoco se potencian estas habilidades en todos los niveles del sistema educativo. Esto último podría contribuir a desarrollar en las personas mayor aprecio por el pensamiento independiente y el valor de la investigación en la solución de problemas que afectan la vida de las personas. Existen otros factores que también determinan el desempeño del sistema de investigación, entre los cuales se destacan tanto la falta de reconocimiento a la importancia de la investigación en ciencias sociales como la ausencia de una agenda nacional para producir conocimiento en esa rama. A esto se suma la carencia de planes institucionales y recursos para desarrollar capacidades propias para la producción, difusión y uso de la investigación; y, además, la existencia de un mercado laboral relativamente estrecho (escasa oferta y demanda) para quienes quieren dedicarse a la investigación. Todo lo anterior podría explicar por qué la mayoría de las instituciones dedicadas a la investigación podrían estar lejos tanto de alcanzar estándares mínimos de calidad en su producción científica, como de aprovechar las oportunidades que ofrece el ámbito internacional para avanzar las ciencias sociales.

Efectivamente, el contexto internacional puede ser una fuente de oportunidades para nutrir el sistema de investigación nacional, en tanto este cuente con capacidades mínimas para poderlas aprovechar. En el caso de El Salvador, la evidencia sugiere que no

todas las instituciones de investigación tienen las mismas capacidades para insertarse exitosamente en redes internacionales de colaboración, intercambiar conocimientos y gestionar recursos para desarrollar productos de investigación en ciencias sociales. Dado el incipiente desarrollo del sistema de investigación en ciencias sociales de El Salvador, es posible que las conexiones con el ámbito internacional no sean siempre una herramienta que ayude a consolidar las capacidades nacionales. Vistas desde otro ángulo, tales conexiones podrían operar en su contra, al facilitar la identificación de talentos desaprovechados e incentivar la fuga de cerebros. Para que esto no ocurra, es indispensable que el sistema educativo refuerce la enseñanza del idioma inglés, incremente la disponibilidad de becas para formación en ciencias sociales vinculada con oportunidades laborales atractivas, e incentive la generación de conocimiento de calidad mundial desde los centros de educación superior.

Finalmente, es importante señalar que este análisis de contexto deja entrever algunos temas sobre los cuales se podría profundizar más adelante, a fin de comprender mejor los determinantes del desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales en El Salvador. Uno de ellos se refiere a la difusión de los hallazgos de la investigación, un tema del cual existe muy poca información. Al respecto, sería interesante conocer en qué medida los investigadores desarrollan competencias para comunicar los resultados de su trabajo, a diferentes audiencias y a través de varias plataformas (distintos tipos de publicaciones impresas o digitales, uso de redes sociales, podcasts, radio, etc.). También sería oportuno indagar si las instituciones dedican suficientes recursos para el desarrollo e implementación de estrategias de comunicación que mejoren la difusión de las investigaciones y su incidencia en las políticas públicas. Además, sería pertinente conocer si existen incentivos y recursos para desarrollar y/o actualizar los programas de formación inicial o continua dirigidos a científicos sociales. Al mismo tiempo, sería valioso examinar cuáles son las oportunidades que ofrece el mercado laboral para atraer y retener a profesionales de las ciencias sociales que quieran dedicarse a la investigación en el país. Se espera que a través de la investigación se amplíe el conocimiento sobre el contexto que enmarca la investigación en esta área, los factores que condicionan el desempeño de los sistemas de investigación en ciencias sociales y su contribución al debate democrático, la deliberación y el desarrollo sostenible, conocer las fortalezas y desafíos de dicho sistema en El Salvador e identificar posibles áreas de mejora.

3. Mapeo de actores (y muestra)

Puntos a destacar

- Se identificaron 212 instituciones en el ecosistema de investigación social salvadoreño, incluyendo 79 de gobierno y financiadoras de investigación, 34 de IES, 86 de sociedad civil y 13 del sector privado. De estos, 79 se consideran productores, mientras que 133 son potenciales usuarios.
- En el país, los actores identifican dispersión entre sí y relaciones no articuladas, ni permanentes. Por esto, distinguen una ausencia de reconocimiento de formar parte de un sistema funcional.
- Los investigadores expresan tener sobrecarga laboral por actividades administrativas que se desempeñan paralelas a las investigativas, así como falta de incentivos para dedicarse a la investigación.

- Los actores consideran que existe baja valoración de las ciencias sociales en el país, y que no existe una cultura orientada a hacer investigación social. En esta misma línea, tampoco consideran que prevalezca la cultura científica o de toma de decisiones basadas en evidencia.

En El Salvador existe un grupo amplio de actores que comparten interés en el uso de los hallazgos de la investigación en ciencias sociales, ya sea que también estén o no involucrados en su producción o financiamiento. El objetivo de este informe es proporcionar una descripción de este conjunto de actores, incluyendo un vistazo general de las macro categorías de instituciones que influyen, que están interesados o son capaces de hacer investigación en ciencias sociales, así como una evaluación de su importancia relativa, sus limitaciones y las interacciones que existen entre ellos.

En el marco de este proyecto, se incluyen dentro de las ciencias sociales a las siguientes áreas de conocimiento: Economía, Ciencias Políticas, Antropología, Asuntos internacionales, Etnografía, Demografía, Desarrollo, Geografía, Educación, Estudios de género, Historia, Derecho, Lingüística, Administración, Filosofía, Psicología, Trabajo social, Administración pública, Desarrollo sostenible, Sociología, Salud Pública y Medicina social.

Para la identificación de actores se consultaron páginas web de distintas instituciones, informes, se solicitó información a instituciones públicas a través de las Oficinas de Información y Respuesta y a otras instituciones a través de correo electrónico. Mientras que la caracterización de los actores, las relaciones entre ellos y su importancia relativa –en términos de interés y poder de influencia– se realizó con base en la información obtenida a partir de grupos focales que incluyeron investigadores de distintas disciplinas y áreas de trabajo.

3.1. Identificación de actores

El primer paso para lograr los objetivos fue identificar a este conjunto de actores, centrándonos en las instituciones que se clasificaron en una de cuatro categorías principales, y estas a su vez, se separaron en subcategorías. En un principio, las subcategorías se basaron en las incluidas en el Manual de Implementación (GDN, 2020)[16], pero se agregaron algunas nuevas que se ajustan mejor a la realidad nacional. Por ejemplo, algunas organizaciones empresariales que producen investigación y algunos sindicatos que hacen uso de esta, por tanto, se incluyen en el mapeo. Las categorías y subcategorías de clasificación utilizadas son las siguientes:

- **Gobierno** (hacedores de política pública) **e instituciones que financian la investigación**
- **Instituciones de educación superior:** públicas y privadas
- **Sociedad civil:** Haciendo una distinción entre productores y usuarios:
    - *Productores*: incluyen las subcategorías: oenegés y tanques de pensamiento sin fines de lucro.
    - *Usuarios*: incluyen las subcategorías: líderes de opinión, medios de comunicación, oenegés (nacionales e internacionales) y sindicatos.
- **Sector privado (industria):** tanques de pensamiento privados con fines de lucro, gremiales y organizaciones del sector empresarial y consultoras.

16 Para ello se clasificaron siguiendo la propuesta del Manual Doing Research Assessment - Extended Toolkit (diciembre, 2020).

Se excluyeron ocho instituciones de educación superior que no ofrecen carreras en el área de ciencias sociales. En el caso de las instituciones de educación superior que poseen más de una unidad de investigación, o tienen centros de sondeos de opinión pública adjuntos, se contabilizaron como una sola institución.

El proceso de identificación de actores para el mapeo e investigadores en las áreas de ciencias sociales se benefició de los siguientes aspectos:

- La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), institución que supervisa la investigación en general, que incluye las Ciencias Sociales, genera anualmente el Registro de Investigadores Científicos Nacionales, de la Red de Investigadores Salvadoreños (REDISAL), número de investigadores en instituciones de educación superior y algunas instituciones de gobierno, lo que proporcionó un importante punto de partida.
- La Ley de acceso a información pública que garantiza el derecho a solicitar y recibir información pública por medio de las Oficinas de Información y Respuesta (OIR). Además, establece la obligatoriedad de poner a disposición del público determinada información sin necesidad de que sea solicitada. Esta herramienta fue útil para recolectar la información de las instituciones públicas incluidas en el estudio.
- El conocimiento previo de FUSADES y su experiencia en el campo de la investigación que facilitó el proceso de identificación de otras instituciones que también hacen investigación, o que la utilizan para formular políticas públicas o para diseñar programas.
- La disponibilidad del Manual de Implementación (GDN, 2019), lo que facilitó la clasificación de instituciones que conforman el conjunto de actores identificados.

Por otro lado, a pesar de que se obtuvo acceso a fuentes de información oficiales, el proceso de recolección de información tiene algunas limitantes. En general, las páginas web de las instituciones ofrecen información limitada y no uniforme. La mayoría no informan si contratan investigadores o no, ni cuántos contratan. Para conocer esta información, en algunos casos, se realizaron consultas telefónicas directas con colegas investigadores que trabajan en las instituciones incluidas en el mapeo.

Durante la elaboración del listado de investigadores en ciencias sociales también se enfrentaron dificultades. Al comparar la información en línea disponible a través de CONACYT, la base de datos proporcionada por la REDISAL y la información de las páginas web propias de las instituciones académicas y del gobierno, se identificaron inconsistencias en el número y nombre de los investigadores. En parte, esto se debe a que la base de datos de REDISAL posee muy pocos registros actualizados al 2020. Además, en algunos casos no se reporta el área de investigación de algunos investigadores. Para las instituciones públicas se solicitó un listado actualizado de investigadores a través de las oficinas OIR.

La información publicada por las instituciones que financian investigación, las del sector privado y de la sociedad civil a través de las páginas web también es limitada. En la mayoría de los casos no publican la cantidad ni los nombres de los investigadores

que contratan, y cuando lo hacen no reportan alguno o varios de los siguientes datos sobre sus investigadores: área de investigación, correo electrónico, formación académica, departamento en el que laboran. Para superar esta limitante se solicitó la información a cada una de las instituciones en estas tres categorías; sin embargo, no todas respondieron la solicitud a pesar de que se insistió en diferentes ocasiones y a través de distintos medios –correos electrónicos y llamadas telefónicas–.

Considerando lo expuesto en los dos párrafos anteriores, puede ser que el número real de investigadores en ciencias sociales que actualmente se desempeñan en las instituciones sea diferente del reportado en este mapeo. En el transcurso de la investigación se logró validar esta información. Es importante mencionar, que la realización de este trabajo ha permitido evidenciar la falta de datos sobre los actores que conforman el sistema de investigación. Este vacío de información podría llenarse si se contara con mayor voluntad política y recursos, de los que actualmente disponen el CONACYT u otras instituciones, para mantener información actualizada sobre el tamaño y el alcance de la investigación en ciencias sociales en el país.

3.2. Actores claves asociados con el desarrollo de investigaciones en ciencias sociales en El Salvador

En esta sección se presenta una descripción general de los actores que forman parte del entorno de investigación social en El Salvador. Primero se presenta información relacionada con el número de instituciones que se han identificado a la fecha en cada una de las categorías y subcategorías, y posteriormente se presentan los principales hallazgos sobre los actores que producen investigación.

Como se muestra en la tabla 4, se identificaron 212 actores vinculados con la investigación en ciencias sociales (columna 1), 79 de ellos son productores de investigación (columna 3) y 133 son usuarios (columna 6); el mayor número corresponde a las instituciones de educación superior. Se incluyeron en la categoría de productores a las instituciones que se sabe que hacen o financian investigación; sin embargo, no se pudo validar, para todas las instituciones, el número de investigadores contratados. Del total de productores, 65 instituciones confirmaron que sí contratan investigadores (columna 4), mientras que 14 instituciones no respondieron si contratan o no (columna 5).

Tabla 4. Número de actores del entorno de investigación social en El Salvador

Categoría			TOTALES		Productores (contratan investigadores)			Usuarios (No contratan investigadores)
			TOTALES (1)	AMSS (2)	Total (3)	Confirmados (4)	SR/ (5)	(6)
C1	**Gobierno y agencias financiadoras**		**79**	**63**	**23**	**16**	**7**	**56**
	C1.1	*Gobierno*	**58**	**44**	**11**	**10**	**1**	**47**
		C1.1.1 Gobierno Central	16	16	7	6	1	9
		C1.1.2 Instituciones autónomas	12	12	3	3	0	9
		C1.1.3 Instituciones descentralizadas	27	13	1	1	0	26
		C1.1.4 Consejos de investigación	1	1	0	0	0	1
		C1.1.5 Otras entidades del Estado	2	2	0	0	0	2
	C1.2	*Agencias financiadoras*	**21**	**19**	**12**	**6**	**6**	**9**
		C1.2.1 Donantes internacionales	19	17	11	6	5	8
		C1.2.2 Donantes privados internacionales	1	1	0	0	0	1
		C1.2.3 Organismos internacionales	1	1	1	0	1	0
C2	**Instituciones de Educación Superior**		34	28	34	34	0	0
	C2.1	Públicos	5	4	5	5	0	0
	C2.2	Privados	29	24	29	29	0	0
C3	**Sociedad Civil**		86	62	10	8	2	76
	C3.1	Organizaciones no gubernamentales (ONG)	6	5	3	3	0	3
	C3.2	Centros de pensamiento sin fines de lucro	8	7	7	5	2	1
	C3.3	Líderes de opinión	10	1	0			10
	C3.4	Medios de comunicación	46	35	0			46
	C3.5	Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales	13	11	0			13
	C3.6	Gremiales	3	3	0			3
C4	**Sector Privado (industria)**		13	13	12	7	5	1
	C4.1	Centro de investigación privado	1	1	1	1	0	0
	C4.2	Organizaciones empresariales	5	5	4	3	1	1
	C4.3	Empresas consultoras	7	7	7	3	4	0
	TOTAL		212	166	79	65	14	133

1/ No se recibieron datos de parte de la institución.

Fuente: Elaboración propia a partir de metodología del DRA (GDN, 2020) con información recolectada en mapeo.

En la tabla 5 se presenta una clasificación de los productores de investigación de acuerdo con el número de investigadores que contratan. Solo se conoce la cantidad de investigadores contratados para 54 de las 65 instituciones que se sabe que sí los contratan –ya sea por respuesta directa o por conocimiento del entorno–. De las 11 instituciones restantes, dos indicaron que no podían compartir el número de contrataciones ni la información de contacto por motivos de confidencialidad. Adicionalmente, para 7 instituciones no se encontró información disponible en sus páginas de internet, y aunque se les consultó no se obtuvo respuesta. Finalmente, durante el proceso de llamadas telefónicas para dar seguimiento al llenado de la encuesta, se identificaron dos instituciones cuyos investigadores ya no formaban parte de la institución.

Tabla 5. Clasificación de actores que producen investigación social en El Salvador, de acuerdo con el número de investigadores que contratan**

Categoría		Productores**	Tamaño según número de Investigadores				
			1-5	6-10	11-15	16-20	>20
C1	**Gobierno y agencias financiadoras**	**14**	**8**	**3**	**2**	**1**	**0**
C1.1	*Gobierno*	**10**	**7**	**1**	**1**	**1**	**0**
C1.1.1	Gobierno Central	6	5	1	0	0	0
C1.1.2	Instituciones autónomas	3	1	0	1	1	0
C1.1.3	Instituciones descentralizadas	1	1	0	0	0	0
C1.1.4	Consejos de investigación	0	0	0	0	0	0
C1.1.5	Otras entidades del Estado	0	0	0	0	0	0
C1.2	*Agencias financiadoras*	**4**	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**
C1.2.1	Donantes internacionales	4	1	2	1	0	0
C1.2.2	Donantes privados internacionales	0	0	0	0	0	0
C1.2.3	Organismos internacionales	0	0	0	0	0	0
C2	**Instituciones de Educación Superior**	32	16	10	3	0	3
C2.1	Públicos	5	2	2	0	0	1
C2.2	Privados	27	14	8	3	0	2
C3	**Sociedad Civil**	***6***	5	0	1	0	0
C3.1	Organizaciones no gubernamentales (ONG)	2	2	0	0	0	0
C3.2	Centros de pensamiento sin fines de lucro	4	3	0	1	0	0
C3.3	Líderes de opinión	-	-	-	-	-	-
C3.4	Medios de comunicación	-	-	-	-	-	-
C3.5	Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales	-	-	-	-	-	-
C3.6	Gremiales		-	-	-	-	-
C4	**Sector Privado (industria)**	**2**	**2**	0	0	0	0
C4.1	Centro de investigación privado	0	0	0	0	0	0
C4.2	Organizaciones empresariales	2	2	0	0	0	0
C4.3	Empresas consultoras	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	**54**	**31**	**13**	**6**	**1**	**3**

**Incluye solamente las instituciones para las que se ha podido confirmar el número de investigadores.

Fuente: Elaboración propia a partir de metodología del DRA (GDN, 2020) con información recolectada en mapeo.

Gobierno y agencias financiadoras

En esta categoría se identificaron 79 actores, de los cuales 63 se encuentran en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); se identificaron 16 instituciones que contratan investigadores, 10 del gobierno y 6 agencias de financiamiento para la investigación. Las instituciones de gobierno se clasificaron en las subcategorías siguientes: gobierno central, instituciones autónomas, instituciones descentralizadas y consejos de investigación. Por otro lado, las instituciones que financian la investigación fueron clasificadas en la subcategoría: instituciones internacionales, instituciones locales y oenegés internacionales (ver nuevamente tabla 4).

Instituciones públicas (gobierno)

El Gobierno de El Salvador consta de tres Órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial[17]. Al Órgano Legislativo le compete el establecimiento de las Leyes[18], mientras que al Órgano Judicial tiene la potestad de juzgar y ejecutar los juicios[19]. El órgano Ejecutivo está compuesto por la Presidencia, Vicepresidencia y los Ministerios[20].

En la categoría de **gobierno central** se han incluido a las instituciones que forman parte del Órgano Ejecutivo, es decir, los ministerios y sus dependencias, como, por ejemplo: la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) que es una dependencia del Ministerio de Economía, y el Colegio de Altos Estudios Estratégicos que es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional. Aunque son parte del gobierno central, se incluyen como subcategoría aparte a las **instituciones autónomas** las cuales pueden ser creadas por el Estado para prestar servicios de interés social[21]. Por su parte, entre las **instituciones descentralizadas** se ha incluido al Consejo de Alcaldías y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) y las 14 municipalidades que forman el Área Metropolitana de San Salvador, así como las otras 12 municipalidades que son cabeceras departamentales. Finalmente, los **Otros organismos del Estado** incluyen a la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.

Dado su rol de hacedores de políticas públicas, estas instituciones se pueden considerar como usuarios de las investigaciones; sin embargo, se han identificado algunas que poseen sus propias unidades de inteligencia o departamentos donde ejecutan proyectos de investigación para fundamentar la toma de decisiones. Estas investigaciones, que son producidas por sus propios técnicos o por consultores externos, muchas veces se manejan como confidenciales y no siempre están disponibles al público. Aquellas instituciones que cuentan con unidades de investigación o inteligencia fueron contabilizadas dentro del mapeo.

En el gobierno se encuentra el único consejo de investigación identificado para el país, el **CONACYT.** Esta entidad estatal fue creada en 1992 y designada por medio de decretos ejecutivos para implementar y ejecutar las políticas nacionales en materia de desarrollo científico, tecnológico y de apoyo al fomento de la innovación (Acuerdo N° 15-0432-A, 2013). Depende del Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación. Si bien sus responsabilidades son amplias, de forma sistemática dan seguimiento a la investigación científica en las instituciones de educación superior y en dependencias del gobierno. Además, promueven las investigaciones realizadas en el país por medio de premiaciones y reconocimientos a los investigadores y a las instituciones donde laboran. Llama la atención que el CONACYT no da seguimiento a algunas instituciones que tienen unidades de inteligencia (por ejemplo, la Dirección de Inteligencia y Política Económica del Ministerio de Economía).

De acuerdo con los investigadores que participaron en los grupos focales a pesar de que el CONACYT tiene una amplia trayectoria de funcionamiento

17 Artículo 86, Constitución de la República de El Salvador, 1983 (Asamblea Legislativa, 1983)
18 Artículo 121, ibíd.
19 Artículo 172, ibíd.
20 Artículo 150, ibíd.
21 Artículo 110, ibíd.

(casi 30 años) ha obtenido muy pocos resultados y que muestra debilidades en cuanto al desarrollo de actividades relacionadas con la investigación en ciencias sociales, la articulación entre actores y el desarrollo de estándares de calidad en la investigación. Otros participantes mencionaron que conocen muy poco sobre las actividades que desarrolla el CONACYT relacionadas con las ciencias sociales. Reconocen que su presupuesto es limitado.

Uno de los principales productores de investigación y estadísticas del gobierno central es la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), institución que tiene a cargo la elaboración de estadísticas económicas, como el Índice de Precios del Consumidor (IPC), y sociales como la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) y las Estadísticas Vitales. Recientemente, han incorporado un observatorio de estadísticas de género.

Entre las autónomas, se encuentran instituciones públicas que tienen departamentos de investigación que se especializan en los temas de interés para sus respectivas instituciones. Este es el caso del Banco Central de Reserva, que realiza investigación técnica, económica y financiera para brindar asesoría para la toma de decisiones del gobierno (BCR, 2012) y la Superintendencia de Competencia que con sus estudios identifican restricciones o fallas en el funcionamiento de los mercados (Superintendencia de Competencia, 2021).

Agencias financiadoras

En la categoría de agencias financiadoras se incluyeron a las agencias de cooperación internacional, definidas como aquellas que otorgan recursos de forma concesional a países en desarrollo, con el propósito de promover su desarrollo económico y bienestar social (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2013). Se clasifican en las siguientes subcategorías: donantes internacionales, donantes privados internacionales y organismos internacionales. En la subcategoría de donantes internacionales se incluyeron a organismos financieros –por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial–, organismos multilaterales –por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés)–, agencias gubernamentales –por ejemplo, donantes de un solo país como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) –. En la subcategoría de donantes privados se incluyen instituciones como Oxfam; y, finalmente, en la categoría de organismos internacionales incluye a la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), formada por los estados de siete países de Centroamérica.

En total se identificaron 12 de estas instituciones, pero solo 6 contratan investigadores a tiempo completo; el resto financian investigaciones por medio de consultorías y promueven la divulgación y utilización de sus resultados.

Instituciones de Educación Superior

Según la Ley de Educación Superior de El Salvador, los institutos de educación superior se clasifican en 3 categorías (art. 22):

- Los **institutos tecnológicos** dedicados a la formación de técnicos y tecnólogos en las distintas especialidades científicas, artísticas y humanísticas.
- Los **institutos especializados de nivel superior**, dedicados a formar profesionales en un área de las ciencias, la técnica o el arte.
- Las **universidades**, dedicadas a la formación académica en carreras con estudios de carácter multidisciplinario en las ciencias, artes y técnicas.

Estos, a su vez, pueden ser públicos y privados:

- **Públicos:** corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio (art. 26). Su financiamiento proviene del Presupuesto del Estado, de las partidas destinadas al sostenimiento de las universidades estatales, para el fomento de la investigación y las necesarias para asegurar y acrecentar su patrimonio (art. 27).
- **Privados:** son corporaciones de utilidad pública, de carácter permanente y sin fines de lucro; deben utilizar su patrimonio para cumplir los objetivos para los cuales han sido creados, y los excedentes que obtengan deberán invertirlos en la investigación, calidad de la docencia, infraestructura y la proyección social (art. 28).

De las 41 instituciones de educación que hay en El Salvador, 34 ofrecen carreras en áreas sociales, de las cuales 29 son privadas y 5 son públicas. Las instituciones públicas incluyen a la única universidad estatal que existe en el país, una escuela superior que ofrece carreras técnicas, un instituto de formación de docentes que forma parte del Ministerio de Educación y dos academias para la formación de personal de seguridad pública. Más de 80% de estas instituciones (28) se localizan en el Área Metropolitana de San Salvador[22] (AMSS), mientras que solamente seis, que representan el 18%, están en otros municipios: tres se localizan en el occidente del país, dos en el oriente y una en el norte.

La Ley de Educación Superior de El Salvador establece que una de las funciones de la educación superior es la investigación[23], y es requisito que estas instituciones realicen al menos un proyecto de investigación al año por cada área en las que ofrecen carreras[24]. para lo cual, deberán contar con presupuesto asignado y podrán ser apoyados con recursos públicos y privados.

La Ley les permite crear dependencias, escuelas y centros de investigación[25] para desarrollar esta tarea; la mayoría de las instituciones de educación superior cuentan con una unidad o departamento que está a cargo de la investigación. Se identificaron al menos nueve instituciones que han creado sus propios centros, institutos u observatorios con ese fin[26]; cuatro de estas cuentan con una unidad

22El Área Metropolitana de San Salvador está compuesta por 12 municipios del departamento de San Salvador y 2 municipios del departamento de La Libertad (Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla)

23 Artículo 3, Ley de Educación Superior

24 Artículo 37, literal d, Ley de Educación Superior

25 Artículo 23, Ley de Educación Superior

26 Se identificó al director o coordinador de cada una de las unidades, centros, institutos u observatorios que funcionan dentro de una institución de educación superior. Antes de iniciar el levantamiento de la Encuesta de Administradores de Investigación, se debe decidir si se encuestará a más de un coordinador en el caso de las universidades que tienen más de una unidad que hace investigación y que son independientes entre sí.

especializada y adicionalmente con un centro, instituto u observatorio que también realiza esa labor. Estos últimos operan con independencia de otras unidades con esa misma función y tienen su propio liderazgo; en la mayoría de los casos, cada una cuenta con un coordinador. Sin embargo, se encontró un caso en el que el director de investigación de una institución está a cargo de la misma labor en otras dos instituciones[27].

Se encontraron tres instituciones que han creado observatorios dedicados a realizar sondeos de opinión pública y sus investigadores fueron incluidos dentro del mapeo. Por otro lado, al menos dos universidades privadas ofrecen los servicios de su Comité de Ética a entidades externas a la universidad que requieran aval para sus anteproyectos, aunque en ambos casos está dirigido a investigaciones en el área de salud. Una de estas universidades reportó que 52 protocolos de investigación fueron revisados por su Comité de Ética durante 2019.

En algunas instituciones el director o coordinador de investigación realiza también funciones de investigador. De manera que, se ha identificado que la figura de "administrador de investigación" que se plantea en la metodología de GDN no siempre es desempeñada de forma exclusiva por una persona, sino que las actividades propias de un administrador son absorbidas por uno o más miembros del equipo de investigación, ya sea que se trate de un investigador senior o de un director de una unidad de investigación, quienes ejercen estas actividades de forma paralela a las funciones de investigación.

Todas las universidades del país deben reportar a CONACYT el número de investigadores que hay en su institución. CONACYT define a los investigadores como profesionales dedicados a la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, y también a la gestión en los proyectos respectivos, y que hayan dirigido o participado en la ejecución de proyectos de Investigación y Desarrollo y que pertenecen a entidades en donde estos proyectos se desarrollan (CONACYT, 2019b). La base de datos proporcionada por REDISAL lista el nombre de los investigadores, su formación académica, pero no en todos los casos detalla sobre sus temas de investigación. En las instituciones de educación superior, el número de investigadores muestra grandes disparidades; las que más investigadores reportan son la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Universidad Pedagógica y la Universidad Católica de El Salvador. Aunque la Universidad de El Salvador reporta cerca de 100 investigadores, según datos de CONACYT, más de la mitad se dedican a las ciencias médicas, ciencias naturales, agrícolas e ingeniería.

27 Se debe decidir si esta persona deberá abordarse para completar una encuesta para cada organización en la que trabaja, o si se deberá seleccionar solo la que él considere más relevante.

Sociedad civil

Esta categoría se compone por instituciones sin fines de lucro, es decir, que no persiguen el enriquecimiento directo de sus miembros, fundadores y administradores[28]. La mayoría de ellas han sido creadas bajo la figura de fundaciones, las cuales, de acuerdo con la legislación salvadoreña son entidades creadas con fines de utilidad pública[29]. Esta categoría se divide en dos subcategorías: organizaciones no gubernamentales (ONG) y tanques de pensamiento. Se entenderá por ONG toda organización que no ha sido creada por un gobierno ni por un acuerdo entre gobiernos (Arévalo, 2010). Por otro lado, los tanques de pensamiento son organizaciones que producen investigación, análisis y brindan asesoría orientada a las políticas públicas, permitiendo a los responsables de la formulación de políticas y al público tomar decisiones informadas (McGann, 2021).

En esta categoría se incluyeron 86 instituciones, de las cuales solo 10 han sido clasificadas como productores de investigación: tres oenegés y siete tanques de pensamiento sin fines de lucro, dependiendo de la definición que cada institución hace de sí misma. En cuanto a la localización geográfica, todas se encuentran en el AMSS. Se identificaron dos tanques de pensamiento, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), que tienen sus oficinas centrales en Costa Rica y Guatemala, respectivamente.

En general, las instituciones de la sociedad civil –independientemente de si son ONG o tanques de pensamiento– proporcionan a través de sus páginas web con poca o nula información sobre su staff de investigadores. En la mayoría de los casos se ha identificado al menos a un investigador asociado con la institución. La institución más grande que se ha identificado es FUSADES, la que cuenta con 22 investigadores.

Al igual que sucede con las instituciones de educación superior, en esta categoría también se encontraron algunas personas que desempeñan doble función: la de investigador y "administrador de investigación".

Sector privado (industria)

En esta categoría se han identificado trece instituciones, todas ubicadas en el AMSS. Entre estas se encuentran cuatro organizaciones empresariales o gremiales que realizan investigación enfocada en el desempeño de sus industrias y en el análisis económico. Adicionalmente, se revisaron los registros del Instituto de Acceso a la Información Pública sobre contrataciones públicas en diversas instituciones y se identificaron siete empresas consultoras que han tenido contratos para realizar estudios o investigaciones. Sin embargo, de cuatro de estas empresas no se logró obtener respuesta sobre la cantidad de investigadores que contratan.

Finalmente, en esta categoría se incluyó el único centro de investigación privado enfocado en la investigación científica para el aprendizaje. Esta institución es el primer instituto privado de investigación reconocido por CONACYT, y se enfoca en las áreas de psicología, psicopedagogía y neurociencias. El trabajo de investigación en estos

28 Artículo 9, Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro (Asamblea Legislativa, 1996)
29 Artículo 18, ibíd.

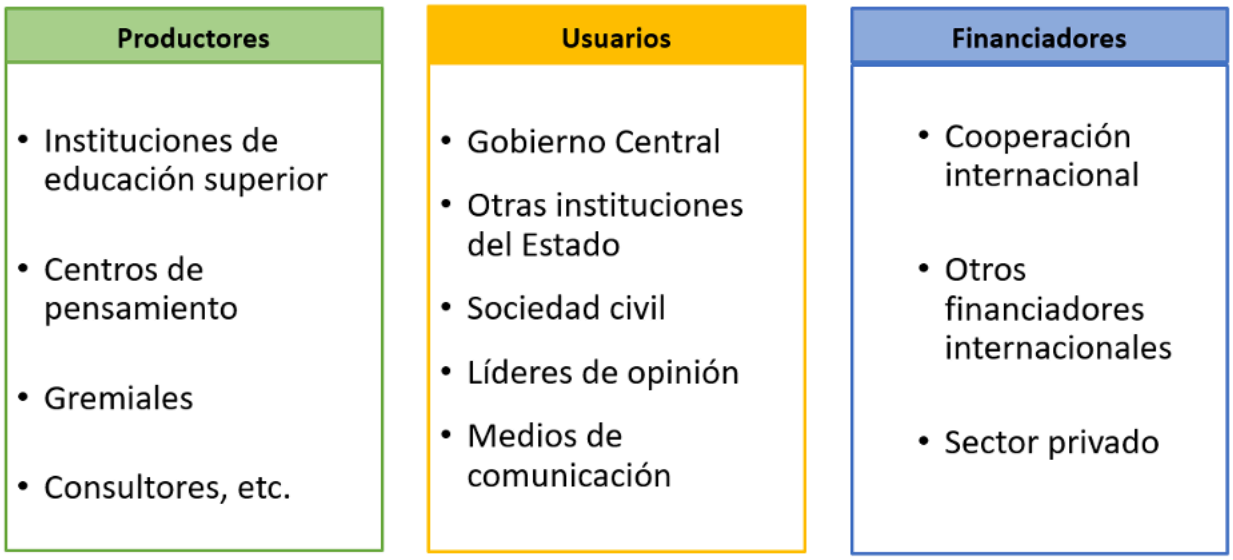
temas solía estar reservado para las universidades, ya que en el país existen varios centros terapéuticos, pero no realizan este tipo de investigación.

3.3. Caracterización de los actores y sus relaciones

En esta sección se incluirá la descripción de la arquitectura del sistema nacional de investigación, detallando los grupos que hacen que este funcione, así como una evaluación de su importancia relativa, sus limitaciones y las interacciones que existen entre ellos.

Los actores involucrados en la investigación en ciencias sociales pueden agruparse de manera general en productores, usuarios y financiadores. Si bien cada actor puede clasificarse en una de estas tres categorías atendiendo a su rol principal (ver figura 2), muchos actores pueden desempeñar más de un rol. Por ejemplo, los centros de pensamiento son principalmente productores, pero también usuarios de las investigaciones que producen otros actores. Por otro lado, el gobierno puede tomar tres roles: usuario de la investigación producida por la academia, centros de pensamiento y otros actores; toma el rol de productor cuando realiza estudios a través de algunas de sus dependencias; y finamente se vuelve financiador de investigaciones que encarga a terceros.

Figura 2. Actores del sistema de investigación en ciencias sociales



Fuente: Elaboración propia a partir de metodología de DRA (GDN, 2020).

Con el fin de caracterizar a los actores y comprender mejor sus motivaciones, los retos que enfrentan, la forma como se relacionan y su importancia relativa –en términos de interés y poder de influencia– se organizaron 5 grupos focales. Estos fueron conformados por investigadores vinculados con los centros de pensamiento o fundaciones, Instituciones de Educación Superior (IES) y del sector público; y, además incluyeron a investigadores no vinculados con una institución en particular. Adicionalmente, se realizó un grupo focal mixto en el que participaron representantes de la cooperación internacional y de fundaciones. En total se contó con 18 participantes.

La conversación en los grupos focales se desarrolló tomando como base una guía de preguntas para explorar las motivaciones hacia –producir, utilizar o financiar– la investigación en ciencias sociales, los retos que enfrentan los investigadores, ética en la investigación, existencia de redes de investigadores en el país, el rol del CONACYT, influencia sobre los resultados de la investigación, las relaciones entre los actores, interés y poder. A continuación, se presentan los principales resultados.

Percepción sobre las ciencias sociales

Según los participantes, en el país hay mucho desconocimiento sobre el aporte de las ciencias sociales. En general, la población desconoce sobre qué tratan, para qué sirven, para qué son útiles, e incluso, sobre las áreas en las que pueden trabajar algunos profesionales de estas disciplinas. Esto repercute en la percepción de la sociedad sobre el conocimiento que se genera desde las ciencias sociales y en que no se les valore como objeto de estudio ni como actividad en sí misma.

> *"[Se] considera que, entonces, un investigador en ciencias sociales es como una persona que solo da una opinión cuando en realidad hay todo un estudio y toda una preparación para poder hacer y decir determinadas cosas. Creo yo que eso es importante, nosotros no estamos en una sociedad en donde se comprenda qué es una ciencia social" (Mujer, participante del grupo focal 2).*

Además, los participantes consideran que vinculada con la poca valoración que se asigna a las ciencias sociales hay una baja valoración de la investigación. En el país no hay una "cultura" orientada a hacer investigación social –ni científica–, no se considera importante tomar decisiones con base en la investigación y tampoco se cuenta con una agenda clara para realizar investigación en ciencias sociales.

> *"El país no tiene la visión de investigación para mí. O sea, no tenemos esa cultura de tomar decisiones con base a investigación. Entonces, la investigación tiene un papel muy débil" (Mujer, participante del grupo focal 5).*

El Estado también se ve afectado por la "falta de cultura" o poco interés de hacer investigación. Esto se evidencia –según los participantes– en que se toman decisiones de política pública con base en datos desactualizados; a manera de ejemplo mencionaron que los últimos censos poblacionales se realizaron hace aproximadamente 15 años.

El desconocimiento sobre la utilidad de la investigación en ciencias sociales también influye en que haya poca demanda para la investigación, tanto de parte del Estado como de otros actores.

> *"Nuestra industria todavía es bastante, en algunos momentos, corta de luces respecto de la importancia que tiene investigar, ya no se diga el Estado" (Hombre, participante del grupo focal 4).*

Esta poca demanda hace que, en algunas disciplinas de las ciencias sociales, como por ejemplo la lingüística y la historia, sea más difícil encontrar empleo como investigador y haya que emplearse en actividades adicionales para generar o complementar los ingresos. Además, se enfrentan más dificultades para insertarse en proyectos investigativos. En ocasiones, estos proyectos se generan a partir de trabajos colaborativos entre amigos o conocidos, pero no siempre son remunerados, de manera que participan por el interés de darse a conocer o porque consideran que la investigación es importante.

> *"Porque el otro tema es, pues sí se puede investigar, pero eso no da de comer" (Hombre, participante del grupo focal 5).*

Por otro lado, se percibe que predomina una visión politizada sobre las ciencias sociales, ya que muchas veces tratan temas considerados "incómodos" para el Estado, se cree que su fin último es hacer que las instituciones rindan cuentas y hay temor de parte de las autoridades de que sus políticas sean cuestionadas. En algunos casos, esta visión politizada de la investigación social puede generar resistencia a reconocer los aportes que se generan.

Relaciones entre actores

Los participantes coinciden en señalar que sí existe relación entre los distintos actores que comparten interés por la investigación en las ciencias sociales. Sin embargo, esa relación no es articulada, sistemática, ni permanente. En muchos casos surge de forma circunstancial cuando coincide el interés o la disponibilidad de fondos para estudiar un tema.

> *"Sí, efectivamente las relaciones están, y así como a nivel general, diría que no hay como una articulación tan definida" (Hombre, participante del grupo focal 5).*

Las IES se relacionan con la sociedad civil a través de la proyección social, y con otras IES como socios de investigación. Con el sector privado su interacción es puntual –para investigaciones específicas– y ocurre en ambas vías, es decir, se les solicita información y se les da apoyo cuando lo piden. Se relacionan también con financiadores de investigación, que puede ser la cooperación internacional pero también otros actores. Con el gobierno central, la percepción es que no es formal y surge cuando este solicita algún apoyo.

Con respecto a la relación entre los centros de pensamiento y otros actores, las percepciones difieren. Algunos participantes señalaron que existen experiencias exitosas de trabajo conjunto entre centros de pensamiento, el gobierno, las gremiales y la academia. Sin embargo, otros participantes perciben que cada actor es celoso de su área de trabajo y que existen algunas barreras que dificultan la colaboración.

> *"Yo particularmente como investigadora he tenido, pues, la capacidad de haber trabajado con todos los que están allí: educación superior, sociedad civil, instituciones de gobierno, agencias financiadoras y sector*

privado … uno ve que hay un gran celo entre las instituciones" (Mujer, participante del grupo focal 2).

Por otro lado, el gobierno se relaciona con el sector privado y la sociedad civil porque responde a ciertas necesidades que tienen. También se relaciona con la cooperación internacional como socio y receptor de financiamiento. Mientras que es usuario de la investigación producida por los centros de pensamiento. Se visualiza al gobierno como usuario y socio de las IES. Algunos actores señalan que la relación del gobierno con los otros actores no es formal, ocurre de forma circunstancial y, a veces, un poco forzada.

La percepción de otro grupo de participantes es que todos los actores se relacionan entre sí de forma dinámica, compleja y en múltiples direcciones. En opinión de este grupo, las relaciones deberían estar marcadas por las necesidades de investigación de los actores; sin embargo, consideran que algunos actores no "saben qué necesitan".

"Yo veo una relación menos concéntrica, quizás más dinámica porque los actores están interrelacionados… hay una relación entre todos y entre cada uno" (Hombre, participante del grupo focal 4).

Con respecto a la existencia de un sistema de investigación en el país, la percepción generalizada de los participantes es que los actores se encuentran dispersos, que existe mucha competencia por producir estudios y que no existe un sistema consolidado, sino alianzas puntuales para realizar trabajos en conjunto.

"Yo no creo que en El Salvador tengamos un sistema de investigación en ciencias sociales, porque todo está atomizado, todo está disperso" (Hombre, participante del grupo focal 4).

"Sí hay instituciones que hacen trabajo de investigación, eventualmente puede haber alianzas particulares sobre algún tema o algún estudio. Pero como una red, creo que es un asunto que todavía hace falta crear" (Mujer, participante del grupo focal 3).

Adicionalmente, señalan que hace falta divulgar más información sobre el CONACYT y sus actividades. Se necesita una visión estratégica y articuladora que una a los actores y les transmita la idea de que sí pueden ser parte de un sistema.

"En parte, eso provoca que no exista esa visión de sistema. ¿verdad? Nadie está consciente de que puede formar parte de un sistema" (Mujer, participante del grupo focal 2).

Motivación para hacer investigación

Existen diferentes perspectivas sobre qué motiva a los actores a hacer investigación. La finalización del conflicto armado y la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 marcó un punto de inflexión en el que se hacía investigación con el fin de hacer propuestas para la reconstrucción social del país.

"La posguerra se prestaba, entonces, a que hubiese investigación social justamente para saber qué efectos había tenido la guerra en nuestra sociedad, cómo íbamos a seguir para adelante … la motivación al final era aportar desde las ciencias sociales

a esa reconstrucción social" (Mujer, participante del grupo focal 2).

De acuerdo con los participantes, la motivación está vinculada con los objetivos de la institución que hace o financia la investigación. Entre las motivaciones para hacer investigación en ciencias sociales están el deseo de generar conocimiento, visibilizar algunas problemáticas y ofrecer soluciones apegadas a la realidad, defender las convicciones desde un punto de vista técnico no ideológico, valorar y analizar el quehacer del sector público y exigir la rendición de cuentas.

Otros mencionaron que el interés por investigar ciertos temas está relacionado con las circunstancias que estén ocurriendo en un momento determinado –tales como la migración, la diversidad sexual, elecciones, etc.–. En este sentido, la agenda de investigación en un determinado momento podría estar vinculada con la coyuntura o con temas que estén de moda y no con temas de más largo plazo.

Por otro lado, los participantes perciben que en las IES no se reconoce el esfuerzo que implica hacer investigación y que no se cuenta con un sistema de incentivos adecuados.

> *"La universidad, aunque tiene el buen interés de realizar investigación, tiene restricciones presupuestarias y más los procesos internos propios. ¿Se hace investigación? sí se hace investigación, pero muchas veces más basado en el deseo de las personas de hacerla y más allá de un reconocimiento económico que pueda existir. No existe un sistema adecuado de incentivos y esa es una falencia que lleva décadas" (Hombre, participante del grupo focal 1).*

Retos comunes que enfrentan los investigadores en ciencias sociales

Inconvenientes para acceder a datos e información

La falta de datos, la desactualización de los mismos y la dificultad para acceder a ellos de forma oportuna es otro reto en el que hay bastante consenso entre los entrevistados.

La dificultad para obtener información pública de forma oportuna es otro problema relevante. A pesar de que el país cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública, la cual es una herramienta útil, tiene sus limitantes. Por ejemplo, hay demora en la entrega de los datos, y aunque la Ley establece que las instituciones deben sistematizar y poner a disposición del público cierta información que producen, no todas cumplen con este requerimiento. Además, mencionaron que últimamente hay más restricciones para entregar información sosteniendo que es "reservada".

Pero también existen dificultades para acceder a investigaciones históricas. Los participantes mencionaron que mucha información e investigaciones se han perdido por descuido, se quemaron o dañaron durante terremotos o inundaciones. Agregaron que no hay registros de las publicaciones hechas durante la década de los 80 por algunos centros de pensamiento de la época, pero que ya han desaparecido. En ocasiones la información sobre el país se resguarda mejor en el extranjero.

Por otro lado, el diseño de políticas públicas requiere contar con un panorama amplio de información; sin embargo, para algunos participantes hay pocas investigaciones que den información para la toma de decisiones. En su opinión, la academia y los centros de investigación se centran en pocos temas, que se tratan de forma reducida y puntual. Otras limitantes que identifican son que algunas investigaciones no tratan sobre las principales problemáticas del país y que las recomendaciones que ofrecen no son operativas.

> *"Al momento de diseñar una política pública se requiere un panorama amplio de información. Entonces hay muy limitada información para la toma de decisiones o para el diseño de políticas públicas" (Mujer, participante del grupo focal 5).*

En contextos de inseguridad en los que predomina un ambiente de desconfianza, como el caso de El Salvador, surge el reto de identificar nuevas formas para abordar a los sujetos de investigación y obtener información de ellos.

Las estadísticas sociales disponibles son limitadas y están desactualizadas

El país no cuenta con un ente autónomo que produzca estadísticas sociales, el principal proveedor de esta información es la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), que es una dependencia del Ministerio de Economía, de manera que su alcance en cuanto a las temáticas que abarca, la actualización de fuentes de datos –como los censos– y la asignación de fondos para cubrir distintas necesidades es limitado. Por lo que, según algunos entrevistados, la información disponible es insuficiente y los datos pasan por un proceso muy lento para actualizarse.

Esto hace que otros productores de investigación busquen llenar sus necesidades de información levantando sus propias encuestas, lo cual encarece la investigación, tanto por los costos asociados con el proceso de hacer encuestas como por aquellos asociados con la inseguridad.

La digitalización de fuentes de consulta es limitada

Se identificaron limitaciones en el acceso a fuentes originales y de consulta digitalizadas. En el país no existe una biblioteca virtual o base de datos que compile investigaciones de autores nacionales en ciencias sociales y que pueda ser compartida por todos los actores (centros de pensamiento, academia, etc.). Algunas bibliotecas disponibles están desactualizadas, cuentan con más productos internacionales que nacionales o tienen personal que desconoce los documentos que custodian o su ubicación.

La falta de documentos de consulta digitalizados dificultó continuar trabajando durante el confinamiento por COVID-19. La digitalización del material sería útil para tener acceso a los mismos ante eventualidades como la pandemia, ayudaría a realizar consultas con mayor rapidez y a no depender de terceros, como bibliotecarios o encargados de la documentación que filtran según su conocimiento/desconocimiento.

Recelo para compartir información

Para los participantes, el problema del acceso a datos también tiene causas culturales. Señalan que ni a las personas ni a las instituciones, principalmente públicas, les gusta compartir información. Aunque, depende del tema que se esté investigando. En otras ocasiones lo que sucede es que se desconoce que existe determinada información o material, o bien, se desconoce dónde se encuentra.

Financiamiento limitado

La percepción generalizada es que se cuenta con pocos recursos financieros para hacer investigación en ciencias sociales. La escasez de recursos afecta el proceso de investigación. Por ejemplo, en los centros de pensamiento se percibe que los recursos financieros son limitados e insuficientes para cubrir algunos aspectos relacionados con la investigación, como por ejemplo la membresía a bibliotecas virtuales o la difusión de los resultados de las investigaciones.

La búsqueda de fuentes de financiamiento es un reto que deben enfrentar la mayoría de los actores. El Estado no asigna fondos para financiar investigación, no existe un fondo nacional destinado a la investigación ni un instituto de investigación nacional que disponga de fondos concursables para hacer investigación en temas prioritarios para el país. De acuerdo con los participantes, la falta de financiamiento para investigación está vinculada con la percepción de que las ciencias sociales no son útiles ni importantes.

> *"Creo que el apoyo también es reflejo de la verdadera necesidad percibida respecto de la utilidad de la investigación" (Hombre, participante del grupo focal 4).*

Debido a que las instituciones deben buscar recursos externos para hacer investigación, esta se limita a los temas establecidos en la agenda de quienes brindan el financiamiento. En muchos casos es difícil encontrar financiamiento para investigación si no está ligada a proyectos o intervenciones particulares.

> *"Obtener financiamiento para generar conocimiento es difícil. Generalmente se vuelve más fácil cuando se asocia con una intervención en particular y la investigación aparece como un eje paralelo o complementario a esa intervención" (Mujer, participante del grupo focal 1).*

Los financiadores internacionales son otra alternativa para obtener financiamiento. Sin embargo, los fondos que otorgan para financiar estudios e investigaciones se concentran alrededor de los temas que son de su interés influyendo en la agenda de investigación del país. De acuerdo con los participantes, existe poca flexibilidad para obtener financiamiento para otros temas que quizás son más relevantes para el contexto nacional.

> *"Definir la agenda no. Pero es más que yo tengo un fondo para el tema de discapacidad, un ejemplo, queremos ver con la institución pública qué es lo que podemos hacer, o está enfocada en tal tema y no hay mucha libertad para definir. Y no veo la relación del sector público diciendo "mire necesitamos en esto y en esto y en esto investigación" y que responda la cooperación" (Mujer participante del grupo focal 5).*

Por otro lado, los participantes mencionaron que es difícil competir para obtener fondos en el extranjero porque el país es un territorio pequeño, desconocido en algunos círculos y muchas veces no se valora su aporte a la generación de conocimiento en las ciencias sociales, ni en otras áreas.

> *"Somos un territorio pequeño, uno percibe que no tiene tanta relevancia para el resto de la comunidad científica y cuesta mucho abrirse espacio en ese entorno" (Hombre, participante del grupo focal 4).*

Además, algunos fondos externos son restrictivos pues solo están disponibles para instituciones formales, y son poco accesibles para investigadores no vinculados con una institución. Para estos investigadores aplicar a estas oportunidades requiere más tiempo y esfuerzo. En su opinión ya se tienen temas de interés definidos, y hay poco espacio para el diálogo y para establecer prioridades de investigación de forma conjunta con el sector público.

De acuerdo con los participantes, los recursos disponibles para financiamiento están mal distribuidos ya que algunas disciplinas de las ciencias sociales reciben muy pocos recursos, como por ejemplo la lingüística o la historia.

Finalmente, los entrevistados mencionaron que la pandemia trajo más restricciones para el financiamiento de la investigación, ya que una vez negociados los fondos, permanecen fijos. Pero los confinamientos ocasionaron retrasos en el cumplimiento de plazos lo que tuvo impactos negativos, por ejemplo, en los costos de la planilla. A partir de esta experiencia los actores consideran que en los proyectos futuros se debe incorporar un rubro de "imprevistos" desde el punto de vista financiero y de avances de resultados.

Retos específicos para las Instituciones de Educación Superior

De acuerdo con los participantes, las prioridades de una institución determinan cuántos recursos asigna para investigación. Mencionaron que, aunque las IES expresan que tienen interés en hacer investigación, en la práctica no necesariamente es una prioridad, ya que le destinan pocos recursos financieros y de tiempo. Un reto adicional que enfrentan es que cuando obtienen financiamiento de fuentes externas a la institución, este entra a formar parte del fondo general, lo que implica que deben atravesar procesos burocráticos para poder utilizar los fondos y se generan retrasos en el desarrollo de la investigación. Los participantes señalaron que los fondos de investigación deben ser más ágiles, para poder responder de forma oportuna a las necesidades de los investigadores en las diferentes etapas del proceso investigativo.

Ligado a la limitada disponibilidad de fondos está el hecho de que no existe un sistema de incentivos económicos adecuados en el país. Algunos participantes opinan que esto repercute en que haya poca motivación para hacer investigación; otros mencionaron que es una profesión que se hace por vocación.

> *"Si las personas no pueden capitalizar los resultados o el trabajo que hacen, pues no existe ningún tipo de interés más que la parte subjetiva de que porque quiero investigar simplemente…es decir, 'ah ok, voy a esa investigación y voy a obtener una mejora de remuneración o un premio por esta investigación para poder capitalizarlo'. Eso no existe" (Hombre participante del grupo focal 1).*

De acuerdo con los participantes, el tiempo y la carga laboral de los profesores son absorbidos por la docencia, por lo cual la investigación pasa a un segundo plano.

> *"Al docente se le cargan con muchísimos estudiantes ¿verdad? muchas horas, muchas evaluaciones. El tiempo para que investigues se hace muy corto" (Mujer, participante del grupo focal 2).*

> *"Creo que en la mayor parte la investigación no se cumple más allá de hacer, tal vez, en algunos casos investigación de cátedra" (Hombre participante del grupo focal 4).*

Además, señalaron que las IES no cuentan con una política de investigación en la que estén definidas las áreas prioritarias para hacer investigación. Estos dos aspectos hacen que los esfuerzos investigativos se hagan por iniciativa propia y de forma aislada. En su opinión tampoco se fomenta la investigación entre los estudiantes y muchas veces la importancia de esta se limita a ser un requisito para graduarse.

La calidad de la investigación

De acuerdo con los participantes de los grupos focales, existen deficiencias en las capacidades que muestran los investigadores. Al respecto, identificaron deficiencias en el manejo de metodologías, en las habilidades para la investigación, en el razonamiento y en el manejo de corrientes de pensamiento diversas.

> *"Yo puedo ver una gran fortaleza en el planteamiento de marcos teóricos, en la elaboración de antecedentes; pero, ya el paso de toda esa base conceptual a la parte empírica y luego la conexión de esta parte empírica, otra vez con las hipótesis de trabajo…entonces ahí se desnuda, digamos, una gran deficiencia" (Hombre, participante del grupo focal 1).*

Un aspecto que influye en esas deficiencias es que la formación de los investigadores tiene debilidades. En opinión de los participantes los contenidos académicos de las IES están desactualizados y además las universidades han descuidado la formación en investigación por privilegiar temas más "prácticos". A penas dos universidades tienen dentro de su currículo la materia de métodos de investigación, y en una de ellas se ha incorporado recientemente.

Otro aspecto ligado a la calidad es el poco conocimiento sobre ética en la investigación. De acuerdo con los participantes, en algunos casos se vuelve un reto concientizar a las instituciones sobre la necesidad de incorporar la perspectiva ética en la investigación que involucra sujetos humanos y que esta perspectiva involucra más que la firma de un consentimiento. Muchas veces, incluir esta perspectiva ética agrega costos; sin embargo, puede existir cierto grado de flexibilidad de parte de los financiadores para asumir estos costos si se consideran desde el inicio. Se percibe que al menos las instituciones "más serias" sí incorporan la ética en sus estudios.

Por otro lado, existe poca cultura de someter a revisión de pares los artículos o estudios antes de publicarlos. En este sentido, algunas personas consultadas señalan que podría haber falta de rigor técnico en las investigaciones y que podría dar lugar al sesgo.

Comunicar los resultados de las investigaciones en un lenguaje sencillo, que sea comprensible para el ciudadano común es un desafío para los productores de investigación.

La divulgación de los hallazgos de las investigaciones es limitada y es un reto lograr que la población tenga acceso al conocimiento que se genera en las ciencias sociales. Difundir los resultados de las investigaciones es una forma de retribución a quienes brindaron información

y colaboraron en la investigación. De acuerdo con los participantes, hacen falta revistas para difundir de forma constante el conocimiento generado en las ciencias sociales. Sin embargo, señalaron que actualmente hay otros medios disponibles –tales como podcasts, sitios web, blogs, material audiovisual, programas de radio y televisión– que no se están aprovechando.

Poder e interés en la investigación en ciencias sociales

Para conocer el grado de interés y poder de los diferentes actores que participan en la investigación en ciencias sociales en el país, se realizó un ejercicio que consistió en pedir a los participantes de cada grupo focal que clasificaran a los actores dentro de una matriz de Mendelow que mide en el eje horizontal el interés que tiene cada actor en la investigación y en el eje vertical su poder para influir en la misma. Adicionalmente, se les dio la opción de dejar fuera de la matriz a las instituciones que consideraran que no son tan relevantes en la investigación. Para este ejercicio se definió tanto el interés como la disposición para producir, difundir o utilizar investigación social. El poder se definió como la capacidad para influir positiva o negativamente sobre la investigación en ciencias sociales y su aplicación en las políticas públicas.

La mayoría percibe a las **Instituciones de Educación Superior (IES)** como entidades con interés bajo o muy bajo en la investigación. Se destaca que las IES se perciban a sí mismas de esta manera. Esto está relacionado con que destinan poco tiempo y presupuesto a la investigación, como se mencionó anteriormente. Además, los participantes señalaron que pocas instituciones cuentan con sus propios centros de investigación lo que muestra, en la práctica, que su interés es bajo (ver figuras 3, 4 y 6).

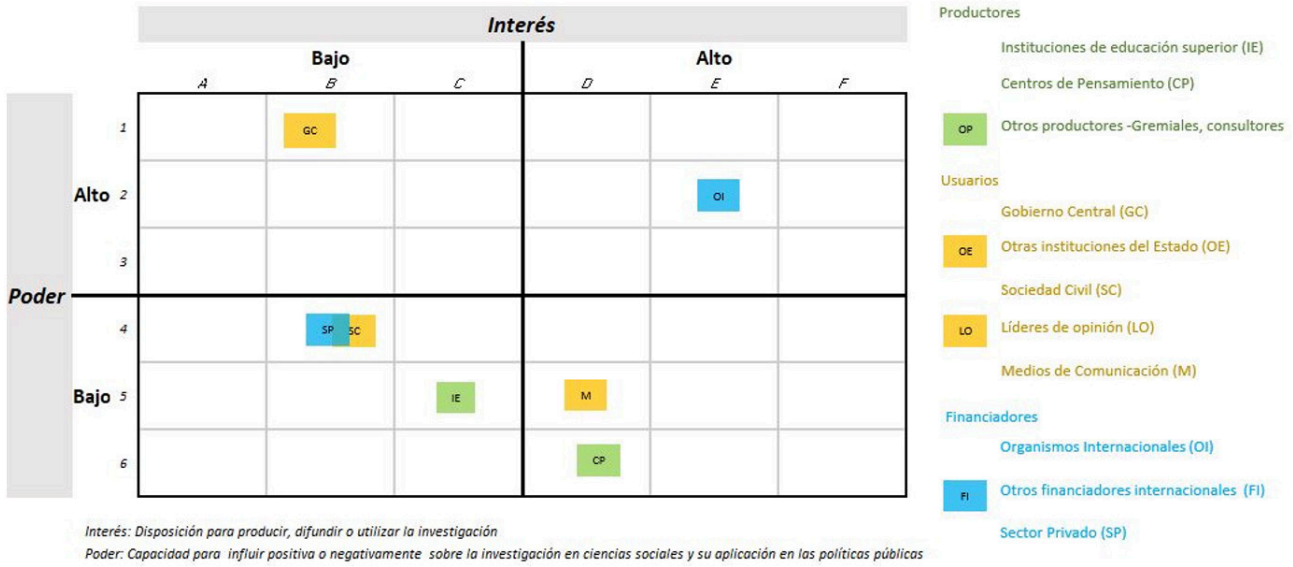
> *"Realmente son muy pocas las universidades que de verdad tienen centros de investigación consolidados. Algunas tienen centros de investigación nuevos, están dando muchos aportes, pero yo creo que siempre hay una visión de rentabilidad para todo en las universidades." (Hombre participante del grupo focal 2).*

Sin embargo, los participantes del grupo focal mixto y del sector público perciben que las IES tienen un interés relativamente alto en la investigación; en su opinión, el interés se concentra en algunos temas, pero descuidan otros que no están dentro de su agenda, aunque coinciden en señalar que disponen de pocos recursos para hacer investigación (ver figuras 5 y 7).

Con respecto al poder, la opinión generalizada es que las IES tienen bajo poder de influencia en las políticas públicas, lo que se evidencia en que mucho del trabajo que hacen sí genera impacto o reacción en la población, aunque dura poco tiempo y es rápidamente dejado de lado. Además, los participantes señalaron que actualmente el gobierno muestra poca disponibilidad para adoptar los resultados de las investigaciones que producen las IES –y también otros actores– (ver figuras 3, 4, 6 y 7).

> *"En este momento, la disposición, o la que tiene el Gobierno, a retomar lo que los tanques de pensamiento, las universidades puedan proponer a partir de las investigaciones que realicen para encausar las actividades del Gobierno, pues está más limitada" (Mujer, grupo focal 1).*

Figura 3. Clasificación de actores según su interés y poder en la investigación social. Grupo focal IES.



Fuente: Elaboración propia a partir de discusión de grupo focal compuesto por investigadores de IES.

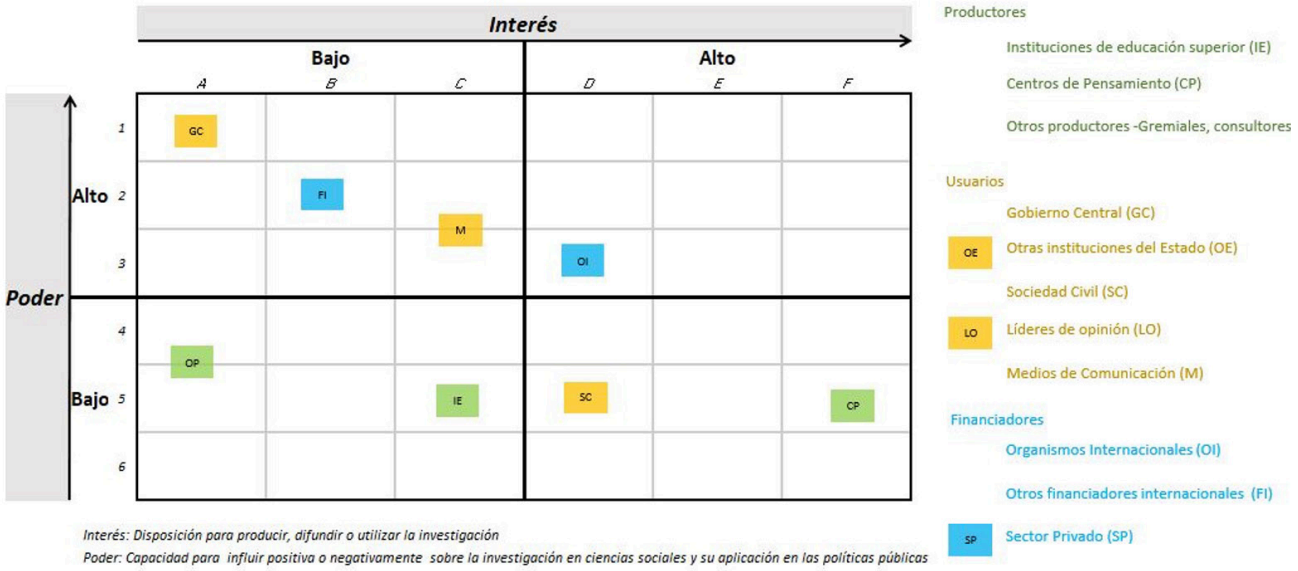
Los **centros de pensamiento** son percibidos por la mayoría, con excepción de los investigadores independientes, como actores con alto interés porque se dedican a la investigación y porque su capacidad también es alta (ver figuras 3, 4, 5 y 7). Sin embargo, para la mayoría su poder de influencia es muy bajo (ver figuras 3, 4, 6 y 7). De acuerdo con los participantes, actualmente la legitimidad de los centros de pensamiento está siendo atacada desde el Estado, tampoco se les reconoce como generadores de conocimiento y no hay apertura para adoptar los resultados de sus investigaciones.

> *"Actualmente creo que están en una crisis de legitimidad de los tanques de pensamiento con este gobierno. Todo está relacionado con los partidos de oposición. Cualquier diagnóstico que se haga" (Hombre participante del grupo focal 2).*

Los **otros productores de investigación** (gremios, consultores, etc.) son percibidos por los centros de pensamiento y el sector público como que tienen bajo interés en la investigación (ver figuras 4 y 7). No obstante, para los investigadores independientes el interés y el poder de los otros productores, en particular de los gremios de algunas disciplinas, es relativamente alto ya que se organizan para buscar espacios para dar a conocer su trabajo de investigación (ver figura 6). Por otro lado, la mayoría opina que tienen un poder de influencia bajo o intermedio.

> *"Creo que gran parte de los procesos de investigación, y todo esto, y los más innovadores se han estado haciendo desde sus sectores en los últimos años" (Hombre participante del grupo focal 4).*

Figura 4. Clasificación de actores según su interés y poder en la investigación social. Grupo focal Centros de Pensamiento.



Fuente: Elaboración propia a partir de discusión de grupo focal compuesto por investigadores de centros de pensamiento.

Existe una opinión generalizada con respecto a que el interés que tiene el **gobierno central** en la investigación es muy bajo. De acuerdo con los participantes, el bajo interés se refleja en que no hay evidencia de que las medidas que implementan estén basadas en criterios técnicos. Los entrevistados perciben que el gobierno no valora el conocimiento técnico en el desarrollo de la política pública, que no tiene interés en la ciencia en sí misma, sino que en buscar respuestas o soluciones a algunas problemáticas que enfrenta, también mencionaron que el gobierno se interesa en aquellos resultados que apoyan sus propósitos. Finalmente, mencionaron que no se destinan fondos para actualizar fuentes de datos, como los censos, que dan insumos importantes para la investigación y formulación de políticas públicas (ver figura 3, 4, 5, 6 y 7).

> *"Estamos enfrentándonos a un gobierno que no gusta de conocimiento técnico para desarrollar política pública. No busca establecer con claridad criterios técnicos sobre los cuales se decide tal o cual medida" (Mujer participante del grupo focal 2).*

> *"Si le conviene la investigación pues la va a hacer, si apoya sus propósitos, va a decir que sí. Pero no si le contradice" (Mujer participante del grupo focal 1).*

En cuanto al poder del gobierno para incidir, la mayoría le asigna un poder alto o muy alto, pues según comentaron cuando algo se quiere hacer se hace (ver figura 3, 4, 5, 6 y 7).

> *"Pues si es alto [el poder] y yo lamento que sea tan alto … pero estamos acostumbrados a una especie de centralización de las decisiones" (Hombre participante del grupo focal 4).*

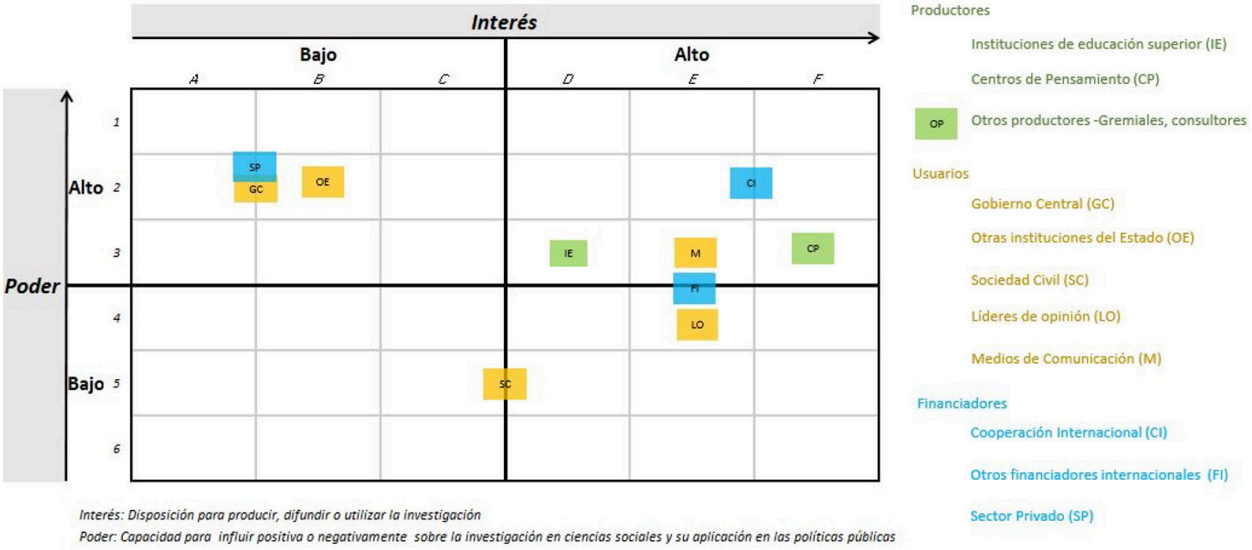
Adicionalmente, los participantes opinan que el gobierno central también influye en la agenda de investigación del resto de actores de forma indirecta, porque "obliga" a que los centros de investigación y la población le den seguimiento a temas relacionados con las políticas públicas que impulsa.

> *"Yo creo que fomenta la investigación de una manera un poco particular, porque en el gobierno actual, hay cada ocurrencia. Entonces, obliga a que la gente vaya a investigar, y que los centros de investigación les den seguimiento a ciertos temas. Por ejemplo, con el anuncio del Bitcoin, yo creo que nadie estaba muy informado sobre ese asunto hace un par de meses, pero ahora los centros de investigación están opinando, los líderes de opinión están investigando sobre eso" (Mujer participante del grupo focal 3).*

Los participantes del grupo focal mixto –que incluye a los financiadores– y del sector público opinan que **las otras instituciones del Estado**[30] tienen bajo interés en la investigación –aunque no tan bajo como el del gobierno central– (ver figura 5 y 7); sin embargo, aclararon que las instituciones que forman esta categoría son heterogéneas y que algunas de ellas que tienen un carácter técnico sí tienen interés en la investigación. También mencionaron que el interés se limita a ciertos temas. En cambio, para los investigadores independientes estas otras instituciones del Estado tienen un interés relativamente alto (ver figura 6). Por otro lado, los participantes coinciden en señalar que el poder es relativamente alto, principalmente si se trata del ámbito de acción de cada institución; por ejemplo, el poder de influencia de las municipalidades es alto en lo local.

> *"Allí es bien disímil la cosa, porque por ejemplo la OPAMSS sí necesita información científica para el trabajo que están haciendo. Por ejemplo, la secretaría del sistema financiero debería tener un interés alto" (Mujer participante del grupo focal 3).*

Figura 5. Clasificación de actores según su interés y poder en la investigación social. Grupo focal mixto (incluyendo financiadores).



Fuente: Elaboración propia a partir de discusión de grupo focal mixto.

30 Únicamente tres grupos focales clasificaron a las otras instituciones del Estado dentro de la matriz.

No hay consenso con respecto al grado de interés de la **sociedad civil** en la investigación. Las IES, los investigadores independientes y el grupo focal mixto consideran que se trata de un grupo heterogéneo y que, en términos generales, no conoce la importancia de la investigación; pero que es buen receptor cuando los temas están dentro de su agenda y por esta razón califican su interés entre medio y bajo (ver figuras 3, 5 y 6). El sector público, en cambio, percibe que la sociedad civil tiene un interés relativamente alto (ver figura 7).

> *"Mi percepción es que sociedad civil va por sus demandas específicas. Suelen ser, y terminan siendo buenos receptores si hay una agenda común" (Hombre participante del grupo focal 3).*

Con respecto al poder de influir que tiene la sociedad civil, la mayoría percibe que es bajo respecto a la política de país, debido a que el Estado la etiqueta como "oposición" (ver figuras 3, 4, 5 y 6). No obstante, es alto en la política local o en una comunidad en la cual están trabajando (ver figura 7).

> *"Poco poder para usarlo digamos a escala nacional. Pero sí tienen en pequeña escala, en una comunidad, en un municipio donde ellos están trabajando sí tendrían el poder de usar la información para implementar cosas" (Mujer participante del grupo focal 5).*

La mayoría percibe que los medios de comunicación tienen un interés relativamente alto en la investigación, debido a que en algunas ocasiones consultan a expertos para respaldar sus reportajes, algunos medios realizan investigación periodística, mientras que otros levantan sus propias encuestas y mediciones (ver figuras 3, 5, 6 y 7). Por el contrario, los centros de pensamiento les asignan un interés bajo señalando que los medios se limitan a ciertos temas que están dentro de su agenda (ver figura 4).

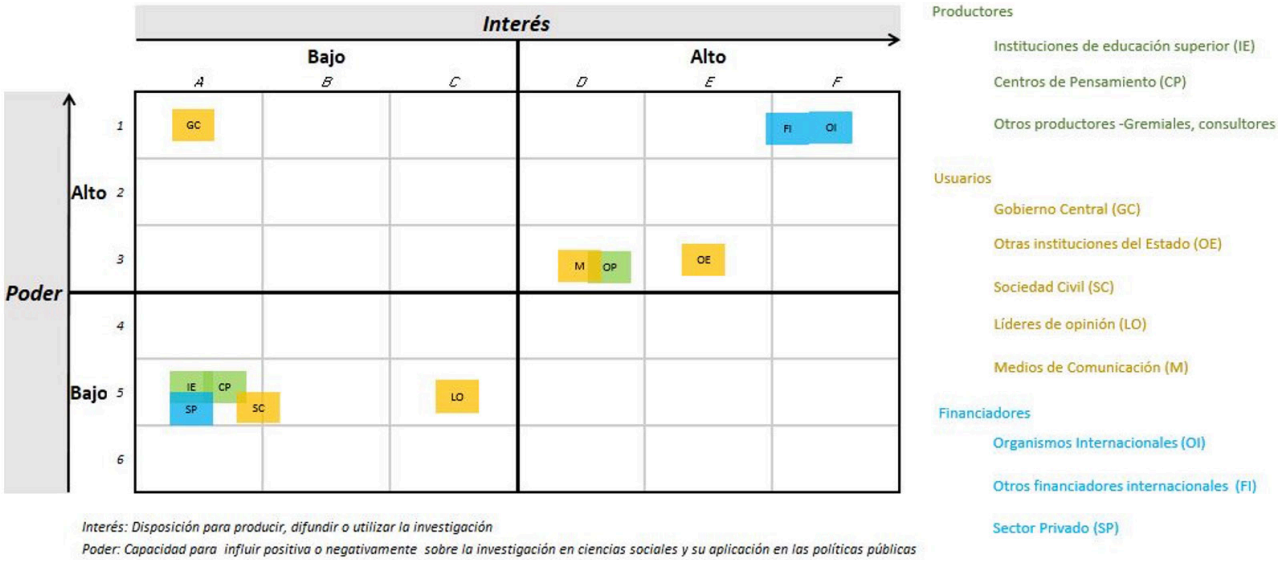
> *"Por los contactos de ellos mismos, a veces, que lo buscan para pedir una opinión, para respaldar las columnas o los reportajes que ellos hacen" (Hombre participante del grupo focal 1).*

Los investigadores independientes, los centros de pensamiento y el grupo focal mixto, opinan que el poder de los medios es relativamente alto porque logran generar discusión entre la población sobre ciertos temas, además, en determinadas circunstancias, se vuelven plataformas para exponer temas. Mientras que las IES y el sector público consideran que su poder es bajo.

> *"Porque al menos logran que la población discuta, aunque sea un mínimo sector, pero que hable sobre investigaciones que se pueden hacer, o sobre las cuestiones de la transparencia, o ciertas denuncias que también nos ayudan a nosotros que somos investigadores en ciencias sociales" (Mujer participante del grupo focal 2).*

Los participantes del grupo focal mixto sostienen que los **líderes de opinión** tienen un interés alto en utilizar los resultados de la investigación; no obstante, señalaron que algunos líderes tienen una agenda política (ver figura 5). Mientras el sector público y los investigadores independientes opinan que ciertos líderes de opinión desinforman a la población y por eso consideran que su interés es relativamente bajo (ver figuras 6 y 7). En todos los casos se les asigna un poder relativamente bajo.

Figura 6. Clasificación de actores según su interés y poder en la investigación social. Grupo focal con investigadores independientes.



Fuente: Elaboración propia a partir de discusión de grupo focal compuesto por investigadores independientes.

La opinión generalizada es que los **organismos internacionales** tienen un alto interés en la investigación, lo que se evidencia en la gran cantidad de investigaciones que financian (figuras 3, 4, 5, 6 y 7). Sin embargo, los participantes señalaron que el interés aumenta para los temas que están dentro de su agenda y que esta se establece en sus oficinas centrales. En general, les asignan un poder bastante alto de influir en las políticas públicas, principalmente en los temas en que hay coincidencia de intereses con el Estado.

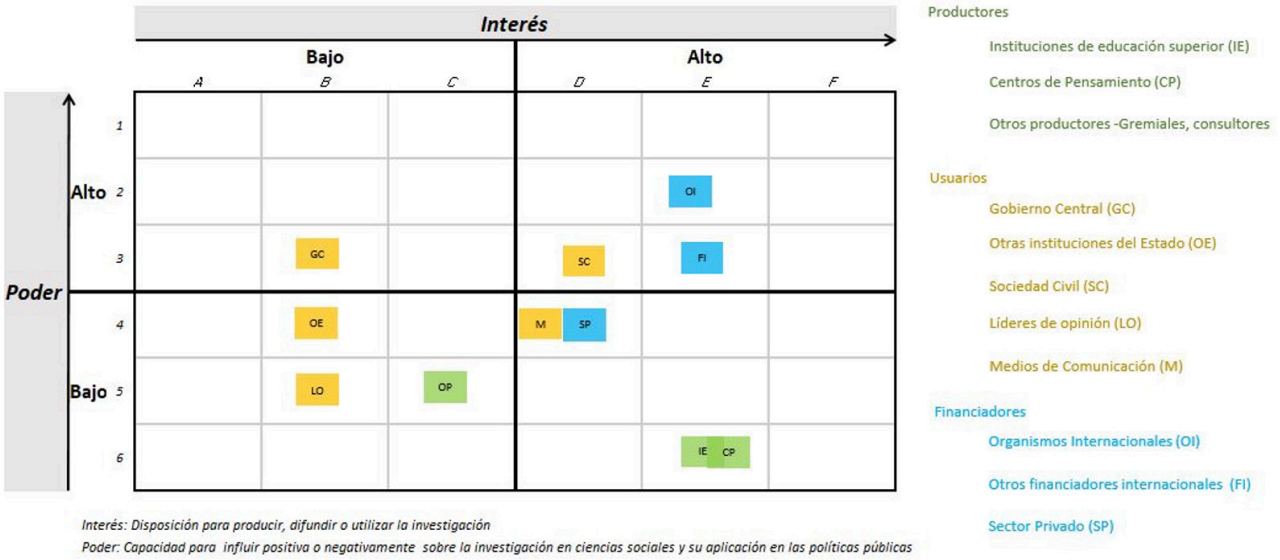
> *"Porque si el organismo internacional está en un programa de gobierno su influencia aumenta. Pero si es parte de un organismo que está viendo temas de rendición de cuentas, se va prácticamente abajo" (Hombre participante del grupo focal 2).*

Con respecto a los otros **financistas internacionales** la mayoría de los participantes considera que su interés es casi tan alto como el de los organismos internacionales. Esto, porque generan algunas investigaciones y las divulgan. También son percibidos como patrocinadores de investigación y proyectos a los cuales dan seguimiento (ver figuras 5, 6 y 7). No obstante, los centros de pensamiento consideran que su interés es bajo ya que se centran en ciertos temas (figura 4).

> *"Ellos son los auspiciadores de los proyectos, sí tendrían un poder un poco más alto y sobre todo por todos los seguimientos y monitoreo de evaluaciones intermedias que pudieran hacer" (Hombre participante del grupo focal 5).*

> *"Yo veía que en realidad no estaban tan interesados en temas de tanta investigación, sino más que todo como temas más sociales, como de igualdad de género y todos los temas de identidad de género. Por lo demás, de investigaciones científicas y del derecho, en nuestro caso que es lo que vemos, sí notamos como un interés bastante bajo" (Hombre grupo focal 2).*

Figura 7. Clasificación de actores según su interés y poder en la investigación social. Grupo focal Sector público.



Fuente: Elaboración propia a partir de discusión de grupo focal compuesto por personal del sector público.

En cuanto al poder de influencia de los otros financistas internacionales, la percepción es que sí tienen poder para influir, principalmente si tienen alguna oficina de representación en el país; sin embargo, su poder no es tan alto como el de los organismos internacionales.

La mayoría de los participantes opina que el sector privado tiene bajo interés en la investigación, porque se limita a temas vinculados con sus necesidades particulares (ver figuras 3, 5 y 6). La mayoría de participantes perciben que su poder también es bajo pues actualmente el gobierno muestra poco interés en los resultados de la investigación para el diseño de políticas públicas, como se mencionó anteriormente (ver figuras 3, 6 y 7).

> *"En general, las instituciones del sector privado cuando financian investigación es porque les preocupa algo, porque necesitan algo" (Hombre participante del grupo focal 1).*

Rol del CONACYT[31]

En opinión de los investigadores consultados, el trabajo de CONACYT está más orientado hacia las ciencias duras, de manera que las actividades relacionadas con las ciencias sociales son limitadas.

> *"En realidad sé muy poco del CONACYT, lo que quiero decir es, sé que ha hecho cosas, pero me parece que se hace muy poco en el ámbito de las ciencias sociales" (Hombre, participante del grupo focal 4).*

Entre las actividades que reconocen que CONACYT realiza mencionaron las capacitaciones, el desarrollo de proyectos –sin especificar en cuáles áreas– y la promoción de becas en el extranjero.

31 Se solicitó una entrevista con CONACYT para conocer su rol en las ciencias sociales y los retos que enfrenta. Los encargados ofrecieron que podían responder a un cuestionario escrito, al momento del cierre de este informe todavía se estaba en espera de sus respuestas.

> *"Uno lo que percibe es que hay una suerte de incitación a la participación en proyectos y becas internacionales, pero a una escala baja." (Hombre participante del grupo focal 4).*

Algunos participantes consideran que las actividades de la institución están focalizadas en la capital y que otras zonas quedan excluidas. Perciben que disponen de pocos recursos lo que limita el alcance de su trabajo.

> *"Lo vemos muy concentrado en el área de San Salvador, en la capital. Entonces acá en la zona oriental, a veces, este… como que nos dejan un poco relegados" (Hombre, participante del grupo focal 1).*

En opinión de los participantes el CONACYT debería liderar un proceso para definir las prioridades de investigación a nivel nacional y hacerlo en consulta con el sector púbico y otros actores interesados en la investigación. Sin embargo, opinan que no lo está haciendo.

> *"Creo que el CONACYT no está conectado con identificar esas prioridades a nivel nacional … No hay esa cultura de definir las prioridades con las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, un análisis de los planes de los programas nacionales que van a requerir evaluación, seguimiento" (Mujer, participante del grupo focal 5).*

Además, dado que los fondos para financiar investigación en ciencias sociales son limitados, los participantes mencionaron que CONACYT debería disponer de esos fondos para financiar la investigación.

> *"Uno esperaría que él [CONACYT] promoviera algún tipo de concurso de investigación, tuviera fondos para que a los mejores proyectos poderle otorgar fondos" (Hombre, participante del grupo focal 1).*

Por otro lado, de acuerdo con los participantes se necesita una institución centrada en las ciencias sociales que ordene los intereses del país relacionadas con las necesidades de investigación. Esta institución debería articular y promover los esfuerzos de investigación entre la academia, el Estado y otros actores. Las funciones de esa institución deberían incluir la definición de las prioridades de investigación –a través de una consulta que involucre a actores públicos y privados–, promover la investigación en las áreas identificadas –por ejemplo, a través de fondos concursables–, y dar a conocer esas prioridades entre los financiadores internacionales para que otorguen fondos en esas áreas. Sin embargo, comentaron que actualmente no parece factible que el gobierno impulse una institución como la mencionada. En opinión de los participantes, debería revisarse el rol del CONACYT y evaluar si podría asumir esta función. Independientemente de que asuma o no ese rol, consideran que la institución necesita una renovación y fortalecimiento de sus recursos humanos, financieros y de comunicación.

Con respecto a la Red de Investigadores Salvadoreños (REDISAL) que maneja CONACYT, la mayoría de los participantes dijo que no la conocía. Los que sí la conocen o han escuchado sobre ella opinan que es un esfuerzo valioso, pero débil –sobre todo financieramente– al cual se le ha dado poca difusión y por eso muchos no la conocen.

> *"CONACYT no hace suficiente publicidad. No sé si es la palabra correcta, pero de cómo funciona y de cómo se puede ser parte de la red de esos investigadores. Entonces, ¿qué sucede? Las personas tienen la impresión de que no existe tal cosa" (Mujer, participante del grupo focal 2).*

Además, existe la percepción de que REDISAL no está fomentando las relaciones y el trabajo colaborativo entre investigadores.

> *"Es que no hay comunicación … El objetivo de una red es promover la relación entre individuos que están trabajando en áreas similares o en temas similares. Pero la verdad es que no existe" (Hombre, participante del grupo focal 1).*

3.4. Actores asociados con el desarrollo de investigación

En esta sección se presenta el proceso de elaboración de la lista de las personas relacionadas con la investigación en ciencias sociales en El Salvador, que se asocian con las instituciones identificadas y clasificadas en las cuatro categorías: instituciones de educación superior, gobierno y agencias financiadoras, sector privado y sociedad civil. Este listado se considera el marco muestral del cual se seleccionará la muestra para la aplicación de las encuestas a investigadores, administradores de investigación o usuarios de la comunidad de políticas públicas.

Elaboración del listado de investigadores en ciencias sociales (marco muestral)

Como se comentó anteriormente, el listado preliminar de actores se obtuvo revisando diversas fuentes disponibles. Entre ellos, la página web y los documentos más recientes producidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en los que se publica información sobre las capacidades de investigación científica de algunas instituciones del gobierno que realizan investigación y de las instituciones de educación superior públicas y privadas del país. La información recolectada por CONACYT incluye la investigación en áreas que van más allá del interés para este estudio –ciencias naturales, agrícolas, ingeniería y tecnología–, por lo que se excluyeron a los investigadores de estas áreas que pudieron ser identificados. También se excluyeron a los investigadores en ciencias de la salud, con la excepción de aquellos que hacen investigaciones en las áreas de salud pública y medicina social que si se incluyeron como parte del mapeo.

Para las instituciones que no registra CONACYT, se elaboró un listado preliminar de organizaciones con base en la experiencia, conocimiento y colaboraciones previas de FUSADES con otras instituciones. Este listado se compartió con otros investigadores de la institución del área social, económica, legal y política para que ayudaran a identificar las que se hubieran quedado por fuera. Además, se solicitó apoyo del área de comunicaciones de FUSADES para identificar a medios de comunicación y líderes de opinión que no estuvieran en el listado preliminar.

Con el listado de actores revisado, se procedió a elaborar una matriz que recoge la siguiente información de las instituciones:

- Nombre
- Ubicación geográfica
- Si la institución contrata investigadores (sí/no)
- Número de investigadores en ciencias sociales contratados
- Breve descripción de la institución y su trabajo de investigación
- Unidad(es) dentro de la institución que realizan investigación. En el caso de las instituciones de educación superior, se realizó además una búsqueda de centros de investigación, observatorios, institutos que hacen sondeos de opinión, comités de ética, etc. asociados con ellas.
- Áreas o temas de investigación
- Datos de contacto (encargados de las unidades de investigación, oficinas de información pública, personal de referencia, etc.)
- Páginas web

Además, se realizó una priorización preliminar de actores que podrían ser entrevistados para profundizar los resultados de las encuestas a investigadores y administradores de investigación.

Una vez elaborado el listado de actores, se empezó a construir la base de datos de investigadores asociados con las instituciones clasificadas como productoras de investigación. Esta información se obtuvo de diversas fuentes:

- Revisión de la página web de la Red de Investigadores Salvadoreños (REDISAL) operada por CONACYT, la cual se encarga de su actualización.
- Se solicitó a CONACYT la base de datos de investigadores de REDISAL, y se obtuvo la siguiente información: nombres, apellidos, emails, sector empleo, lugar de trabajo, grado académico alcanzado, área de investigación, última fecha de actualización. Sin embargo, en algunos casos el grado académico, área de investigación y la fecha de actualización no estaban incluidas en la base.
- Revisión de las páginas web de instituciones de gobierno, agencias de cooperación, instituciones de educación superior, oenegés, tanques de pensamiento, medios de comunicación, gremiales y sindicatos.
- Dado que las páginas web de las instituciones que no están en la base de datos de REDISAL no muestran la información de su personal, se enviaron correos electrónicos para solicitar la siguiente información de los investigadores que contratan: nombre, cargo, área de investigación, unidad o departamento donde trabaja, tipo de contrato (permanente o temporal), correo electrónico y teléfono. Sin embargo, no todas las instituciones brindaron la información. Algunas organizaciones argumentaron que sus políticas de confidencialidad se los impedían; otras no respondieron a los correos, a pesar de que se les contactó en distintas ocasiones para dar seguimiento a la solicitud.

Marco muestral para la aplicación de las encuestas

El **marco muestral** para las encuestas está compuesto por el listado completo de los investigadores, administradores o usuarios, que pudieron ser identificados para cada una de las categorías y subcategorías.

Inicialmente se identificaron 598 investigadores que fueron el punto de partida para el levantamiento de la encuesta. Sin embargo, durante el proceso de seguimiento que se hizo a través de llamadas telefónicas para verificar el llenado de la encuesta, se reportaron 12 personas que no aplicaban para llenar la encuesta por no ser del área de ciencias sociales, 74 personas que ya no formaban parte de la institución, y 63 profesores hora clase. Esto produjo un total de 149 casos que fueron excluidos del número inicial. Por otro lado, no proporcionaron información de contacto de 15 investigadores –argumentando motivos de confidencialidad– por lo que no pudieron ser contactados. Después de descontar estos casos, se obtuvo un marco muestral de 434 investigadores (ver tabla 6).

Tabla 6. Clasificación de investigadores y administradores que forman parte del marco muestral según categoría y disponibilidad de información de contacto

Categoría		Productores *	Coordinadores 1/	Investigadores identificados	Investigadores Info. contacto
C1	**Gobierno y agencias financiadoras**	16	14	97	82
C1.1	*Gobierno*	**10**	**10**	**68**	**53**
C1.1.1	Gobierno Central	6	7	26	26
C1.1.2	Instituciones autónomas	3	2	37	22
C1.1.3	Instituciones descentralizadas	1	1	5	5
C1.1.4	Consejos de investigación	0	0	0	0
C1.1.5	Otras entidades del Estado	0	0	0	0
C1.2	*Agencias financiadoras*	**6**	**4**	**29**	**29**
C1.2.1	Donantes internacionales	6	4	29	29
C1.2.2	Donantes privados internacionales	0	0	0	0
C1.2.3	Organismos internacionales	0	0	0	0
C2	**Instituciones de Educación Superior**	**34**	**48**	**322**	**322**
C2.1	Públicos	5	13	76	76
C2.2	Privados	29	35	246	246
C3	**Sociedad Civil**	**8**	**6**	**25**	**25**
C3.1	Organizaciones no gubernamentales (ONG)	3	3	3	3
C3.2	Centros de pensamiento sin fines de lucro	5	3	22	22
C3.3	Líderes de opinión	0	0	0	0
C3.4	Medios de comunicación	0	0	0	0
C3.5	Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales	0	0	0	0
C3.6	Gremiales	0	0	0	0
C4	**Sector Privado (industria)**	**7**	**7**	**5**	**5**
C4.1	Centro de investigación privado	1	1	0	0
C4.2	Organizaciones empresariales	3	3	5	5
C4.3	Empresas consultoras	3	3	0	0
	TOTALES	65	75	449	434
	TOTAL DE EXCLUIDOS			**149**	
	No aplican para llenar la encuesta			*12*	
	No forman parte de la institución			*74*	
	Profesores hora clase			*63*	

*Incluye solamente las instituciones para las que se ha podido confirmar que contratan investigadores.

1/ Abarca a los administradores de Centros de opinión pública o de investigación que forman parte de las universidades. En el caso de la universidad pública se adicionaron a los administradores de las unidades de investigación de las facultades según la definición de ciencias sociales de GDN. Cuando las instituciones del gobierno central reportaron que cuentan con más de una unidad de investigación que no operan en la misma área se incluyeron a todos los administradores.

Fuente: Elaboración propia a partir de metodología del DRA (GDN, 2020) con información recolectada en mapeo.

De forma paralela, se identificaron a los administradores de investigación. Para las instituciones de educación superior se obtuvo información del nombre y contacto de la persona que está a cargo de las unidades de investigación con base en los datos de REDISAL, la cual se validó a través de llamadas telefónicas. Para el resto de las instituciones se recolectó y validó información por diversos medios mencionados en secciones anteriores de este documento. En total, se identificaron 75 administradores de investigación (ver tabla 6).

De igual forma, se construyó un listado de potenciales usuarios de la investigación en ciencias sociales que pertenecen a las instituciones de gobierno, instituciones internacionales, y otros actores incluidos en este estudio. Se envió la encuesta a 143 personas, en algunos casos se envió a más de una persona dentro de la misma institución.

Resultados de la encuesta

La encuesta se realizó de forma virtual, y se envió a todos los investigadores, administradores y hacedores de política pública identificados con información de contacto. Los tres cuestionarios de la encuesta (de administradores, investigadores y comunidad de políticas públicas) estuvieron disponibles por un período de aproximadamente 4 semanas. Además, el período para recibir respuestas se extendió en tres ocasiones a fin de lograr mayor número de respuestas. Al mismo tiempo, se enviaron correos de recordatorio a las personas que no habían completado la encuesta y también se hicieron llamadas telefónicas para confirmar que recibieron el correo electrónico y para recordarles que llenaran la encuesta.

El 64% de los administradores de investigación identificados completaron la encuesta. La mayoría de los que respondieron pertenecen a instituciones de educación superior. El 10.7% de los administradores se clasificaron como rechazos, es decir, no quisieron responder la encuesta. De este grupo, tres personas respondieron que no tenían suficiente información para llenarla, el resto no especificó la razón. Finalmente, el 25.3% que no respondió a la encuesta no pudo ser contactado para recordarles que la llenaran o preguntarles por qué no lo habían hecho, aunque se les envió el correo en varias ocasiones y se les llamó por teléfono en distintos días y horas (ver tabla 7).

Aproximadamente 45.2% de los investigadores identificados respondieron la encuesta. Al igual que en el caso anterior, la mayoría de los que respondieron pertenecen a instituciones de educación superior. El 5.1% expresaron que no querían responder a la encuesta (rechazos), los investigadores de una institución de gobierno explicaron que solo el jefe llenaría la encuesta; algunos investigadores manifestaron no tener interés y otros no especificaron la razón. El 49.8% no respondió la encuesta y no pudo ser contactado por lo que no se le pudo hacer un recordatorio de forma personal (aunque sí se hizo por correo electrónico) y tampoco se le pudo preguntar por qué no la llenaron (ver tabla 7).

El 18.2% de los hacedores de política pública y otros potenciales usuarios respondieron la encuesta. El 10.5% se clasifican como rechazos, es decir, que expresaron que no tenían interés en llenarla sin especificar otra razón. El 71.3% restante no llenó la encuesta y tampoco pudieron ser contactados durante el período de seguimiento (ver tabla 7).

Tabla 7. Resultados del levantamiento de información

	Investigadores			Administradores			Comunidad de Políticas Públicas		
	Efectivas	Rechazo	No contacto[1]	Efectivas	Rechazo	No contacto[1]	Efectivas	Rechazo	No contacto[1]
C1 Gobierno y agencias financiadoras	23	4	55	6	2	5	12	5	53
C1.1 Gobierno	19	3	31	4	2	4	9	4	45
C1.1.1 Gobierno Central	5	2	19	1	2	4	4	2	22
C1.1.2 Instituciones autónomas	10	1	11	2	0	0	3	2	7
C1.1.3 Instituciones descentralizadas	4	0	1	1	0	0	0	0	1
C1.1.4 Consejos de investigación							0	0	1
C1.1.5 Otras entidades del Estado							2	0	14
C1.2 Agencias financiadoras	4	1	24	2	0	1	3	1	8
C1.2.1 Donantes internacionales	4	1	24	2	0	1	3	1	7
C1.2.2 Donantes privados internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C2 Instituciones de Educación Superior	154	18	150	34	4	10			
C2.1 Públicos	29	3	44	10	1	2			
C2.2 Privados	125	15	106	24	3	8			
C3 Sociedad Civil	18	0	7	3	1	2	13	10	49
C3.1 Organizaciones no gubernamentales (ONG)	3	0	0	2	0	1		1	2
C3.2 Centros de pensamiento sin fines de lucro	15	0	7	1	1	1	1	1	0
C3.3 Líderes de opinión							2	2	2
C3.4 Medios de comunicación							6	6	37
C3.5 Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales							3	0	6
C3.6 Gremiales							1	0	2
C4 Sector Privado (industria)	1	0	4	5	1	1	1	0	0
C4.1 Centro de investigación privado	0	0	0	1	0	0			
C4.2 Organizaciones empresariales	1	0	4	2	0	1	1	0	0
C4.3 Empresas consultoras	0	0	0	2	1	0			
Total general	196	22	216	48	8	19	26	15	102

1/ No se pudo hablar con estas personas porque trabajan desde casa/están disponibles solo por correo electrónico, estaban ocupadas/no podían tomar la llamada, el número está equivocado, no contestan, buzón de voz, número no existe, no tienen número telefónico.

Fuente: Elaboración propia a partir de metodología del DRA (GDN, 2020) con información de encuestas realizadas en el marco de este proyecto.

3.5. Consideraciones a partir del mapeo de actores

- Actualmente, prevalece la percepción de que hace falta una mayor articulación y promoción de los esfuerzos de investigación en ciencias sociales entre la academia, el Estado y otros actores. Aun cuando se considera necesario establecer alguna instancia que desempeñe ese rol, no se considera factible que el gobierno impulse esta iniciativa. El único organismo público con un rol similar (el CONACYT) enfoca

su trabajo en las instituciones de educación superior, y en el trabajo de algunas instituciones públicas. Por consiguiente, para quienes fueron consultados en este mapeo y pertenecen a otros tipos de instituciones, es evidente la ausencia de articulación entre todos los actores que hacen investigación.

- El rol de director o coordinador de investigación suele encontrarse como parte de las funciones de investigador. Se ha identificado que la figura de "administrador de investigación" que se plantea en la metodología de GDN no siempre es desempeñada de forma exclusiva por una persona, sino que las actividades propias de un administrador son absorbidas por uno o más miembros del equipo de investigación, ya sea que se trate de un investigador senior o del director de una unidad de investigación, quienes ejercen estas actividades de forma paralela a las funciones de investigación.
- No hay un registro único sobre las personas que se desempeñan como investigadores en ciencias sociales en el país; y la poca información existente no necesariamente es de fácil acceso. Si bien existen redes de profesionales investigadores, como REDISAL o Red de Investigadores del Banco Central de Reserva (REDIBACEN), estas poseen al menos dos limitantes: no están actualizadas o no están disponibles al público.
- Se presenta un subregistro de investigadores en ciencias sociales debido a que no existe un registro único, la generación de esta información no necesariamente se genera periódicamente y/o está disponible, como se mencionó anteriormente; y, además, la afiliación a las redes de investigadores es voluntaria.
- La falta de actualización de las redes de investigadores que pudieron ser consultadas tienen sobrerregistro de investigadores en ciencias sociales. Por ejemplo, se identificaron al menos tres docentes e investigadores de distintas universidades que aparecen en las bases de datos consultadas que reportaron que tienen más de tres años de no hacer investigación. Por otro lado, se identificaron docentes que no están en la institución superior a tiempo completo (hora–clase) y no se puede asegurar que hacen investigación.
- El marco muestral también se redujo por casos de investigadores que inicialmente estaban vinculados con una de las instituciones del mapeo, pero que al momento de la encuesta ya no estaban trabajando en ella.

3.6. Conclusiones

En El Salvador existe un amplio grupo de actores (productores, usuarios y financiadores) involucrados en la investigación en ciencias sociales, los cuales se relacionan entre sí, pero no de forma articulada, sistemática ni permanente, por lo que, de acuerdo con los actores consultados, no funcionan como un sistema de investigación.

Aun cuando se cuenta con un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual según su misión podría desempeñar un rol de coordinador entre distintos actores que realizan investigación en ciencias sociales su trabajo está enfocado en las Instituciones de Educación Superior (IES) y algunas entidades de gobierno. Además, las actividades que desarrolla relacionadas con las ciencias sociales son poco conocidas entre los investigadores. Por lo que es necesario que el Consejo fortalezca sus estrategias de comunicación sobre las actividades

que desarrolla en el área de ciencias sociales y que difunda la información entre los actores que están menos familiarizados con su trabajo, como la sociedad civil y el sector privado.

Tampoco se cuenta con una institución que lleve un registro de todos los investigadores que hay en el país; ni es posible crearlo con las fuentes de información disponibles. Existen algunas redes de investigadores –como la Red de Investigadores Salvadoreños coordinada por el Consejo Salvadoreño de Ciencia y Tecnología– pero no contienen registros exhaustivos ya que la afiliación es voluntaria y, en general, hay poco conocimiento sobre ellas entre los investigadores en ciencias sociales.

La investigación en ciencias sociales enfrenta diversos retos. En primer lugar, existen inconvenientes para acceder a datos e información debido a que las estadísticas sociales son limitadas y su actualización es muy lenta, hay pocas fuentes de consulta y documentos que estén digitalizados y sean accesibles virtualmente, cada vez es más difícil obtener información pública, y además se percibe que hay recelo para compartir información de parte de instituciones públicas y también de otros actores. Por otro lado, se han identificado deficiencias en las capacidades de los investigadores, por ejemplo, en cómo conducir investigaciones aplicando métodos científicos rigurosos, escribir para revistas científicas en inglés, entre otras competencias propias de quienes ejercen esta profesión.

Dos retos que tienen incidencia más directa sobre el grado de influencia de la investigación en las políticas públicas son el desconocimiento sobre la utilidad de las ciencias sociales y los recursos financieros limitados. La falta de comprensión acerca de la utilidad e importancia de las ciencias sociales lleva a que sus aportes sean poco valorados y, por lo tanto, que haya poco interés por usar investigación para la toma de decisiones. Este poco interés por aplicar los resultados de la investigación se observa en el Estado, pero también en otros actores que podrían demandar o contratar investigación. Además, el poco interés influye en que no exista una agenda de investigación nacional que haya sido definida con la participación de todos los actores.

Los recursos para financiar la investigación son limitados y afectan diversas etapas del proceso, por ejemplo, el acceso a bibliotecas virtuales pagadas, la remuneración de investigadores y la difusión de resultados. La falta de recursos suficientes lleva a los productores a la búsqueda de fondos, lo que incide en la agenda de investigación ya que, en buena medida, debe acomodarse a las áreas y temas para los cuales hay financiamiento disponible. Los financiadores internacionales desempeñan un rol importante en términos de financiamiento; no obstante, no siempre hay coincidencia entre los temas que ellos quieren financiar y las necesidades del país. Por otro lado, aunque el Estado contrata algunas investigaciones en temas de su interés, no dispone de fondos concursables de los que puedan acceder otros actores del entorno.

En cuanto al interés en la investigación y el poder de influencia, existe una percepción amplia de que los centros de pensamiento tienen alto interés, pero en la coyuntura actual, bajo poder de influencia. En cambio, las IES son percibidas –por ellas mismas y por otros actores– con bajo interés y bajo poder. Por otro lado, el gobierno central se considera que tiene un alto poder de influencia, pero bajo interés. Mientras que los financiadores internacionales tienen alto interés y también alto poder para influir.

4. DRA Framework

Puntos a destacar

- El Salvador ha sido relativamente efectivo en desarrollar capacidades básicas para la producción de investigaciones sociales. Existe un sector dedicado a estas actividades, compuesto por actores diversos, pero concentrados en el área metropolitana de San Salvador y en pocas instituciones.
- En cuanto a la realización de investigaciones, en el país se identifican limitaciones relacionadas con restricciones de acceso a información, el tiempo disponible para actividades de investigación, formación deficiente y baja inversión, así como una débil cultura orientada a hacer investigación.
- Las capacidades y recursos disponibles permiten que la divulgación de conocimiento sea más fácil entre profesionales dedicados a la investigación que con el público en general. Para la generación de conciencia pública, el discurso y activismo político, constituyen desafíos la dificultad de transmitir resultados en lenguaje sencillo y la ausencia de coincidencia entre los canales de comunicación retomados por la academia y los consultados por la población.
- Existen indicios de que pocos investigadores trabajan en colaboración con formuladores, mientras que no puede concluirse en qué grado se retoman los resultados de los estudios en las políticas públicas.

4.1. Producción de la investigación

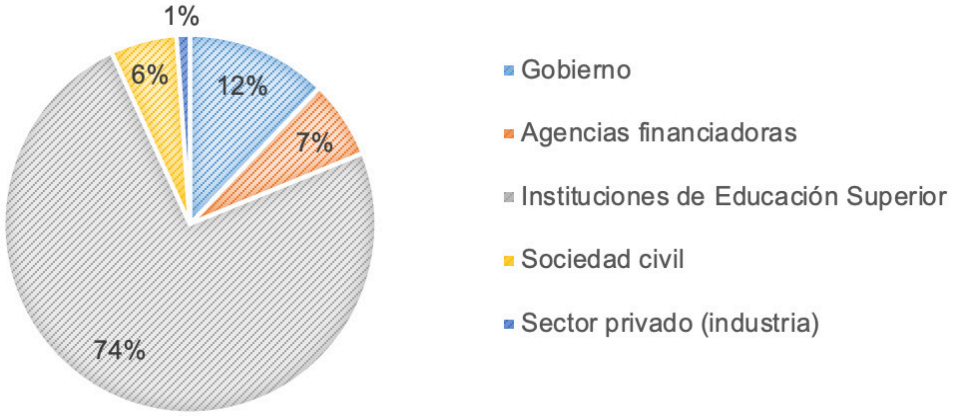
El proceso de producción de la investigación en ciencias sociales requiere que las instituciones y los investigadores cuenten con diversos insumos y realicen actividades administrativas e investigativas. En ese sentido, esta sección busca conocer qué tan efectivo es El Salvador en la producción de investigación social, así como también identificar cuáles son los principales desafíos y oportunidades. Para ello, a continuación, se exploran distintos aspectos que influyen en la producción y su solidez.

Insumos de investigación

Las condiciones económicas y sociopolíticas del país han influido en sus capacidades de investigación a lo largo del tiempo, de tal manera que cuenta con insumos básicos. Si bien no hay un registro exacto de estos, la información disponible permite caracterizar los recursos para producir investigación social.

En primer lugar, la evidencia muestra de manera consistente un sector relativamente pequeño. El mapeo logró cuantificar 434 investigadores en ciencias sociales, equivalente a 140 por cada millón de personas económicamente activas. Además, varía según el tipo de actor (ver distribución en la gráfica 1). Tres de cada cuatro investigadores en ciencias sociales están en las IES. El gobierno, por su parte, abarca 12% a través del nivel central, autónomas y entidades descentralizadas. La participación de agencias financiadoras, sociedad civil y sector privado es baja, principalmente mediante donantes internacionales, centros de pensamiento, ONG y organizaciones del sector privado.

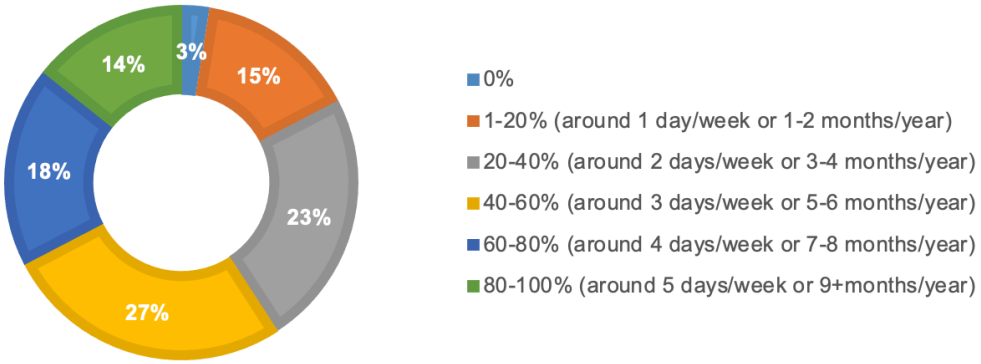
Gráfica 1. Investigadores en ciencias sociales



Fuente: Elaboración propia con datos del mapeo realizado en el marco de este proyecto.

Respecto a las capacidades propias del recurso humano, existen limitaciones de las cuales se destaca el insuficiente tiempo para actividades de investigación y las deficiencias en su formación. Por un lado, el tiempo y la carga laboral limitan el ejercicio investigativo de algunos actores, particularmente gobierno, agencias financiadoras e IES (gráfica 2). En promedio, los investigadores dedican entre 40% y 60% de su tiempo, a excepción de los de la sociedad civil que se ubican en el rango de 60% a 80% y los de la industria, en el de 20% a 40%. La mayoría de estos dos últimos actores considera que es suficiente el tiempo asignado a sus actividades de investigación; sin embargo, menos del tercio de los investigadores del gobierno, agencias financiadoras e IES lo consideran suficiente.

Gráfica 2.Tiempo promedio asignado a actividades de investigación

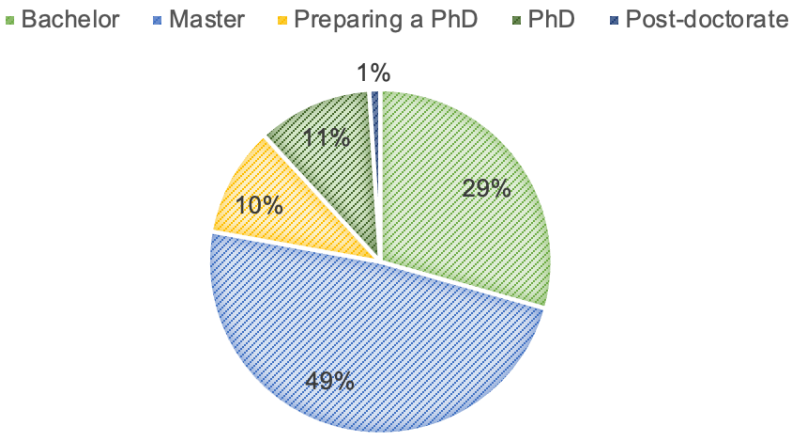


Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en el marco de este proyecto.

Por otro lado, la formación pareciera frenar la adopción de habilidades necesarias para una producción sólida de investigación en ciencias sociales. Según la gráfica 3, la mayoría de los investigadores encuestados alcanzó un nivel de maestría (49%) o pregrado (29%). Expertos entrevistados señalaron que los estudios de pregrado desarrollan poco las competencias de investigación y en posgrado hay vacíos de cantidad y calidad de programas. De hecho, en los grupos focales, se reportaron deficiencias en el manejo de metodologías, habilidades para la investigación y manejo de corrientes diversas de pensamiento. Estas podrían atribuirse a las debilidades de la oferta académica, de las cuales se destaca el contenido desactualizado y la exclusión de formación en investigación del currículo. También se denunció poco conocimiento sobre ética en la investigación, poca cultura de someter a revisión de pares y dificultades para comunicar de manera sencilla los resultados de una investigación.

Más allá del recurso humano, hay capacidades institucionales, como la infraestructura, que facilitan la producción de investigación en ciencias sociales, pero también tienen restricciones como la disponibilidad y el acceso a la información. Los investigadores encuestados se sienten levemente satisfechos con la efectividad de la infraestructura para la investigación en cuanto a recursos, instituciones y equipamiento (espacio de trabajo, computadora, apoyo técnico, programas estadísticos, programas antiplagio, acceso a internet, etc.). A pesar de que tienen el mismo nivel de satisfacción sobre la información en términos de accesibilidad, diversidad y cantidad, hay retos importantes al respecto. Las inconveniencias para acceder a datos e información, tales como la inexistencia, la desactualización y la dificultad de acceso (reservación de información pública, demora en la entrega, pérdida de investigaciones históricas, pueden afectar la generación de conocimiento, el debate y el diseño de políticas públicas o programas con base en evidencia. Los entrevistados también denuncian la insuficiente producción de estadísticas sociales periódicas, pues el principal proveedor no genera

Gráfica 3. Formación de investigadores en ciencias sociales



Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en el marco de este proyecto.

información en todas las temáticas sociales ni en la forma requerida; la limitada digitalización de fuentes de consulta; y el recelo para compartir información. Por ejemplo, solo la mitad de los productos de investigación en línea están libres de restricciones para acceso y uso.

En cuanto al financiamiento, de manera general, El Salvador invierte muy poco en investigación y desarrollo. Según datos de la UNESCO, el gasto promedio bruto en I+D como porcentaje del PIB fue de 0.16 para El Salvador, mientras que para Costa Rica fue de 0.38. El monto de inversión es todavía menor para la investigación social: por ejemplo, según datos del CONACYT, en 2018, de cada US$100 dólares invertidos en I+D, alrededor de US$40 es asignado para ciencias sociales, tanto en las IES, como en el gobierno. La UNESCO registró un gasto promedio bruto de US$44,470 por investigador en ciencias sociales. Sin embargo, no se tiene la información necesaria para hacer comparaciones entre países y comprender mejor la magnitud de esta inversión.

Ciertamente, la limitada disponibilidad de fondos influye en la producción de investigación, al igual que las prioridades que tenga la institución productora determinan cuánto de los recursos se asigna para ello. En los grupos focales, se mencionó que, si bien las IES expresan interés en investigación, en la práctica no necesariamente es una prioridad, ya que pocos recursos financieros y tiempo ya están destinados. Más aún, ligado al limitado financiamiento, no existe un sistema adecuado de incentivos económicos para la profesión. Algunos investigadores opinaron que esto repercute en la motivación para estudiar y hacer investigación y, por lo tanto, en cierta medida disminuye la oferta y demanda de investigación social.

Cultura de investigación y servicios de apoyo

En El Salvador parece que no existe una fuerte cultura orientada a hacer investigación social: si bien el marco legal reconoce el funcionamiento de un sistema, este no es específico a ciencias sociales ni exclusivo de actividades de investigación y, además, algunos investigadores no expresaron que forman parte de un sistema formal. Sin duda, este entorno también afecta directamente la producción de la investigación en ciencias sociales y el reconocimiento de la importancia de definir políticas públicas para promover el desarrollo con base en ella. Al respecto, en el marco de los grupos focales realizados, un participante manifestó lo siguiente:

> *"Existe como una resistencia, primero a reconocer la importancia que las disciplinas sociales tienen y, en segundo lugar, a apoyar esfuerzos que permitan que desde estas disciplinas se puedan hacer aportes al entendimiento y al funcionamiento de la sociedad en general." (Participante de IES).*

Aunque múltiples actores se involucren, no lo hacen de forma articulada ni sistemática. Además, pareciera no haber claridad respecto a la existencia y funcionamiento de un sistema de investigación en ciencias sociales, ni una institucionalidad sólida que lo respalde. La mayoría de los actores que producen investigación confirma la inexistencia de una entidad nacional que lidera la investigación en ciencias sociales, algunos no lo saben y otros pocos manifiestan que sí existe. De hecho, la mitad de los investigadores y administradores de investigación afirmó que no existe. Para aquellos que reconocieron

su existencia, esta es levemente efectiva en proveer normas y estándares, orientaciones, herramientas, foros, revisiones éticas y políticas. Aunque se desconoce a cuál institución estos actores identifican como ente coordinador de la investigación en ciencias sociales, el único organismo con un rol similar es el CONACYT. No obstante, su trabajo en los últimos treinta años se ha enfocado únicamente en las IES y algunas entidades gubernamentales. Por lo tanto, no monitorea la participación de todos los actores considerados para este análisis. Además, ha obtenido pocos resultados y muestra debilidades en cuanto al desarrollo de actividades relacionadas con la investigación en ciencias sociales, la articulación entre actores y el desarrollo de estándares de calidad en la investigación. De igual forma, 58% de los investigadores y administradores de investigación afirmó que no existe una política relacionada con la investigación en ciencias sociales. Por su parte, aquellos que sí reconocen su existencia la calificaron como levemente efectiva en comunicar la estrategia y misión, alinearse con prioridades, promover investigación social, financiarla, definir procesos, supervisar y organizar revisiones éticas.

No reconocer un marco institucional a cargo de la investigación social y la falta de claridad al respecto podrían incidir en el alcance de los esfuerzos de investigación de los distintos actores y limita su quehacer. Ciertamente, resulta oportuno debatir sobre la necesidad de una o un asocio de instituciones que desarrollen su visión, misión, estrategia y agenda de investigación, al igual que el tipo de políticas y protocolos que funcionarían para un sistema de investigación en ciencias sociales. Teniendo en cuenta este entorno, no llama la atención que el nivel de interés en la investigación y poder de influencia en la política pública sea distinto entre las instituciones productoras y varíe según la percepción de cada una. De hecho, podría bloquear oportunidades de invertir en investigación social con base en una agenda y prioridades, desarrollar programas que brinden información confiable y periódica y propiciar las condiciones necesarias para un intercambio de conocimiento y toma de decisiones informadas. Al respecto, algunos actores consideran difícil poder contar con esa visión estratégica en el contexto político actual del país, en el cual se ha afectado la transparencia, acceso a información, libertades, entre otros aspectos. El respeto a los derechos y libertades, tales como la de expresión, asociación y académica, son condiciones fundamentales para la producción de investigación.

Por otra parte, hay factores relacionados con la cultura de la investigación del país que influyen en la solidez de la producción, entre los cuales se destaca el insuficiente interés en fortalecer la revisión de pares, la capacitación y los servicios de apoyo. La revisión de pares contribuye a disminuir los sesgos y garantizar el rigor técnico de la investigación. No obstante, la mayoría de los investigadores encuestados advirtieron que no había revisión por pares en las publicaciones. Pese a ello, 61% ha tenido acceso a mentores para su investigación, quienes, en promedio, se sienten satisfechos con la orientación, retroalimentación constructiva, aprendizaje obtenido y crecimiento personal. La capacitación permite fortalecer capacidades y generar nuevas. Los investigadores encuestados manifestaron sentirse levemente satisfechos. En los últimos tres años, han recibido formación en diseño, gestión, metodologías y herramientas de investigación durante 7 semanas. En promedio, los administradores de investigación estimaron

un monto de US$390 por investigador en ciencias sociales para financiar el fortalecimiento de sus capacidades. Los servicios de apoyo ayudan a planificar e implementar investigaciones, elaborar propuestas y contratar. De manera general, los investigadores y administradores de investigación se sienten levemente satisfechos con ello.

Resultado de investigación y formación

Las ciencias sociales han tomado mayor relevancia a lo largo del tiempo y, por ende, la producción científica ha aumentado; no obstante, todavía es poca. Al menos la mitad de los investigadores encuestados no ha publicado en los últimos tres años, ya sea artículos, documentos de trabajo, libros, investigaciones o notas de política. Según un reporte internacional, El Salvador produjo 76 documentos entre 2018 y 2020, lo que corresponde a 0.18 por investigador en ciencias sociales. Según datos del CONACYT, la investigación social es principalmente conducida por las IES y corresponde a informes técnicos y artículos en revistas y/o boletines. Al respecto, la poca producción podría asociarse con la disponibilidad de recursos de distintos tipos, ausencia de claridad sobre el funcionamiento de un sistema e insuficiente cultura de investigación. El interés y la prioridad que tenga cada institución también influyen en la producción de investigación social, al igual que las restricciones de tiempo y formación.

Además, hay limitaciones en la efectividad de las universidades en formar investigadores capaces y calificados que también podrían afectar la oferta y demanda de la producción de investigación social. Por un lado, según la premisa que entre mayor es el porcentaje del personal de las universidades con doctorado, mayor es la calidad de su formación, las universidades de El Salvador no serían lo suficientemente efectivas en formar profesionales en la investigación. En promedio, 13% del personal de las universidades que trabaja en las ciencias sociales tiene doctorado. Por otro lado, aunque casi la mitad de los estudiantes en niveles superiores están inscritos en una carrera de ciencias sociales, no es garantía que estas faciliten el desarrollo de competencias de investigación bajo cierto estándar de calidad. Por último, solo 1.23% de los jóvenes de 18 a 25 años se ha graduado de estudios superiores en ciencias sociales. Este porcentaje puede relacionarse con múltiples aspectos, desde la calidad de la formación y su insuficiente capacidad para atraer y retener estudiantes, hasta desafíos propios del contexto socioeconómico salvadoreño como la necesidad de abandonar el proceso educativo por razones económicas.

Oportunidades y sostenibilidad

La producción de investigación social se ve fuertemente afectada por la baja valoración de la investigación y de su profesionalización, así como también por el insuficiente reconocimiento de la relevancia y el aporte de la misma. Tres de cada cuatro investigadores encuestados no creen que hay oportunidades atractivas para los investigadores y, además, en los grupos focales, algunos advirtieron que no gozan de un sistema de incentivos adecuados. En promedio, los investigadores están levemente insatisfechos con los incentivos relacionados con una carrera en investigación, en términos de recompensa financiera, reconocimiento social y seguridad laboral. A su vez, están levemente satisfechos con otras recompensas, tales como crecimiento profesional, competitividad y beneficios sociales. En cierta medida, la insatisfacción con la carrera profesional en investigación, en términos de oportunidades, incentivos financieros, seguridad

laboral, crecimiento profesional y baja valoración social, perjudica el funcionamiento del mercado de la investigación. Prueba de ello es que, en ciertas áreas, es más difícil encontrar empleo y remuneración para los investigadores, por lo que les resulta necesario realizar actividades adicionales para complementar los ingresos. De hecho, muchos han tenido que realizar trabajos colaborativos sin remuneración por la relevancia de la investigación o el interés de adquirir experiencia profesional y darse a conocer.

Desde luego, no tener claridad sobre el funcionamiento del sistema de investigación, al igual que el poco reconocimiento de la importancia de la investigación en distintos ámbitos (desde la sociedad civil hasta el gobierno), desfavorecen la creación de oportunidades para los investigadores de manera sostenible. Sin ello, no hay un contexto que propicie el interés en realizar productos de investigación, la generación de competencias de investigación, la asignación de recursos financieros, institucionales y humanos para temas de interés y la articulación de esfuerzos de investigación con base en prioridades de país e instituciones. Sin considerar las IES, que tienen un mandato legal de producir investigación, solo hay 36 investigadores por un millón de personas económicamente activas.

Finalmente, es importante reconocer que hay fuertes limitaciones de información para conocer con certeza la capacidad del país para producir una sólida investigación en ciencias sociales, cuantificarla, medir su calidad y compararla. En primer lugar, las estadísticas utilizadas para el análisis no son exactas por diversas razones. No hay registros que permitan cuantificar todas las personas que se desempeñan como investigadores en ciencias sociales. Si bien existen redes de profesionales investigadores, no abarca todos los actores, no están actualizados o no están disponibles. El mapeo de actores, por su parte, tampoco logró contabilizar la cantidad total de investigadores que trabajan en las ciencias sociales, pero sí identificó la del 68% de las instituciones productoras. Asimismo, las áreas de ciencias sociales consideradas en el marco de este proyecto incluyen algunas áreas de humanidades (filosofía, historia, lingüística), por lo que indicadores del CONACYT y UNESCO podrían tener un subregistro para efectos de este análisis. En segundo lugar, se desconoce cómo la afiliación a redes nacionales e internacionales ayuda a llenar vacíos de insumos para la investigación y de formación, cómo es la rotación de investigadores en ciencias sociales, cuántos se van del país y cuántos investigadores apoyan a la producción salvadoreña desde el extranjero.

Pese a ello, la evidencia recopilada permite caracterizar y analizar la investigación en ciencias sociales en El Salvador y tener parámetros que podrían ser útiles para realizar algunos análisis comparativos con otros países. En suma, el país ha generado capacidades para la producción de investigación social. Diversas instituciones participan en ello, las cuales cuentan con recursos humanos, institucionales (infraestructura, equipamiento, información) y financieros. Sin embargo, múltiples factores influyen en la cantidad y calidad de los productos, tales como la formación en términos de oferta, demanda y calidad, el insuficiente tiempo asignado para el trabajo de investigación, el acceso a información confiable y actualizada, la limitada disponibilidad y asignación de fondos, la ausencia de claridad sobre el funcionamiento de

un sistema y la falta de una cultura de investigación. En ese sentido, conviene que los mismos actores reconozcan buenas prácticas y áreas de mejora para optimizar la producción de investigación en ciencias sociales de manera oportuna y sostenible.

4.2. Difusión de la investigación

El proyecto DRA (GDN, 2020) entiende la difusión de investigación como la comunicación de resultados y productos de investigación. Esto incluye los canales a través de los cuales los responsables de política pública, academia, sociedad civil y sector privado interactúan para discutir y compartir sus hallazgos o para asumir compromisos de trabajo asociados con la investigación. Implica la generación de interés, formación de actitudes y cambios de comportamiento para fortalecer el compromiso con el conocimiento producido a través de investigación.

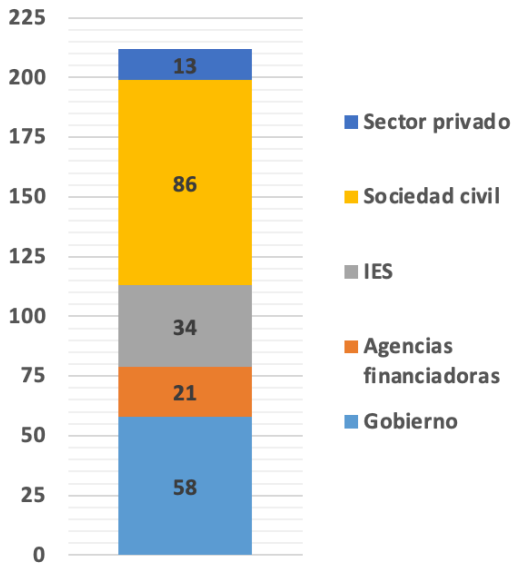
Para conocer el estado de la difusión de investigación en El Salvador, hay que saber qué tan efectiva es la comunicación de investigación para crear conciencia pública, discurso y activismo cívico. Para determinarlo, es necesario explorar: ¿hay una diversidad de actores trabajando en investigación en ciencias sociales y, si es así, qué tan efectivos son sus esfuerzos para colaborar y relacionarse entre ellos?, ¿qué tan capaces son los investigadores de comunicar y diseminar sus productos, nacional e internacionalmente?, ¿qué tan efectivos son los eventos de comunicación y socialización?, y ¿cuál es la cobertura que los medios de comunicación hacen de temas asociados con las ciencias sociales? Haciendo uso de los resultados de la investigación realizada durante este proyecto (DRA), en los siguientes apartados, se pretende dar respuesta a dichas interrogantes.

Actores y redes

Como se describió en el apartado de "Perspectiva histórica", fue a partir de la década de los 80 que otros actores, aparte de las universidades, empezaron a tener mayor importancia en la investigación en ciencias sociales en El Salvador. A 2021, a través del mapeo, se lograron identificar 212 actores relacionados con esta actividad, entre instituciones de gobierno, agencias financiadoras, instituciones de educación superior (IES), organizaciones de sociedad civil y sector privado. Como es posible apreciar en la gráfica 4, es el sector de la sociedad civil donde se contabiliza una mayor cantidad de actores, seguida del gobierno y las IES. No obstante, 41% de los investigadores están aglomerados en solo cinco instituciones, de las cuales cuatro son IES: el Banco Central de Reserva (BCR), la Universidad de El Salvador (UES); la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) y la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES). Por tanto, aunque ahora haya una mayor variedad de actores participando en investigación en ciencias sociales, con respecto al siglo anterior, prevalece una concentración de investigadores en las IES.

Por otra parte, el 78.3% de los actores asociados a la investigación en ciencias sociales están concentrados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). En concordancia, el 47.2% de los investigadores en esta rama trabajan en instituciones ubicadas en San Salvador. Esta situación podría estar relacionada con la concentración financiera, productiva, institucional y cultural que hay en el AMSS, pues la evidencia ha demostrado que esta posee mejores condiciones económicas y sociales que otras regiones al interior del país (FUSADES, 2019a). De manera que, además

Gráfica 4. Número de actores del entorno de investigación social en El Salvador, según categoría



Fuente: Elaboración propia con datos del mapeo realizado en el marco de este proyecto.

de la preponderancia de las IES, también se puede apreciar una concentración en torno a la capital salvadoreña de actividades vinculadas con la investigación en ciencias sociales.

Respecto a la relación entre los actores, esta fue catalogada como "circunstancial" por algunas de las personas consultadas en el marco del mapeo. A pesar de estar centralizadas geográficamente, se percibe una desconexión en las actividades desarrolladas por las diferentes instituciones y, en general, no se encuentran funcionando como un sistema. Una muestra de esto es que de los 194 investigadores encuestados por el proyecto (DRA), el 74% afirma que de manera esporádica o, aún peor, nunca colaboran con otras personas ajenas a la institución en la que trabajan. Adicionalmente, consideran que en El Salvador no hay "cultura" de discusión de investigaciones entre distintos sectores y que en la actualidad tampoco existen las condiciones que lo faciliten. En este sentido, los actores consultados opinan que el CONACYT debería de desempeñar un papel más activo en el fomento de la articulación entre actores y, a través de mecanismos de registro de investigadores, catalizar las relaciones y el trabajo colaborativo entre ellos.

Comunicación de la investigación

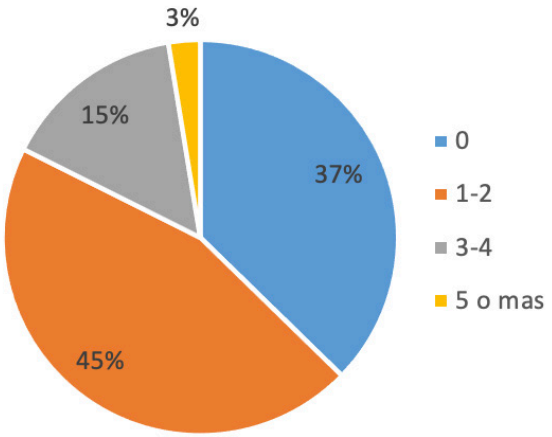
Existen elementos que pueden contribuir a que los investigadores salvadoreños diseminen sus productos nacional e internacionalmente. En el análisis de contexto se identificó que, a pesar de las limitaciones en infraestructura digital y las dificultades de conectividad, la mayoría de instituciones relacionadas con investigación en ciencias sociales en El Salvador tiene acceso a internet e instrumentos para difundir sus resultados. Además, en Latindex[32] se encuentran registradas 14 revistas, producidas en el país, enfocadas en esta

especialidad científica. Por su parte, las universidades y centros de pensamiento forman parte o mantienen relaciones de trabajo con redes internacionales de investigación, como fue descrito en la sección de "contexto internacional". Este vínculo con entidades extranjeras contribuye a que el 74.2% de la investigación en ciencias sociales, de los últimos tres años, se haya producido en colaboración con alguna entidad de otro país (Scimago, 2021). En este sentido, es posible evidenciar un contraste bastante marcado entre la desconexión entre actores al interior del país, descrito en el apartado anterior, y el alto grado de trabajo en sinergia existente con instituciones del exterior.

Al mismo tiempo, los enlaces que puede haber entre instituciones parecen no replicarse en el caso de los investigadores. Del total de los encuestados durante este proyecto (DRA), solo dos de cada cinco pertenecían a alguna red o asociación profesional, ya sea nacional o internacional. Esto constituye una limitante a su capacidad de difundir los resultados de su trabajo en dichos ámbitos.

Otro desafío que identifican las personas consultadas, es la escasa disponibilidad de fondos para realizar actividades relacionadas con la difusión de investigación. Por ejemplo, es necesario contar con recursos económicos para poder invertirlos en fortalecimiento de capacidades de comunicación. Sin embargo, dos de cada cinco investigadores encuestados no habían recibido ninguna capacitación de este tipo en los últimos tres años (ver gráfica 5).

Gráfica 5. Número de capacitaciones en comunicación en las que participaron los investigadores encuestados en los últimos tres años



Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en el marco de este proyecto en 2021.

32 https://www.latindex.org/latindex/inicio

Los que sí pudieron beneficiarse de alguna, manifestaron estar "moderadamente" satisfechos, pero reconocían que es necesario hacer más para mejorar este tipo de habilidades. En este sentido, una necesidad de formación apremiante, que fue manifestada por las personas consultadas durante el mapeo, es en cómo comunicar los resultados de la investigación en un lenguaje sencillo que "el ciudadano común" comprenda. Asimismo, el bajo dominio del idioma inglés de los salvadoreños, expuesto en la sección de "contexto internacional", es un reto para la publicación de artículos en revistas internacionales. Respecto a la necesidad de fondos para actividades de difusión y de fortalecer capacidades de comunicación, los participantes de los grupos focales expresaron:

> *"Yo lo que pienso es que a veces hay muy buenas investigaciones, pero nunca se da suficiente fondo para darlas a conocer. Entonces existen las investigaciones, pero la gente no se entera de ellas" (Participante de grupo mixto).*

> *"Se debe buscar fortalecer cómo se hace esa devolución de los resultados de la investigación a la población, a poblaciones metas que no necesariamente es el mismo entorno académico científico, sino lograr bajar a esos otros tipos de población con un lenguaje más apropiado" (Participante de IES).*

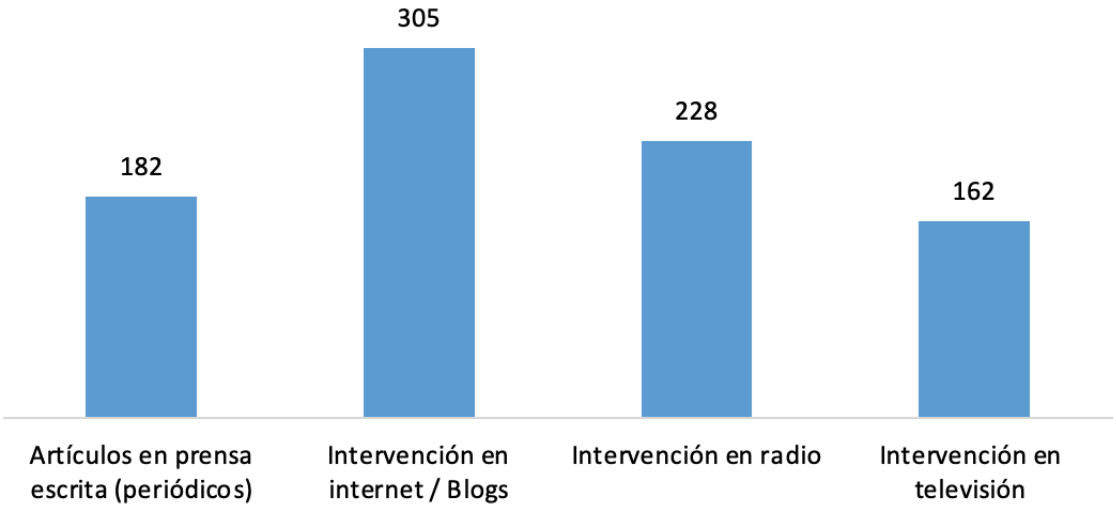
Productos de comunicación de la investigación

Organizar eventos puede ser un mecanismo para que las instituciones dedicadas a la investigación en ciencias sociales difundan los resultados de su trabajo. Los resultados de la encuesta realizada en el marco de este proyecto (DRA) revelan que, en los últimos tres años, en promedio, estas entidades han organizado principalmente conferencias dirigidas a audiencia académica nacional. No obstante, la información recabada no permite medir la efectividad de estos eventos, pues no se conoce con exactitud, por ejemplo, ¿cuántas personas asisten? O, ¿qué otras acciones son catalizadas por la realización de este tipo de actividades? Estos son aspectos en los que valdría la pena indagar en futuras investigaciones.

Lo que sí fue posible identificar fue una consistencia entre los resultados de la encuesta y lo manifestado por las personas consultadas durante el mapeo de actores. Mientras la primera fuente revelaba que la mayor cantidad de eventos que se realizan son dirigidos a audiencias académicas, en los procesos de consulta de la segunda se reconoció que era necesario explorar estrategias para la devolución efectiva de resultados a población externa a la comunidad académica. Al mismo tiempo, se insistió en la importancia de ser capaces de transmitir esos mensajes en un lenguaje amigable para este otro tipo de receptores no científicos.

Otras plataformas para difundir investigación en ciencias sociales son los medios de comunicación. A pesar de esto, más de la mitad de los investigadores encuestados expresaron no haber hecho ninguna publicación a través de tales recursos en los últimos tres años. Teniendo en cuenta solo a quienes sí lo hicieron, en su mayoría han hecho uso de blogs o publicaciones en internet, mientras que fue la televisión el canal menos utilizado (ver gráfica 6).

Gráfica 6. Número de actividades de difusión de investigación en los últimos tres años, según medios de comunicación



Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en el marco de este proyecto en 2021.

En el apartado de "Aspectos culturales" se mencionó que la televisión y el internet son las principales fuentes en las que los salvadoreños se informan sobre el quehacer científico. Por tanto, no hay una coincidencia completa entre los medios utilizados por los investigadores para comunicar los resultados de su trabajo y los consultados por las personas para informarse. Además de que todavía hay que hacer importantes esfuerzos para que no solo sea la minoría de investigadores los que publiquen su trabajo a través de medios de comunicación.

Popularización de la ciencia

Este proyecto (DRA) considera que la popularización de la ciencia se logra cuando el público valora la evidencia basada en investigación y accede activamente a diversos productos científicos (GDN, 2020). Para tener una referencia del estado de tal aspecto en un país, evalúa la relación que hay entre medios de comunicación e investigación en ciencias sociales, así como la cobertura de esta en dichos canales. Sin embargo, los resultados obtenidos en el caso salvadoreño parecen indicar una desconexión entre ambos elementos.

El promedio de los investigadores encuestados expresó que rara vez son contactados por periodistas o medios de comunicación después de haber publicado una investigación. Al mismo tiempo, tanto investigadores como administradores de investigación expresan sentir una satisfacción moderada de la cobertura que los medios de comunicación hacen de la investigación en ciencias sociales. Las encuestas y grupos focales realizados en el marco de este proyecto (DRA) revelan que se percibe una falta de coincidencia entre el trabajo realizado por la comunidad científica nacional y la agenda/intereses de los medios, pues estos últimos se guían más por la coyuntura. En este sentido, sería relevante explorar, en futuras investigaciones, la perspectiva de los periodistas: ¿qué percepción tienen de las ciencias sociales? ¿con qué frecuencia

se cubren temáticas asociadas con la investigación en esta especialidad científica? ¿qué hace falta, desde su punto de vista, para aumentar la relevancia de este tipo de esfuerzos?

En el apartado de "Gobernanza y marco regulatorio de la investigación en ciencias sociales" se mencionó que en el país existe, desde 2017, una Política Nacional de Popularización de la Ciencia y la Tecnología. Además, que una encuesta bianual va midiendo la efectividad de las actividades realizadas por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología en el marco de la misma. Los resultados más recientes a los que fue posible acceder, en el marco de este proyecto (DRA), corresponden a la consulta realizada en 2018. En esta solo uno de cada diez salvadoreños manifestó conocer alguna institución nacional dedicada a la investigación científica y tecnológica (CONACYT, 2018). Al respecto, sería interesante también indagar, en el futuro, cómo son retomados estos hallazgos para mejorar las iniciativas públicas orientadas a popularizar la ciencia.

En resumen, en los últimos 30 años, ha incrementado la diversidad de actores asociados con la investigación en ciencias sociales en El Salvador. Sin embargo, a pesar de estar concentrados en la capital y tener cercanía geográfica, estos no se relacionan entre sí regularmente. Al mismo tiempo, existen condiciones y recursos que pueden facilitar la difusión de resultados de investigación, pero persisten limitantes en cuanto a las habilidades de los investigadores para hacerlo. Esto limita su capacidad para poder transmitir, de manera efectiva, sus hallazgos a personas ajenas a la comunidad científica, por ejemplo, a través de medios de comunicación masiva. En consecuencia, la popularización de las ciencias sociales se ve afectada y la población permanece desconectada de la producción de conocimiento en esta rama del saber. Por tanto, en el contexto salvadoreño, aún persisten barreras que es necesario superar para que la investigación sea capaz de crear conciencia pública, discurso y activismo cívico.

4.3. Uso de la investigación para la política pública

La metodología que enmarca este análisis considera como parte integrante del sistema de investigación la función de uso y aceptación de las investigaciones en las políticas públicas (DRA, 2020). Para comprender cómo se encuentra el país en este ámbito, a continuación, se identifica el valor percibido de las investigaciones sociales por parte de los formuladores de políticas, si estas corresponden a sus necesidades e intereses y si existe demanda por investigaciones independientes, robustas y transparentes. Como pasos previos a la incorporación de evidencia en las políticas públicas, se ahonda también en la interacción de formuladores e investigadores, si a estos se les hace partícipes directamente o se les solicita consejo, y si estos generan material que transmita sus resultados.

Investigaciones políticamente amigables

Existen puntos de vista opuestos entre los investigadores y los administradores de investigación acerca de la libertad académica. Como se observa en las respuestas a la primera pregunta en la tabla 8, los académicos perciben que los formuladores de políticas tienen poca influencia en la independencia con que se investiga en el país. En contraste, los administradores (respuestas

Tabla 8. Percepción de investigadores y administradores sobre la influencia de formuladores de políticas en la independencia de las investigaciones

Pregunta sobre independencia de la investigación	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	A veces	A menudo	Siempre
Frecuencia con la cual considera que los formuladores de políticas influencian a los investigadores en términos de independencia de sus investigaciones.	19%	23%	27%	23%	8%	0
Los resultados de las investigaciones que afecten políticas públicas pueden ser discutidas abiertamente entre investigadores y formuladores de política pública.	7%	29%	33%	18%	13%	0
Los investigadores son capaces de producir investigación independiente sin influencia indebida de los formuladores de política pública.	4%	9%	16%	47%	29%	0
Los formuladores de políticas brindan el espacio necesario para que los investigadores de ciencias sociales obtengan los datos necesarios.	11%	24%	36%	22%	9%	0
El clima político actual propicia la producción de resultados de investigación independientes	13%	29%	29%	20%	11%	0

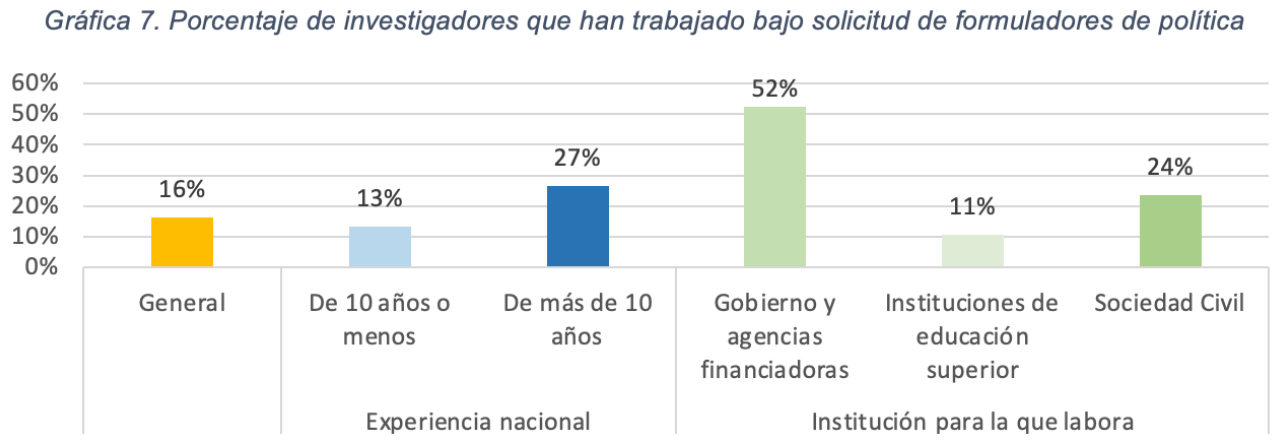
Nota: La primera pregunta corresponde a la opinión de los investigadores, las demás son respuestas de los administradores de investigación.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en el marco de este proyecto.

a las preguntas 2 a la 5 en la misma tabla) señalan que solo ocasionalmente las condiciones políticas y el espacio para recolectar información permiten la producción de resultados independientes y, una vez obtenida esta evidencia, la discusión abierta entre académicos y políticos es rara u ocasional. Por tanto, no es seguro que en el contexto salvadoreño exista producción de investigaciones robustas e independientes.

En este escenario de libertad parcial y dificultades de acceso a información, la demanda de investigaciones como insumo para la formulación de políticas parece ser moderada. Entre los miembros de la comunidad de políticas públicas encuestados, un 44% señala haber contratado investigadores, casi exclusivamente nacionales. No obstante, debido a que la tasa de respuesta entre este subconjunto de actores fue del 18%, la demanda real de evidencia social puede diferir, e incluso ser menor. Desde el lado de los académicos, poco más de un tercio de los que ejercen un rol administrativo y el 16% de los restantes indican haber trabajado como respuesta a solicitud de formuladores (ver gráfica 7). De ellos, solo el 5% de los investigadores y el 18% de los administradores señalan haber recibido algún fondo para desarrollar las investigaciones solicitadas. Los académicos que declararon haber trabajado en estos proyectos bajo requerimiento se caracterizan por pertenecer principalmente a instituciones gubernamentales o agencias financiadoras,

Gráfica 7. Porcentaje de investigadores que han trabajado bajo solicitud de formuladores de política



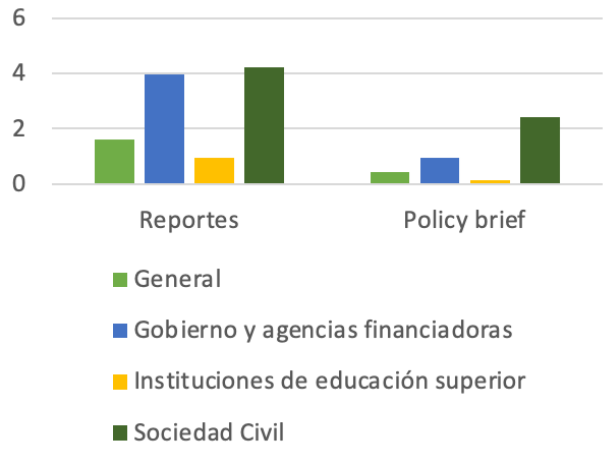
Nota: La primera pregunta corresponde a la opinión de los investigadores, las demás son respuestas de los administradores de investigación.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en el marco de este proyecto.

tener mayor experiencia nacional y formación en métodos cuantitativos. Así también, en los proyectos financiados se evidencian como prioridad las áreas de educación, economía y desarrollo sostenible; mostrando menor inversión en disciplinas más cualitativas. Las diferencias expuestas entre la demanda aparente de investigaciones y quienes suplen esas necesidades generan interrogantes acerca de si las respuestas obtenidas de la comunidad de políticas públicas son generalizables, si existe concentración de solicitudes en pocos investigadores o si estos desconocen el origen de las investigaciones institucionales que realizan.

La opinión de los miembros de la comunidad de políticas públicas encuestados sugiere que se benefician de los productos de los investigadores, pero los académicos reconocen que casi no generan este tipo de material. En los últimos tres años, solo el 26% de los investigadores elaboró alguno de estos documentos, con una producción media de menos de dos informes y un policy brief en todo el periodo. Al respecto de esta baja redacción de insumos para formuladores de políticas, se resalta que existen académicos en el extremo opuesto, con hasta 30 informes y 24 policy brief generados en los tres años. Estas discrepancias en la producción de material conteniendo los resultados de las investigaciones podría explicar, en primera instancia, por qué son pocos los investigadores que efectivamente influyen en la toma de decisiones y, por tanto, constituiría un mecanismo a considerar por el resto de los académicos en la mejora de las políticas públicas. Además, en la preparación de estos documentos, se presentan diferencias significativas debidas a la institución a la que pertenece el investigador y, para el caso de los policy brief, influye también la experiencia nacional que posean (ver gráficas 8 y 9).

Gráfica 8. Cantidad promedio de materiales elaborados por investigador según la institución a la que pertenecen

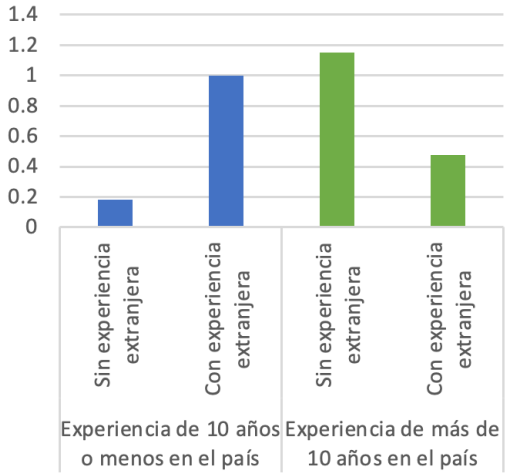


Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en el marco de este proyecto.

Además, el 45% de la comunidad de políticas públicas que participó en las encuestas de esta investigación indica haber producido o coproducido con un investigador material de política usando los resultados de las ciencias sociales. Estos resultados tan dispares entre la academia y los políticos refuerzan la posibilidad de que exista concentración de trabajo conjunto en pocos investigadores particulares. No obstante, persiste la inquietud de si el grupo de formuladores y usuarios en su totalidad consideran que se benefician de los resultados de los investigadores y si la producción en conjunto con investigadores es uniformemente media.

Después de publicar un paper o reporte, la frecuencia con que se interactúa con los políticos se considera nula por el 78% de los investigadores. No obstante, existen académicos que la denotan como frecuente, pero son casos aislados. Esta intercomunicación es mayor entre los que tienen más experiencia y educación formal, así como entre los que pertenecen a instituciones de sociedad civil, gobierno o agencias financiadoras.

Gráfica 9. Cantidad promedio de policy brief elaborados por investigador según su experiencia nacional e internacional



Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en el marco de este proyecto.

Adicionalmente, un porcentaje bajo de los investigadores ha desempeñado o ejerce actualmente el rol de formulador de políticas (solo el 1.6% de ellos, tanto en el gobierno central como en el local). En la metodología del análisis del DRA (2020) se contempla a este indicador como un proxi de la fluidez con que se realizan intercambios entre ambos sectores del sistema, principalmente por ser un medio directo de transferencia de los hallazgos de las investigaciones. Por tanto, que sea tan bajo repercute directamente en la posibilidad de que estos resultados sean del conocimiento de los formuladores de políticas y, al no contar con experiencia en el ámbito público, los investigadores podrían desconocer los mecanismos más efectivos para comunicarse con ellos. Además, podría implicar que estos desconozcan sobre la dinámica real de la formulación de políticas, el lenguaje utilizado para priorizar criterios, cuáles se toman en cuenta para evaluarlos, los tiempos en los que se analizan

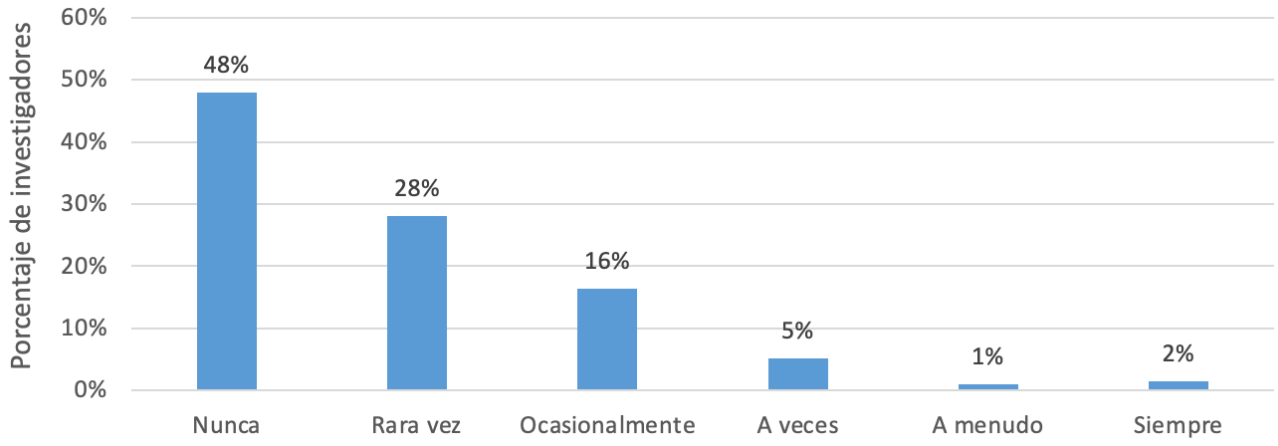
opciones, qué tipo de información buscan los tomadores de decisión, si existe disponibilidad o apertura a informarse, quiénes son las principales fuerzas de peso y, como consecuencia, pueden ignorar cómo enfocar correctamente sus esfuerzos de incidencia e interacción.

Formulación de políticas basadas en evidencia

La interacción formal e informal entre formuladores de políticas e investigadores es baja. La pertenencia de investigadores a cuerpos asesores de políticas es reducida tanto en el ámbito del gobierno central (8.2%) como en los locales (4.6%). En ambas instancias de consulta, los académicos que trabajan en instituciones de gobierno y agencias financiadoras, o que cuentan con experiencia internacional, presentan mayor involucramiento.

Entre los gobiernos locales, también es un diferenciador significativo poseer mayor experiencia investigativa nacional. Además, el 48% de los académicos considera que nunca interactúa con los formuladores de políticas y 28% le asigna una frecuencia reducida (ver gráfica 10). Estas respuestas contrastan con las de los administradores, ya que el 56% de ellos indican la existencia de relaciones formales y casi el 50% de colaboración informal entre la institución a la que pertenecen y políticos. Estos resultados diferenciados, sugieren que estas relaciones se dan principalmente con los mandos directivos de las investigaciones, bajo el desconocimiento de los investigadores participantes y persisten los indicios de concentración de colaboración.

Gráfica 10. Frecuencia de interacción de investigadores con formuladores de políticas públicas

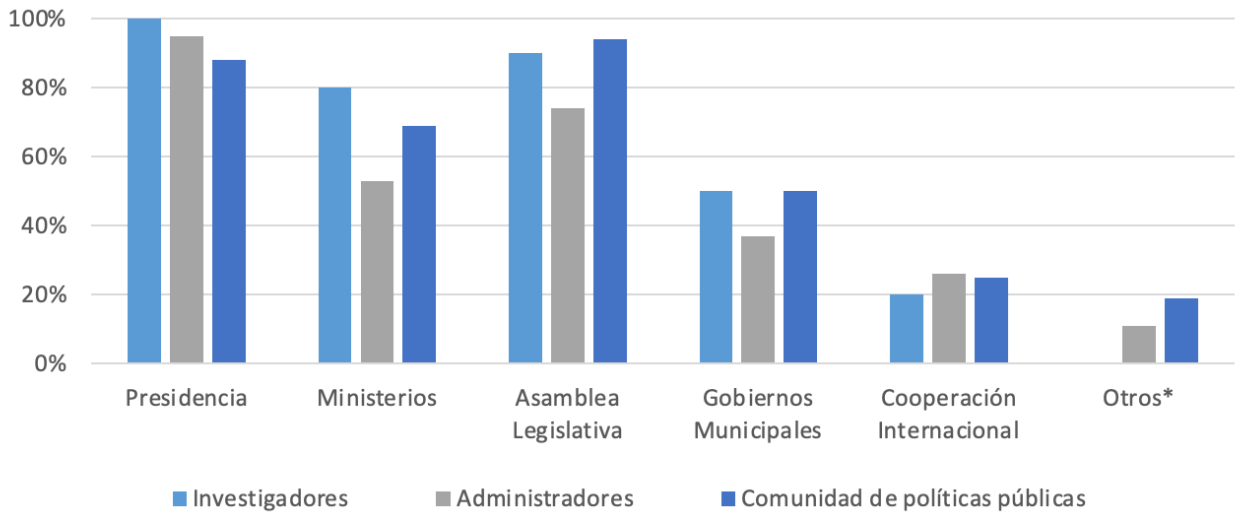


Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en el marco de este proyecto.

La influencia percibida de las investigaciones en las políticas públicas es variada entre los académicos y su participación en el diseño de políticas es baja. Los investigadores tienen la impresión de que la institución a la que pertenecen si tiene esa capacidad de impacto, pero un 26% de los administradores indica lo contrario. A esta influencia, los académicos la califican como ligeramente efectiva y los miembros de la comunidad de políticas públicas sugieren que es frecuente. Entre los investigadores, solo el 11% ha participado en el diseño de una política pública en los últimos 3 años, mientras que el 33% de los encuestados en la comunidad de políticas públicas indica que ha colaborado con investigadores para ese fin. Se desconoce en cuáles áreas se han destinado estos esfuerzos de trabajo en conjunto, si coinciden con las áreas de las cuales se ha solicitado y financiado investigación o si retoman los resultados de investigaciones ya finalizadas en otras disciplinas. Sin embargo, se identifican diferencias en la interacción debidas a características de los académicos que coinciden con la intercomunicación después de publicar un paper o reporte.

De forma generalizada, los miembros del sistema de investigación social perciben actitudes de sectores relacionados que ignoran o niegan los resultados de las investigaciones basadas en evidencia. Entre los académicos y aquellos con rol administrativo las percepciones son similares, con poco más de la mitad de cada grupo advirtiendo su presencia. En cambio, la información disponible de los miembros de la comunidad de políticas públicas sugiere mayor consenso sobre su existencia (80% las identifica). Además, cerca de la mitad de todos los encuestados para este análisis consideran las actitudes como recientes y coinciden en que provienen principalmente de la presidencia, los ministerios y la Asamblea Legislativa (ver gráfica 11).

Gráfica 11. Tendencias anticientíficas percibidas



*Incluye: otros financistas o investigadores públicos o privados.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en el marco de este proyecto.

Productos de política basados en evidencia

Los investigadores consideran que su trabajo es raramente utilizado en documentos de políticas y se cuestiona que se solicite colaboración en la implementación de estos, así como la efectividad del apoyo brindado. Solo el 22% de los acadéicos considera que su trabajo es reconocido y retomado por las personas que formulan políticas. Sin embargo, la mayoría de los investigadores desconoce la cantidad de citas que sus trabajos han obtenido en este tipo de documentos. Del 4% que apuntó conocer al respecto, el promedio de citas reconocidas fue de 4.4, pero las respuestas están concentradas en valores inferiores a este. No obstante, las opiniones recabadas para este estudio sugieren que el 67% de los miembros de la comunidad de políticas públicas hace uso de evidencia de investigaciones en ciencias sociales en la deliberación y toma de decisiones relacionadas con el proceso de formulación de políticas. Además, se percibe que el acceso a investigaciones en ciencias sociales se ha visto afectado por la pandemia. Se desconocen las características de la evidencia que utilizan y si el hallazgo refleja efectivamente un alto uso de la ciencia. Respecto al apoyo en la implementación de las políticas, también existen opiniones contradictorias ya que los académicos consideran que es ligeramente inefectiva, pero los miembros de la comunidad de políticas públicas encuestados la clasifican como frecuente.

Investigaciones para mejores políticas

La percepción de utilidad de las ciencias sociales entre los miembros de la comunidad de políticas públicas parece ser alta. Más del 80% de los encuestados le asigna una utilidad de, al menos, moderada a la evidencia que proviene de investigaciones sociales. Esto concuerda con los resultados obtenidos entre los salvadoreños, donde el 86% consideraba que el conocimiento científico y técnico mejora la capacidad de tomar decisiones (CONACYT, 2018). Sin embargo, no es posible aseverar con certeza que sea una opinión representativa del sector, por lo que constituye un punto de investigación aún por solventar. Además, los académicos que participaron en grupos focales indicaban que:

> *"(el gobierno) Tiene muy bajo interés en aplicar la investigación a sus políticas públicas. Si tuviera realmente interés, estaría haciendo mayor investigación en diversas temáticas."*
> *(Investigador independiente).*

> *"No necesariamente los gobiernos han estado tomando decisiones con base en evidencia, si no con base en otro tipo de consideraciones que no son las científicas."*
> *(Participante de grupo mixto).*

El análisis desarrollado en este apartado ha expuesto que los productos de las investigaciones sociales cuentan con una independencia presumiblemente moderada, restringida por el acceso que brindan los formuladores de políticas a la recolección de datos y el contexto político actual. A su vez, aunque los resultados de la comunidad de políticas públicas sugieren que se demandan los resultados de la

academia, se traducen en poca inversión al respecto y hay indicios de concentración en las solicitudes e interacción de políticos con pocos investigadores. Además, la producción de material que comunique los hallazgos científicos a los formuladores de políticas es escasa, al igual que la interrelación entre academia y tomadores de decisión. En conjunto, estas características del sistema inhiben en el uso de evidencia en las políticas y presentan retos a superar para que la percepción de utilidad encontrada se traduzca en progreso para la sociedad.

Para asegurar el uso de los resultados de las investigaciones sociales en las políticas públicas existen amplias áreas de mejora. En primera instancia, desde el lado de los investigadores es indispensable que se asegure la independencia en la definición de la agenda investigativa y se produzcan más materiales de comunicación de los resultados obtenidos para los formuladores. Ambos son pasos esenciales para que se identifiquen las posibilidades de aplicación y se solventen las necesidades latentes en el diseño, implementación y evaluación de las políticas. En segunda instancia, desde el lado de los formuladores de políticas son requeridos cambios que garanticen el acceso a información, y que partan de la inclusión de evidencia local en las políticas nacionales. Para ello, se requiere también de la mejora del sistema como un todo, ya que la actual estructura no asegura la interacción entre formuladores e investigadores.

5. Conclusiones

Puntos a destacar

- El nivel de desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales de El Salvador es relativamente modesto. Diversos factores condicionan la calidad de la producción, el alcance de su difusión y la intensidad de su uso en el debate público y las políticas públicas.
- Entre los principales factores que afectan negativamente su desempeño se encuentran: la poca valoración de las ciencias sociales, la carencia de planes institucionales y recursos para el desarrollo de capacidades científicas, y limitadas conexiones e intercambio de conocimientos con las redes académicas internacionales.
- Existe un vacío de liderazgo y poca articulación entre los actores del sistema de investigación, el cual se traduce en dispersión de recursos y competencias para producir estudios de calidad, darlos a conocer e incidir en el debate democrático y las políticas de desarrollo sostenible.
- La cantidad y calidad de los productos de conocimiento se ve restringida mayormente por el insuficiente tiempo y recursos destinados a la investigación, las restricciones en la disponibilidad y acceso a información, y la débil cultura de investigación.
- La comunicación y capacidad de incidencia de la investigación es una competencia que aún no ha sido desarrollada lo suficiente como para mejorar la conexión entre la comunidad científica y dos audiencias clave: los tomadores de decisiones de política pública y la población, en general.
- La evidencia sugiere que son pocos los investigadores que trabajan en colaboración con

los formuladores y que existe un uso insuficiente de la evidencia en las políticas debido a: una escasa demanda de investigaciones y esfuerzos limitados en la generación de estas y la difusión de sus hallazgos.

A partir de la evaluación del sistema de investigación en ciencias sociales de El Salvador se puede constatar que su desempeño es relativamente modesto y presenta varias áreas de mejora. Aun cuando la investigación social es reconocida como un área importante dentro de la producción científica nacional, diversos factores condicionan la calidad de la producción, el alcance de su difusión y la intensidad de su uso en la generación de debates y políticas públicas de desarrollo basadas en evidencia.

En lo que respecta al contexto que enmarca el sistema de investigación en ciencias sociales, su evolución y consolidación dependen de la interacción entre varios determinantes sociopolíticos, económicos e internacionales. Entre los determinantes sociopolíticos encontrados se destacan: la poca valoración de las ciencias sociales como disciplina científica, los sesgos en su conceptualización en el entorno político que podrían restringir la autonomía académica y el acceso a información relevante para la investigación, y el débil reconocimiento de su rol en la formulación e implementación de políticas públicas que promueven el bienestar de los ciudadanos. En materia económica, el desempeño del sistema de investigación ha dependido principalmente de la carencia de planes institucionales y recursos para desarrollar capacidades científicas, de comunicación y adopción de los resultados de las investigaciones. A esto se suma la existencia de un mercado laboral reducido para los investigadores y la falta de incentivos para desarrollar una carrera profesional como científico social. Y, en lo que respecta a los determinantes asociados con el entorno internacional, es claro que las capacidades actuales del sistema de investigación no permiten aprovechar al máximo la conexión con redes académicas internacionales, el intercambio de conocimientos en otro idioma distinto al local (el inglés, principalmente), y la disponibilidad de becas y recursos para la investigación social.

Considerando las percepciones de los actores (productores, usuarios y financiadores) involucrados en la investigación en ciencias sociales, se percibe que la endeble articulación entre ellos, la falta de incentivos para hacer investigación y la ausencia de liderazgo les imposibilita reconocer que son parte de un sistema que funcione. Esta situación se traduce en dispersión de recursos y competencias para producir estudios que sean pertinentes y de calidad de una manera sistemática. Por otra parte, su capacidad de influencia en el debate democrático sobre desarrollo sostenible y las políticas públicas se dificulta en la medida que prevalece la construcción de relaciones informales y circunstanciales entre sí y con los funcionarios responsables de la formulación e implementación de políticas públicas. Además, aun cuando se cuenta con un Consejo de Investigación Nacional en Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuya misión le permitiría promover la investigación social, en la práctica, dicha institución no necesariamente ejerce esta función. El consejo se concentra mayormente en las ciencias duras, únicamente da seguimiento a la investigación científica de las instituciones de educación superior y dependencias gubernamentales, y, además, dispone de pocos recursos. Si en el ámbito gubernamental existe un interés relativamente

bajo en la investigación en ciencia sociales, es difícil pensar en fortalecer el CONACYT con recursos para impulsar el desarrollo de la investigación social como primera opción. Otra alternativa podría ser estimular la creación de una red nacional de investigación en ciencias sociales impulsada por la academia y los centros de investigación privados para: favorecer el intercambio de conocimiento, la formación de grupos de investigación en temas específicos, y la prestación de servicios de capacitación en métodos de investigación, revisión de artículos científicos (*peer review*) y asegurar la ética de la investigación. Esta red eventualmente podría llegar a convertirse en un consejo de investigación en ciencias sociales.

A continuación, se resume cómo aspectos relacionados con la producción, difusión y uso de la investigación también influyen en la configuración y resultados del sistema de investigación en ciencias sociales. De igual manera, se establecen algunos aspectos que demandan la atención de los reguladores del sistema o proporcionan un punto de partida para planificar inversiones en el desarrollo de capacidades para la producción, difusión y uso de la investigación. También se señalan las palancas de cambio (*levers of change*) que podrían contribuir tanto a diseñar políticas públicas apegadas al contexto local, como a fortalecer las instituciones que realizan investigación en ciencias sociales y su capacidad de incidencia en la formulación de políticas públicas de desarrollo y la generación de debates informados.

Efectividad en la producción de investigación en ciencias sociales

En cuanto a la producción de investigación en ciencias sociales, se puede afirmar que El Salvador ha sido relativamente efectivo en desarrollar capacidades básicas para ese fin. Si bien condiciones económicas y sociopolíticas han influido en ello a lo largo del tiempo, la evidencia muestra de manera consistente un sector que se dedica a esta rama de la ciencia. Diversos actores participan en la investigación social, quienes cuentan con recursos humanos, institucionales (infraestructura, equipamiento e información) y financieros. Pese a ello, al comparar el tamaño del sector y su producción con otros países, como Costa Rica, todavía hay amplias oportunidades de mejora para maximizar la efectividad en la producción de investigación en ciencias sociales.

Múltiples factores influyen en la cantidad y calidad de producción. En cuanto a los recursos mencionados, existen limitaciones como el insuficiente tiempo para actividades de investigación, deficiencias en la formación, restricciones en la disponibilidad y acceso a la información y poca inversión en investigación y desarrollo. Para comenzar, es importante asegurar que el tiempo y la carga laboral de los investigadores sea consecuente con una mayor valoración de las ciencias sociales entre las prioridades de investigación. También se debe promover el equilibrio entre distintas actividades relacionadas con el ejercicio investigativo, las cuales deberían incluir la formación continua en métodos de investigación, la gestión de fondos para proyectos de investigación, dominio del inglés para tener acceso al conocimiento científico global y competencias para comunicar de manera efectiva los hallazgos

de la investigación e incidir en la opinión pública y los tomadores de decisiones de políticas públicas de desarrollo. En el mediano-largo plazo, es necesario mejorar la oferta académica de formación en investigación y promover el aprendizaje del idioma inglés en el sistema educativo formal, principalmente en los niveles de educación media y superior. No obstante, es incuestionable que el aprendizaje de un idioma secundario, como el inglés, y el desarrollo de la curiosidad intelectual y el pensamiento crítico, creativo e indagador, son habilidades que deberían fomentarse desde los primeros grados.

Para enfrentar el problema de restricciones en la disponibilidad y acceso a información, en el corto plazo se puede optar por la creación de grupos de trabajo capaces de generar conjuntamente información y estudios relevantes. Por ejemplo, en 2020, uniendo recursos y esfuerzos, varias instituciones de educación superior junto con un centro de pensamiento conformaron el Observatorio COVID-19 para darle seguimiento a la pandemia, el cual contaba con un consejo asesor conformado por académicos de universidades extranjeras. A través de esta iniciativa se generaron datos e investigaciones sobre la evolución de la epidemia y, además, se puso a disposición del público un banco de conocimiento con diferentes estudios que ayudaban a comprender el impacto del virus en la dinámica económica y social del país. En general, la práctica de crear redes y grupos de trabajo (nacionales y/o internacionales) entre los actores que conforman el sistema de investigación, es una buena opción para generar y compartir conocimiento, así como para optimizar y gestionar recursos que permitan ampliar la capacidad local para producir investigaciones.

Otro desafío determinante para la producción es la débil cultura orientada a hacer investigación social, ya que afecta la producción y el reconocimiento de la importancia de diseñar políticas públicas con base en evidencia. Esto se vincula directamente con tres aspectos. Primero, la poca claridad que muestran los actores respecto a la existencia y funcionamiento del sistema de investigación en ciencias sociales y de una solidez institucional que lo respalde. Esto incide en el alcance de los esfuerzos por parte de los distintos actores del sistema, limitando el quehacer de cada uno de ellos. Segundo, la falta de una fuerte cultura de investigación se traduce, según los actores consultados, en una ausencia de revisión de pares, poca capacitación en temas relacionados con la producción y difusión del conocimiento e insuficientes servicios de apoyo al desarrollo de estudios e investigaciones. Sin duda, esto afecta la solidez de la producción. Tercero, la baja valoración de la investigación y su profesionalización también influye en su demanda y oferta. En consecuencia, conviene que los mismos actores se vean a sí mismos, y de manera consciente, como sujetos dinamizadores de dicho sistema. Además de aumentar su identificación y sentido de pertenencia a este, también es fundamental que reconozcan las buenas prácticas y las áreas de mejora para optimizar la producción de conocimiento en ciencias sociales de manera oportuna y sostenible. Otra oportunidad recae en reconocer el valor del uso de la información por parte de los distintos actores que conforman el sistema de investigación en ciencias sociales, tanto los usuarios, como los productores.

Comunicación y capacidad de incidencia de la investigación

La comunicación efectiva de investigación en ciencias sociales, para generar conciencia pública, discurso y activismo cívico, es aún limitada. Aunque se cuenta con condiciones que facilitan la divulgación de conocimiento entre profesionales dedicados a dicha actividad, no sucede lo mismo cuando se trata de transmitir esta clase de ideas al público en general, dentro y fuera del país.

La transmisión de resultados de investigación en ciencias sociales, al público en general, enfrenta desafíos relacionados tanto al lenguaje como a los canales empleados para dicho fin. Los investigadores reconocen la insuficiencia de su capacidad para expresar ideas en lenguaje sencillo y hacer uso eficaz de medios de comunicación masiva. Esto provoca que haya una desconexión, entre la comunidad científica y la población salvadoreña, que no contribuye a generar conciencia sobre la importancia de esta actividad ni cultura abocada a promover su desarrollo.

Solventar esta limitación requiere el fortalecimiento de las competencias de los investigadores para transmitir de manera efectiva, los resultados de su trabajo a distintas audiencias; por ejemplo, científicos sociales, tomadores de decisiones de políticas públicas, funcionarios de las municipalidades, cooperantes y el público en general. Entre las competencias comunicacionales que deberían desarrollar se encuentran: la capacidad de expresar ideas complejas con claridad y de una manera sencilla, de manera verbal y escrita; el conocimiento y aprovechamiento de distintos canales de difusión. Es decir, los investigadores deberían conocer y aprender a utilizar diferentes formatos para difundir los hallazgos de sus investigaciones a través de medios de comunicación tradicionales (publicaciones impresas, prensa, radio y televisión), y medios no tradicionales o digitales, tales como redes sociales en Internet, archivos digitales, audios y libros electrónicos, entre otros. Sin embargo, el desarrollo de capacidades comunicacionales requiere que las instituciones que hacen investigación inviertan en este tipo de formación continua. Además, es recomendable que en sus planes de trabajo se incluya como actividad esencial el diseñar e implementar estrategias de difusión de los resultados de las investigaciones.

Los investigadores en ciencias sociales salvadoreños cuentan con la capacidad de generar productos de conocimiento cuyo contenido es útil para la comunidad científica nacional. Sin embargo, la desconexión que hay entre sus miembros no promueve la fluidez de información entre los distintos actores que la conforman y, por tanto, el alcance que tiene la difusión de investigación es limitado. Por consiguiente, es conveniente procurar el establecimiento de espacios que faciliten la comunicación periódica y sistemática de instituciones dedicadas a la investigación en ciencias sociales. Por ejemplo, la realización de foros y mesas de discusión en temas específicos con investigadores y funcionarios de instituciones públicas, espacios que probablemente ya existen, pero cuya utilidad no se concibe o asume de manera consciente como parte de una estrategia de comunicación e incidencia.

Para que la difusión de las investigaciones sea eficaz en el ámbito internacional es fundamental establecer relaciones de trabajo sólidas entre investigadores nacionales y de otros países, no solo en el idioma local. De ahí que fortalecer el

dominio del idioma inglés en la comunidad de científicos sociales favorecería la posibilidad que profesionales salvadoreños participen en espacios de discusión académica o técnica no solo regionales sino también globales. También, esto les permitiría publicar en medios internacionales de prestigio relevantes para esta rama del saber. De esta manera, se generaría un círculo virtuoso de comunicación en doble vía en donde el intercambio de conocimiento contribuiría tanto a robustecer las capacidades de investigación de El Salvador, como a posicionar a los científicos sociales locales en el mundo académico internacional.

Adopción de la investigación en las políticas públicas de desarrollo sostenible

La evidencia disponible no permite concluir inequívocamente en qué medida se retoman los resultados de las investigaciones en las políticas públicas. En la encuesta de este estudio se obtuvo un bajo porcentaje de respuestas entre la comunidad de políticas públicas y otros posibles usuarios. Por ende, es posible que exista sesgo de selección y que las opiniones recolectadas en este sector no coincidan con las del universo al cual pertenecen. Además, no existe concordancia entre los políticos y los académicos respecto al grado en que los primeros requieren investigaciones particulares de los segundos, cuánto material que utilice los hallazgos de las investigaciones se produce o coproduce, y el nivel de participación de la academia en el diseño e implementación de las políticas. Estas discrepancias, sumadas a las que existen entre los mismos académicos, sugieren que son pocos los investigadores que trabajan en colaboración con los formuladores y que existe un uso insuficiente de la evidencia en las políticas.

En este contexto, se percibe la influencia de dos conjuntos de factores por los que las investigaciones no se retoman de forma integral en el ámbito de las políticas públicas: una escasa demanda de evidencia y esfuerzos limitados en la generación de estudios y difusión de hallazgos.

Para promover la adopción de la investigación en las políticas públicas, las instituciones y profesionales que hacen investigación en ciencias sociales deben enfrentar dos desafíos. El primero está asociado con el uso de los descubrimientos y la generación de condiciones para que los tomadores de decisión soliciten más investigaciones. La información recabada en el presente estudio sugiere que existe percepción de utilidad de las ciencias sociales y sus avances, pero que ello no se traduce en altos niveles de consulta o involucramiento de la academia en la formulación e implementación de políticas, ni en numerosos requerimientos de estudios o su financiamiento. Al contrario, se percibe poca cultura crítica y de indagación, se discute muy poco la evidencia disponible entre diferentes sectores, se identifican actitudes que ignoran o niegan los resultados de las investigaciones entre actores con poder de decisión; y, adicionalmente, la población no considera que las investigaciones den respuesta a sus problemas. En consecuencia, se cuestiona la relevancia y pertinencia de las investigaciones sociales realizadas en el país, al igual que la calidad de los productos que actualmente genera la academia. Para aumentar la baja interacción entre académicos y la comunidad de políticas públicas, es imperativo buscar mecanismos e incentivos que ayuden a fortalecer las escasas relaciones entre ambos. En esa línea, ayudaría que los investigadores comprendan el proceso de formulación de políticas públicas, quiénes son sus responsables

y mediadores, y cómo las dimensiones técnicas y políticas interactúan entre sí. Esto les ayudaría a tener una visión más amplia del alcance que puede tener la investigación que generan, y a quién y cómo le pudiera ser útil. Particular relevancia cobra en este sentido que los investigadores evalúen las temáticas que abordan en sus estudios, su vinculación con los efectos y repercusiones en la ciudadanía, y el grado en que se realizan esfuerzos institucionales e individuales por comunicar de forma idónea los frutos de las investigaciones.

El segundo desafío que enfrentan los científicos sociales es cómo desarrollar investigaciones confiables y material de comunicación que asegure la diseminación de los resultados a distintas audiencias. En el sistema salvadoreño persisten amplias áreas de mejora para la producción de estudios robustos, independientes y transparentes. La evidencia disponible indica una cuestionada libertad de investigación asociada con limitantes en acceso a información y un ambiente político que no siempre propicia el desarrollo de las investigaciones. A su vez, repercuten las deficiencias en las capacidades de producción identificadas entre los académicos para la ejecución de estudios que disminuyan las dudas respecto a la credibilidad y fiabilidad de los resultados, así como en la selección de temáticas de interés público y las capacidades que posean para elaborar documentos que presenten sus hallazgos de forma concisa, en un lenguaje comprensible y claro. Es indudable que mejoras tanto en la formación de los investigadores como en la labor institucional de incidencia son pasos esenciales para la formulación de políticas basadas en evidencia que sean relevantes. Además, la academia debe fortalecer sus capacidades de investigación, comunicación e incidencia, acrecentando así sus esfuerzos de popularización de la ciencia. Es decir, de divulgar el conocimiento científico y fomentar en la sociedad la valorización de las ciencias sociales y el reconocimiento de sus aportes al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.

6. Recomendaciones de política

La evaluación del desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales permite conocer los factores que lo condicionan, sus desafíos y las áreas potenciales de mejora. Ahora corresponde proponer qué puede hacerse para producir investigaciones de calidad, ampliar su difusión y convertirlas en insumos clave para nutrir el debate público y las políticas públicas de desarrollo sostenible.

De allí que, para finalizar este reporte, a continuación se lista una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer cuatro aspectos clave para mejorar la calidad de la investigación en ciencias sociales y su contribución al desarrollo sostenible: la gobernanza y cultura del sistema de investigación, la calidad de la producción de conocimiento, la difusión efectiva de la investigación en ciencias sociales, y el uso intensivo de los resultados de las investigaciones en el diseño e implementación de políticas públicas.

Gobernanza y cultura del sistema de investigación en ciencias sociales

- *Revisar en qué medida el CONACYT podría asumir un rol más activo en la promoción y desarrollo de las ciencias sociales*. Actualmente, se percibe la necesidad de contar con una instancia enfocada en el fomento y la gestión de recursos para esta rama de las ciencias, la definición de prioridades de investigación a través de una consulta amplia y con base en las necesidades del país, y que, además, promueva la investigación a través de fondos concursables y establezca un diálogo con los financiadores internacionales para que otorguen los fondos. Siendo que, en las condiciones actuales se considera poco probable que el Estado fortalezca al CONACYT para realizar todas esas funciones, sería más realista que dicha instancia se concentrara solamente en algunas, y apoyara de alguna manera las iniciativas de coordinación de otros actores del sistema. Por ejemplo, el CONACYT podría propiciar mecanismos de registro de investigadores que incluyan las áreas en las que se encuentra haciendo investigación para facilitar el trabajo conjunto. También podría facilitar iniciativas que aglutinen investigadores y provean espacios para el intercambio académico, por ejemplo, conferencias para compartir trabajo en proceso y conocer el trabajo que están haciendo los demás.
- *Apoyar las iniciativas existentes del CONACYT que pueden contribuir al desarrollo de la investigación en ciencias sociales y procurar un mayor acercamiento de las instituciones que se dedican a esa labor con esta instancia*. Esto permitiría la creación de espacios de intercambio y reflexión sobre el desempeño del sistema de investigación, y, además, facilitaría la construcción práctica de objetivos comunes, formas de trabajo y esquemas de cooperación que contribuyan a fortalecer el desempeño del sistema de investigación y su vinculación con la solución de problemas de desarrollo estratégicos para el país desde las políticas públicas.
- *Motivar a las instituciones no gubernamentales que hacen investigación en ciencias sociales a crear una red nacional que les permita aumentar su identificación y sentido de pertenencia al sistema de investigación*. Es a través de la interacción consciente entre los actores lo que hará posible la materialización del sistema de investigación en actividades concretas, tales como el intercambio de conocimiento y el desarrollo de capacidades para producir y gestionar investigación que sea relevante y útil para los tomadores de decisiones de políticas públicas. Esta red eventualmente podría llegar a convertirse en un consejo de investigación en ciencias sociales que podría trabajar en coordinación con el CONACYT.
- *Fomento de una sólida cultura de investigación*. Es importante que los actores del sistema asuman responsabilidad en el fortalecimiento de la cultura de investigación. Sería recomendable que juntos impulsen una campaña para reconocer el valor de la investigación social y su relevancia en el desarrollo del país. También es importante promover que las diversas instituciones se comprometan a asignar fondos, tiempo y esfuerzos para ello. Aún persisten barreras a superar para que la investigación sea capaz de crear conciencia pública, debate y activismo cívico. Para superar esta realidad, se debe comenzar por lograr que los mismos

actores del sistema se sientan empoderados y parte del sistema de investigación en ciencias sociales. Es decir, que sean ellos mismos los dinamizadores de una sólida cultura de investigación.

Calidad de la producción de conocimiento

- *Fortalecer los sistemas de información, asegurar el acceso a información confiable y actualizada y garantizar intercambios de conocimiento en el ámbito nacional e internacional.* Es vital continuar promoviendo el acceso a la información pública. Sin embargo, para superar las restricciones a datos e información pública, se puede recurrir a la búsqueda de asocios y afiliaciones a redes nacionales e internacionales que faciliten el trabajo colaborativo; y de ese modo, aumente la capacidad local y los recursos para producir e intercambiar información que sea útil a los productores y usuarios de la investigación. En esta línea, también conviene crear redes locales para generar y debatir conocimiento, que incentiven el intercambio entre productores y usuarios de la investigación en ciencias sociales, tanto al interior del país como con la comunidad internacional.
- *Generar las condiciones necesarias para que la integración del sistema de investigación social al contexto internacional se convierta en una herramienta para consolidar las capacidades nacionales de investigación*. En el corto plazo, es pertinente que las instituciones del sistema fortalezcan sus unidades de gestión de cooperación y proyectos, teniendo entre sus planes el apoyo en la búsqueda de oportunidades para el fortalecimiento de capacidades para hacer investigación e insertarse en la comunidad científica internacional. En el mediano y largo plazo, es vital que el dominio del inglés sea una competencia desarrollada por todos los investigadores, que exista una mayor disponibilidad de becas para formación en ciencias sociales que la correspondiente actualmente, y se cuente con incentivos para la generación de conocimiento de calidad mundial desde los centros de educación superior.
- *Mejorar la formación en términos de oferta, demanda y calidad a fin de incrementar las habilidades en investigación.* En el corto plazo, podrían aumentarse las oportunidades de formación continua y capacitación en métodos de investigación. Esto implica que, desde los formadores, se habiliten programas en esta rama de la ciencia; desde las instituciones, asignar fondos para darles la oportunidad de formación a su personal académico y técnico, y, desde los investigadores, reconocer la importancia de desarrollar esas habilidades. Para fortalecer las habilidades investigativas se debe fortalecer la formación en métodos y ética en la investigación. Además, es importante que las universidades identifiquen a los estudiantes con habilidades investigativas y diseñen programas de apoyo para fortalecerlos. Contar con programas de pasantías en centros de investigación ayudarían a fortalecer habilidades de investigación y a crear sinergias entre centros. En el largo plazo, es necesario concientizar sobre la importancia de la investigación en ciencias sociales, incluir formación en investigación a nivel de educación media y superior (pregrado y posgrado) y promover el desarrollo de competencias investigativas y el aprendizaje del idioma inglés desde los primeros grados.

- *Fomentar mayor inversión en investigación y desarrollo, particularmente en las ciencias sociales, y un uso eficiente de esta.* La inversión en investigación debe contribuir a mejorar el desempeño de los investigadores, administradores de investigación e instituciones, aumentar la cantidad de investigación social de manera individual y articulada, mejorar la calidad de la producción, retroalimentar esfuerzos de otros y crear métricas comparables para rendir cuentas sobre la investigación en ciencias sociales y medir su desempeño. Avanzar en ese camino parte por reconocer buenas prácticas y áreas de mejora que permitan la definición de planes y estrategias para maximizar la producción en investigación en ciencias sociales, respecto a cantidad y calidad, de manera oportuna y sostenible. También es pertinente que los organismos de cooperación internacional que financian la generación de conocimiento útil para el diseño de políticas y programas incluyan fondos para el fortalecimiento de las capacidades locales de investigación. Asimismo, podrían contribuir a fomentar con mayor diligencia el diálogo efectivo entre tomadores de decisiones e investigadores, alrededor de temas sociales de interés nacional.

Difusión efectiva de la investigación social

- *Realizar modificaciones en la oferta de educación formal para mejorar las capacidades de difusión de los investigadores en ciencias sociales.* Los cambios pueden ser realizados desde niveles previos a la educación superior, a través de materias como lenguaje, donde pueden fortalecerse: las habilidades de redacción, otras competencias relacionadas con la comunicación escrita, el uso y conocimiento de medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. En las carreras universitarias debería de incrementarse la importancia que tienen, en los planes de estudio de ciencias sociales, materias asociadas con la diseminación de conocimiento de manera clara y sencilla. Estas acciones serían responsabilidad compartida por el Ministerio de Educación y las instituciones de educación formal.
- *Garantizar la oferta de educación no formal para el fortalecimiento continuo de habilidades de comunicación, oral y escrita, de profesionales que ya se dediquen a la investigación en ciencias sociales. La formación continua también puede servir para aumentar el conocimiento sobre diversas herramientas comunicacionales y sus distintos usos en la difusión de resultados.* Esta sería una responsabilidad compartida del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y las instituciones implementadoras de servicios de formación.
- *Reconociendo la importancia de la popularización de la investigación en ciencias sociales, destinar recursos para el fortalecimiento de capacidades y actividades de difusión.* Esto implica esfuerzos desde el ámbito público, como la asignación de fondos para cambios curriculares, entidades educativas y eventos de popularización de las ciencias sociales. Por su parte, el sector privado también debe apoyar con inversión directa en formación continua de investigadores, por medio de recursos económicos o concesiones de tiempo para ser dedicados a esta actividad, así como en herramientas y canales que promuevan la socialización de resultados de

investigación. En FUSADES, por ejemplo, se invierte en una Dirección de Comunicaciones, la cual está encargada de apoyar el desarrollo de competencias de comunicación, gestionar el acercamiento entre medios de comunicación e investigadores, además de brindar asesoría a estos últimos sobre el manejo de relaciones públicas y apoyarlos en la generación de productos de conocimiento de tipo audiovisual.

- *Aprovechar las herramientas de comunicación disponibles como la internet, contenido multimedia, la digitalización de documentos y los espacios en medios de comunicación para divulgar los resultados de las investigaciones.* Es importante que la comunicación se concentre en ofrecer recomendaciones que sean operativas y traducir los resultados de las investigaciones en un lenguaje que sea comprensible, a fin de llegar a diversos tipos de poblaciones, más allá de los círculos académicos y de quienes actualmente tienen interés en la investigación.
- *Ampliar el alcance de los espacios de encuentro que las instituciones de investigación en ciencias sociales ya han establecido de manera aislada e independiente.* De esta forma, al involucrar más actores y establecer sinergias con nuevas entidades, se suscitaría el establecimiento formal de un sistema; al mismo tiempo que se generaría identidad hacia este, por parte de sus integrantes, debido a que sería una iniciativa proveniente de ellos mismos. En este proceso, sería valioso contar con el acompañamiento del CONACYT, como organismo público asociado con las actividades de investigación científica, con la finalidad de tener incidencia en la generación de políticas que fortalezcan y beneficien la realización de este tipo de actividades en el país.
- *Aprovechar las relaciones de trabajo establecidas entre instituciones nacionales e internacionales, comunicar los resultados de las investigaciones y tener acceso al fortalecimiento de capacidades locales.* En este marco, podrían realizarse acciones para el intercambio de experiencias, adaptación de prácticas exitosas, adquisición de nuevos conocimientos y herramientas de trabajo, entre otros. Asimismo, las alianzas internacionales pueden constituir un puente para establecer más conexiones en dicho ámbito, y que de esta forma las ciencias sociales salvadoreñas vayan adquiriendo mayor presencia fuera de las fronteras nacionales.

Uso intensivo de la investigación social en las políticas públicas para el desarrollo

- *Evaluar la relevancia, pertinencia y vinculación de las investigaciones realizadas con las políticas públicas.* La academia debe tomar una postura proactiva para volver evidentes las conexiones de su trabajo con las políticas públicas y cómo se aplican en la mejora de los procesos actuales, las implicancias que tendría insertar sus hallazgos y partir de la selección de temáticas de estudio que sean relevantes para estos fines. Los investigadores deben enfocar sus esfuerzos a llenar los vacíos de conocimiento en áreas que tengan potencial de impacto en la población y en el desarrollo social del país.
- *Capacitar a los académicos para la realización de investigaciones rigurosas y la producción de material que comunique de forma efectiva, ágil y concisa sus hallazgos desde la óptica de las políticas públicas.* Existe un potencial de

influencia en las políticas desde la academia en la creación de contenido que comunique, tanto a la población como a los formuladores, sobre los resultados e implicaciones de sus estudios. Este espacio de oportunidad puede aprovecharse al identificar el medio y lenguaje idóneo para trasladar los mensajes principales de su trabajo. Para ello se requiere de formación en temáticas elementales de comunicación, al igual que mantenerse en continua actualización respecto a técnicas y metodologías que les permitan el desarrollo de investigaciones, incluso en ámbitos con poca información agregada. Este esfuerzo recae tanto en los mismos individuos como en las instituciones a las que pertenecen y en la articulación entre actores.

- *Establecer mecanismos que brinden respaldo a las investigaciones y aumenten no solo la credibilidad de sus resultados como su capacidad de incidencia en las políticas públicas.* En este aspecto, un potencial instrumento para ahondar la credibilidad de los resultados es el trabajo colaborativo entre diversas instituciones relacionadas, incluyendo a organizaciones o privados que puedan hacer uso directo de los hallazgos. De igual forma, otra posible herramienta que los académicos pueden utilizar para dar soporte a sus estudios es la pertenencia a redes internacionales que se relacionen con sus esferas de trabajo. Esto conlleva la posibilidad de realizar investigaciones con otros miembros, tanto nacionales como internacionales, especialistas en las áreas de estudio. En ambos casos, involucrar a más actores en el desarrollo de proyectos de investigación se amplía el potencial de impacto, el alcance y cobertura del estudio, así como la incidencia, difusión y soporte de las conclusiones derivadas por el intercambio de posturas entre las partes mientras se reducen los costos asociados con el estudio y su divulgación.
- *Reforzar la capacidad de incidencia de las instituciones que realicen investigación, no solo de los investigadores.* Esto implica que, después de la generación de productos diversos, se potencie su difusión con materiales especialmente dirigidos a la población y a los tomadores de decisión. La tarea de divulgación parte de que los investigadores sepan expresar sus ideas con claridad, pero no debiese ser un esfuerzo aislado y limitado al académico, sino que debe ser acompañado por una labor institucional, en línea con la publicidad de hallazgos, recomendaciones y repercusiones. Es decir, las instituciones deben contemplar dentro de su estrategia de comunicación institucional, una línea de trabajo que contribuya a vincular la investigación con las políticas públicas. A su vez, debe evaluarse el uso de medios menos tradicionales de comunicación académica, como las redes sociales, para acercarse a distintas audiencias, especialmente los tomadores de decisiones y la población, en general.

Para finalizar este reporte, es importante recordar que estas recomendaciones surgen a partir del análisis realizado y sus hallazgos. No obstante, este ejercicio de indagación acerca del desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales, debe verse como un punto de partida para identificar aspectos que pueden estudiarse con mayor profundidad.

En ese sentido, futuras investigaciones podrían indagar aún más sobre las fortalezas del CONACYT y los desafíos que esta institución enfrenta para promover el desarrollo tanto de las ciencias duras como de las ciencias sociales. También sería interesante examinar de qué manera son retomados los resultados de la encuesta de popularización de la ciencia y la tecnología, a fin de identificar estrategias efectivas para mejorar las iniciativas públicas y privadas que buscan divulgar los conocimientos científicos y hacer que los resultados de las investigaciones tengan mayor relevancia en la cotidianidad. En esa línea, sería valioso estudiar en profundidad qué tan efectivas son las estrategias de difusión implementadas por las instituciones dedicadas a la investigación en incidir en la opinión pública y los tomadores de decisiones. Análisis futuros podrían ayudar a comprender con mayor precisión cómo los miembros de la comunidad de políticas públicas usan los resultados de las investigaciones, y cómo se podría incentivar y fortalecer su interacción con los investigadores. Finalmente, sería interesante explorar la perspectiva de los medios de comunicación con respecto a las ciencias sociales. Un estudio de esta naturaleza podría indagar su percepción acerca de las ciencias sociales, con qué frecuencia cubren temáticas sociales y usan el conocimiento científico como evidencia, y qué hace falta, desde su punto de vista, para aumentar la relevancia de la investigación social

Bibliografía

Academia Nacional de Seguridad Pública (2016). Investigación y Proyección Social. Recuperado el marzo de 2021, de https://www.ansp.gob.sv/investigacion-y-proyeccion-social/

Acción Ciudadana, Asociación Nacional de La Empresa Privada, Centro de Estudios Jurídicos, Cristosal, Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Fundación Nacional para el Desarrollo Capítulo Transparencia Internacional, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, Fespad, Instituto Centroamericano de Derechos Fiscales, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Viva El Salvador (2021). Instamos a la comunidad internacional a monitorear de cerca las acciones realizadas por el Estado contra las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo en El Salvador. Carta abierta a la comunidad internacional [En Línea] Disponible en: https://accion-ciudadana.org/comunicado-de-prensa-instamos-a-la-comunidad-internacional-a-monitorear-de-cerca-las-acciones-realizadas-por-el-estado-contra-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-el-periodismo-en-el-salvador/

Acuerdo N° 15-0432-A de 2013 [Órgano Ejecutivo en el Ramo de Educación]. Creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. D.O. N°61, T. N°399, del 5 de abril de 2013. Disponible en: https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2013/04-abril/05-04-2013.pdf

Alas, S. (2021, 15 de marzo). Escrutinio final: estos serán los 84 diputados y sus marcas. Diario El Mundo. [En línea] Disponible en: https://diario.elmundo.sv/escrutinio-final-estos-seran-los-84-diputados-y-sus-marcas/

Andrade, A. (1990). Trayectoria de las ciencias sociales en América Latina. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 36 (141), 89-105. Universidad Nacional Autónoma de México.

Arévalo, L. M. (julio de 2010). "Diseño de Metodologías para gestionar financiamiento que fortalezcan las finanzas de las organizaciones no gubernamentales ONG´s del Departamento de San Salvador (Caso ilustrativo)". Trabajo de Investigación para optar al grado de Licenciatura en Administración de Empresas. San Salvador, El Salvador: Universidad de El Salvador. Recuperado el marzo de 2021, de http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/9037/1/T-658%20A678di.pdf

Asamblea Legislativa (16 de diciembre de 1983). Constitución de la República de El Salvador. D. O. Nº 234, Tomo No. 281. Recuperado el marzo de 2021, de https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf

Asamblea Legislativa (17 de diciembre de 1996). Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, D.O. No. 238, Tomo No. 333. Recuperado el marzo de 2021, de https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/0F68583C-C9BA-4034-9869-313E31898248.pdf

Asamblea Legislativa (19 de noviembre de 2004). Ley de Educación Superior. D. O. Nº 216, Tomo Nº 365. Obtenido de https://www.mined.gob.sv/educacionsuperior/documentos/Ley%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%20Asamblea.pdf

Asamblea Legislativa (8 de abril de 2011). Ley de Acceso a la Información Pública. D. O. Nº 70, Tomo Nº 391. Obtenido de https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073009410_archivo_documento_legislativo.pdf

Asociación Salvadoreña de Industriales (diciembre de 2020). Cuarto Informe Trimestral de Desempeño Económico y Normativo. San Salvador, El Salvador. Recuperado el marzo de 2021, de https://industriaelsalvador.com/wp-content/uploads/2020/12/ASI-ANALYTICS_FINAL_PRENSA_DIC20-1.pdf

AUPRIDES (2019). Actividades y Eventos. Obtenido de AUPRIDES: https://auprides.org/

Avelar, M; Chévez, C; Ramírez, A. y González L. R. (2019). El reto de plantearse la transformación de la investigación educativa en El Salvador. Reflexiones de un proceso. En C. I. Chévez Reinoza y J. A. Melenge-Escudero, Tendencias y desafíos de la investigación educativa: aproximaciones teóricas y metodológicas (pp. 133-162). San Salvador, El Salvador: Instituto Nacional de Formación Docente.

Banco Mundial (2018). TCData360. Obtenido de Base de datos del Banco Mundial: https://tcdata360.worldbank.org/indicators/tour.open?country=SLV&indicator=3550&viz=bar_chart&years=2017

Banco Mundial (2020). Base de datos. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/

Banco Mundial (2021a). Personas que usan internet (% de la población) – El Salvador. [En Línea] Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS?locations=SV

Banco Mundial (2021b). Indicadores mundiales de buen gobierno. [En línea] Disponible en: https://databank.bancomundial.org/Governance-Indicators/id/2abb48da#

BCR (16 de marzo de 2012). Banco Central de Reserva. Obtenido de Funciones: https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=229

BID (2019). Members of the Latin America and the Caribbean Research Network. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de https://www.iadb.org/sites/default/files/2019-10/RED_Miembros_OCT2019_WEB.pdf

Calles, C. (2013). Participación científica de las mujeres en El Salvador. Primera aproximación. Universidad Tecnológica de El Salvador.

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (s.f.). Publicaciones. Recuperado el marzo de 2021, de https://camarasal.com/datos-de-interes/

Camejo, H. (2014). Las ciencias sociales en América Latina: un análisis desde el enfoque de Walter Mignolo. Sociológica (México), 29(81), 283-292. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732014000100009&lng=es&tlng=es

CENICSH (2011). Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Año I. Número I. Julio – Diciembre 2011. Ministerio de Educación. Gobierno de El Salvador.

Centro de Documentación Judicial (s.f.). Instituciones Autónomas. Recuperado en marzo de 2021, de https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2010-2019/2015/02/B31BC.HTML

CONACYT (2016). Evolución de la investigación y producción científica del sector de educación superior en El Salvador 2008-2015.

CONACYT (2017a). Política nacional de popularización de la ciencia y tecnología. Su integración con la política nacional de ICT y la política educativa. Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Educación. Gobierno de El Salvador.

CONACYT (2017b). Indicadores de recursos humanos en ciencia y tecnología. El Salvador 2004-2015.

CONACYT (2018). Percepción social de la ciencia y tecnología en El Salvador. Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología. El Salvador.

CONACYT (2019a). Estadísticas sobre actividades científicas y tecnológicas e investigación y desarrollo sector educación superior y gobierno 2018 El Salvador. Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, noviembre de 2019.

CONACYT (2019b). Capacidades de Investigación de las Instituciones de Educación Superior y Gobierno 2019. El Salvador. CONACYT.

CONACYT (2021). Investigadores enero 2021 Solicitud FUSADES 18.02.21 [Base de datos]

CONACYT (2021). Red de Investigadores Salvadoreños (REDISAL). Centros de investigación. Obtenido de https://www.redisal.org.sv/wordpress/index.php/centros-de-investigacion/

CONACYT (s.f.). Centros de investigación. Red de Investigadores Salvadoreños (REDISAL). Recuperado el marzo de 2021, de https://www.redisal.org.sv/wordpress/index.php/centros-de-investigacion/

Corporación Latinobarómetro (2015). Latinobarómetro 2015: El Salvador 2015. Distribución por sexo y edad. Santiago, Chile.

Corporación Latinobarómetro (2018). Latinobarómetro 2018. Resultados por sexo y edad. Estudio n° LAT-2018. El Salvador_2018. Santiago, Chile.

Corporación Latinobarómetro (2021). Análisis Online. [En línea] Disponible en: https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp

Cuéllar-Marchelli, H. (10 de diciembre de 2019). La política social es clave para la sostenibilidad de la sociedad y la democracia. Blog de FUSADES.

Cuéllar-Marchelli, H.; Flores, A.; Góchez, G.; López, A. M. (2020). Protección social y COVID-19: la respuesta del Estado salvadoreño a la emergencia. Serie de investigación. FUSADES, junio de 2020.

DIGESTYC (2009). VI Censo de población y vivienda 2007. Tomo I Población: Características generales. Ministerio de economía, octubre de 2009.

DIGESTYC (2019). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018. Ministerio de Economía. Gobierno de El Salvador.

DIGESTYC (2021). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2020. Ministerio de Economía. Gobierno de El Salvador.

Education First (2020). EF English Proficiency Index. Education First.

Egbetokun, A., Olofinyehun, A., Ayo-Lawal. A., Oluwatope, O., Sanni, M., & Yusuff, U. (2020). Doing research in Nigeria country report. GDN NACETEM, http://gdn.int/DRA_Nigeria2020

Embajada de Francia (2020). Relaciones Bilaterales. Obtenido de Embajada de Francia en El Salvador: https://sv.ambafrance.org/Organismos-internacionales-en-El

Escuela Mónica Herrera (2019). Investigación Institucional. Recuperado el marzo de 2021, de https://monicaherrera.edu.sv/investigacion/

Escuela Superior de Economía y Negocios (s.f.). Investigación. Recuperado el marzo de 2021, de https://www.esen.edu.sv/investigacion/

Escuela Superior Franciscana Especializada/AGAPE (s.f.). Unidad de Investigación y Proyección Social. Recuperado en marzo de 2021, de https://sites.google.com/esfe.agape.edu.sv/esfeciencia-proyesocial/divulgaci%C3%B3n-de-resultados?authuser=1

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO El Salvador (2021). Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de https://www.flacso.org.sv/investigacion

Foro Económico Mundial (2017). The Global Human Capital Report 2017. Preparing people for the future of work.

Foro Económico Mundial (2018). The Global Competitiveness Report 2018.

Foro Económico Mundial (2019). The Global Competitiveness Report 2019.

Freedom House (2021). Freedom in the world 2021: El Salvador. [En línea] Disponible en: https://freedomhouse.org/country/el-salvador/freedom-world/2021

FUSADES (2018). Cohesión social, crecimiento e institucionalidad para la sostenibilidad. Aportes para construir un país próspero y seguro. Serie de Investigación 1-2018. Departamento de Estudios Sociales. Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

FUSADES (2019a). Informe de Coyuntura Social 2018-2019. Departamento de Estudios Sociales. Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

FUSADES (2019b). Progresando en el nuevo milenio, elementos para un plan de desarrollo.

FUSADES (2020a). Informe de Coyuntura Social 2019-2020. Departamento de Estudios Sociales. Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

FUSADES (2020b). Informe de Coyuntura Económica. Mayo de 2020. Departamento de Estudios Económicos. Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

FUSADES (2020c). El Salvador, año político 1: junio de 2019-mayo de 2020. Departamento de Estudios Políticos. Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

FUSADES (2021a). Informe de Coyuntura Social 2020-2021. Departamento de Estudios Sociales. Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

FUSADES (2021b). Informe de Coyuntura Legal e Institucional: 2do semestre 2020. Departamento de Estudios Legales. Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

FUSADES (2021c). El Salvador. Año político: Junio de 2020 – Mayo de 2021. Departamento de Estudios Políticos. Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

GDN (2017). Global Development Network Program Document. Doing Research Assessments: Understanding research systems in developing countries.

GDN (2019). Doing Research Assessment. Guide for Implementation.

GDN (2020). Doing Research Assessment. Strengthen research and research systems. Extended toolkit. Global Development Network

Glutting, J. R., Oo, Z., Anders Lee, Z. X., Htet, N. L., Lin, N., Win, N. C., Aung, N. C., & Oo, T. Z. (2020). Doing research in Myanmar country report. GDN CESD, http://gdn.int/DRA_Myanmar2020.

Godin, B., & Gingras, Y. (2000). The place of universities in the system of knowledge production. Research Policy, 29(2), págs. 273-278. doi: https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00065-7

GOES (1983). Constitución de la República de El Salvador. Gobierno de El Salvador.

GOES (2000). Ley de Integración Monetaria. Gobierno de El Salvador.

GOES (2004). Ley de Educación Superior. Gobierno de El Salvador.

GOES (2009). Reglamento General de la Ley de Educación Superior. Gobierno de El Salvador.

GOES (2012). Ley de desarrollo científico y tecnológico. Gobierno de El Salvador.

GOES (2018). Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Gobierno de El Salvador.

González, L. (1998). Las ciencias sociales en América Latina: condiciones y particularidades. FLACSO-UNESCO. San José, Costa Rica.

Hanns Seidel Stiftung (2021). Centroamérica. Áreas de Trabajo. Recuperado el marzo de 2021, de Hanns Seidel Stiftung: https://latinamerica.hss.de/centroamerica/areas-de-trabajo/

Heinrich-Böll-Stiftung (s.f.). Heinrich-Böll-Stiftung San Salvador. Recuperado en marzo de 2021, de https://sv.boell.org/es

INFOD (2021). Marco histórico. Ministerio de Educación. Gobierno de El Salvador. [En línea] Disponible en: https://infod.edu.sv/marco-historico/

Infosegura (2021). La seguridad ciudadana en El Salvador. Unidad de coordinación regional del proyecto Infosegura, oficina del PNUD en El Salvador. Disponible en: https://infosegura.org/perfiles/el-salvador/

INSAFORP (13 de junio de 2012). Estructura Organizativa. Obtenido de INSAFORP. Formando un mejor El Salvador: https://www.insaforp.org.sv/index.php/quienes-somos/estructura-organizativa/76-estructura-organizativa

Instituto Americano de educación superior (s.f.). Recuperado en marzo de 2021, de https://www.americancollege.net/

Instituto de Investigación para el Aprendizaje (2021). Equipo. Recuperado en marzo de 2021, de https://iiasv.org/sobre-nosotros/#equipo

Instituto de Investigación para el Aprendizaje (2021). Sobre nosotros. Recuperado en marzo de 2021, de https://iiasv.org/#pensamiento

Instituto Especializado de Educación Superior "El Espíritu Santo" (s.f.). Departamento de Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de http://www.ieeses.edu.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=271

Instituto Especializado de Nivel Superior Centro Cultural Salvadoreño (s.f.). Investigaciones concluidas. Recuperado en marzo de 2021, de https://www.iensccsa.edu.sv/index.php/investigacion/investigaciones-concluidas

Instituto Especializado Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios (s.f.). Departamento de Doctrina e Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de http://escuelamilitar.mil.sv/index.php/proyectos/departamento-de-doctrina-e-investigacion

Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) (2020). Investigación educativa. Recuperado en marzo de 2021, de https://infod.edu.sv/investigacion-educativa/

ISEADE (s.f.). Centro de Productividad y Competitividad CPC. Recuperado en marzo de 2021, de ISEADE-FEPADE: https://www.iseade.edu.sv/index.php/cpc/centro-de-productividad-y-competitividad-cpc

Kinzelbach, K.; Saliba, I.; Spannagel, J. y Quinn, R. (2021) Free universities: Putting the academic freedom index into action. Global Public Policy Institute y Scholars at Risk Network. Disponible en: https://www.gppi.net/media/KinzelbachEtAl_2021_Free_Universities_AFi-2020.pdf

Laudel, G. (Agosto de 2006). The art of getting funded: how scientists adapt to their funding conditions. Science and Public Policy, 33(7), págs. 489–504. doi:http://dx.doi.org/10.3152/147154306781778777

Lauria-Santiago, A. (1995). Historical research and sources on El Salvador. Latin American Research Review, 30(2), 151-176. The Latin American Studies Association.

Li, X., & Liu, X. (2005). Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Increasingly Endogenous Relationship. World Development, 33(3), pp. 393-407. doi:10.1016/j.worlddev.2004.11.001

Lima, L. (2021, 1 de marzo). Nayib Bukele: qué supone que el presidente de El Salvador tenga "poder absoluto" con el control de la Asamblea Legislativa. BBC News Mundo. [En línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56237616

Loya, N. (2011). Los Derechos Humanos en El Salvador: Una lectura desde las encuestas de opinión. Temas de Actualidad No. 10. Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo. San Salvador, El Salvador.

Lugo, M. (1986). El desarrollo de las ciencias sociales en El Salvador y su aporte al conocimiento de la realidad del país. Revista de Ciencias Sociales, Número 33. Universidad de Costa Rica.

McGann, J. G. (2021). 2020 Global Go To Think Tank Index Report. Pensilvania: Universidad de Pensilvania. Obtenido de https://repository.upenn.edu/think_tanks/18/

Mejía, E. (2021). Se deteriora la libertad de prensa en El Salvador. La Prensa Gráfica. [En línea] Disponible en: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Se-deteriora-libertad-de-prensa-en-El-Salvador-20211021-0117.html

MINED (2009). Historia de El Salvador. Tomo II. Ministerio de Educación. Gobierno de El Salvador.

MINED (2010). Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico: Marco de ejecución de la Agenda Nacional de Investigación. Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Gobierno de El Salvador.

MINED (2011). Actualización de la: normativa para el funcionamiento del fondo de investigación para la educación superior "FIES". Ministerio de Educación. Gobierno de El Salvador.

MINED (2013). Acuerdo de Creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Acuerdo No. 15-0432-A. Ministerio de Educación. Gobierno de El Salvador.

MINED (2019). Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 2018. Dirección Nacional de Educación Superior.

MINED (2021). Medidas tomadas por las Instituciones de Educación Superior. Ministerio de Educación. Gobierno de El Salvador. [En línea] Disponible en: http://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/ies/

Ministerio de Relaciones Exteriores (2013). Sistema de Información sobre Cooperación para el Desarrollo de El Salvador. Listado de información de glosario. Recuperado en marzo de 2021, de http://cooperacion.rree.gob.sv/glosario

Ministerio de Relaciones Exteriores (2018). Información sobre solicitud de acceso a información 121-2018. Obtenido de https://www.transparencia.gob.sv/institutions/rree/documents/298894/download

Ministerio de Relaciones Exteriores (2020). Memoria de Labores 2019-2020. San Salvador: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Relaciones Exteriores (2021). Resolución de respuesta SAI-040-2021 (1).

Morello, G. (2007). El Concilio Vaticano II y su impacto en América Latina: a 40 años de un cambio en los paradigmas en el catolicismo. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 49 (199), 81-104. Universidad Nacional Autónoma de México.

Moreno, A. I., Rey-Rocha, J., Burgess, S., López-Navarro, I., & Sachdev, I. (2012). Spanish researchers' perceived difficulty writing research articles for English-medium journals: the impact of proficiency in English versus publication experience. Ibérica (24), págs. 157-183.

Naciones Unidas (1993). De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Nueva York.

Naciones Unidas (2020). Organismos de la ONU en El Salvador. Obtenido de Naciones Unidas El Salvador: https://elsalvador.un.org/es/about/un-entities-in-country

OPAMSS (s.f.). Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de Concejo de Alcaldías y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador: https://www.isdemu.gob.sv/

Packard, R. (1997). International development and the social sciences: Essays on the history and politics of knowledge. Universidad de California.

PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013: Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. San Salvador, El Salvador.

PNUD (2019). Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI.

PNUD (2020a). Reportes de Desarrollo Humano. Naciones Unidas. Disponible en: http://hdr.undp.org/en/composite/trends

PNUD (2020b). Informe sobre Desarrollo Humano 2020. La próxima frontera: El desarrollo humano y el Antropoceno.

Pozzebon, S. (2021) Análisis: Lo que hay que saber sobre el drama político que hace temer por la democracia en El Salvador. CNN en español. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/05/saber-drama-politico-temer-democracia-el-salvador-trax/

Ramírez, A. (2013). Las ciencias sociales en El Salvador: Tecnificación y "desarrollo" contra el estudio crítico de la realidad. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina.

REDISAL (2021, 9 de marzo). Red de investigadores salvadoreños. Listado de investigadores. Disponible en: https://www.redisal.org.sv/wordpress/index.php/investigadores/

Rivas, R. (2015). Cultura: factor determinante del desarrollo humano. Revista entorno, 58, 16-24. Universidad Tecnológica de El Salvador.

Rivera de Parada, E. A. (2020). Investigación Científica en El Salvador: Un desafío para las Instituciones de Educación Superior. Crea Ciencia Revista Científica, (2), 4. https://doi.org/10.5377/creaciencia.v0i2.9245

Rodríguez, C. (14 de octubre de 2019). [Carta INFOD/CE. 2019.971 para Dra. Helga Cuéllar-Marchelli]. Comunicación personal. i.

Ruiz-Arranz, M., Barrios, J. J., Escobar, J., & Moreno, C. (2019). BIDeconomics El Salvador: Impulsando el crecimiento inclusivo y sostenible. BIDeconomics. https://doi.org/10.18235/0001617

Scimago (Abril de 2020). Scimago Journal & Country Rank. Obtenido de Scimago: https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3301

Scimago (Abril de 2021). Scimago Journal & Country Rank. Obtenido de Scimago: https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3300

SICE (2021). Información sobre El Salvador. Obtenido de Sistema de Información sobre Comercio Exterior: http://www.sice.oas.org/ctyindex/slv/slvagreements_s.asp

Sloan, S., & Arrison, T. (2011). Examining the core elements of international research collaboration. Summary of a Workshop. Washington, DC.: National Academy of Sciences.

Sociedad Interamericana de Prensa (2020). El Salvador: la nueva escalada autoritaria. Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa. Período de medición Mayo 2019 – Abril 2020.

Sociedad Interamericana de Prensa (2021). Uruguay y Chile en las antípodas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el barómetro de libertad de prensa "Índice Chapultepec" 2021. [En línea] Disponible en: https://www.sipiapa.org/notas/1214821-uruguay-y-chile-las-antipodas-cuba-nicaragua-y-venezuela-el-barometro-libertad-prensa-indice-chapultepec-2021

Superintendencia de Competencia (24 de marzo de 2021). Qué hacemos. Obtenido de https://www.sc.gob.sv/index.php/que-hacemos/

UCA (2021). Historia. Acerca de la UCA. Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". [En Línea] Disponible en: https://uca.edu.sv/historia/

UES (2021). Nuestra Universidad. Universidad de El Salvador. [En línea] Disponible en: https://www.ues.edu.sv/nuestra-universidad

UMA (s.f.). Modelo de Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de Universidad Modular Abierta: https://www.uma.edu.sv/principal/investigacion/modelo_invs.html

UMA (s.f.). Revistas UMA. Recuperado en marzo de 2021, de Universidad Modular Abierta: https://www.uma.edu.sv/principal/investigacion/revistas.html#

UNASA (2020). Voz y Vida de Occidente. Observatorio de UNASA. Recuperado en marzo de 2020, de Universidad Autónoma de Santa Ana: http://vyvo.unasa.edu.sv/

UNASA (s.f.). Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de Universidad Autónoma de Santa Ana: http://unasa.edu.sv/investigacion.html

Universidad Albert Einstein (UAE) (2020). Recuperado el marzo de 2021, de https://www.uae.edu.sv/

Universidad Católica de El Salvador (s.f.). Dirección de Investigación y Proyección Social. Recuperado el marzo de 2021, de http://www.diyps.catolica.edu.sv/?page_id=10

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (s.f.). Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). Equipo de Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de https://www.uca.edu.sv/idhuca/equipo-de-investigacion/

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (s.f.). Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP). ¿Quiénes somos? Recuperado en marzo de 2021, de https://www.uca.edu.sv/iudop/quienes-somos/

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (s.f.). Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de https://uca.edu.sv/acerca-de-la-uca/investigacion/

Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (2021). Información General. Obtenido de http://www.ucad.edu.sv/site/index.php

Universidad de El Salvador (UES) (2021). Centros e Institutos de Investigación de la Universidad de El Salvador. Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. Obtenido de https://sic.ues.edu.sv/centros-institutos

Universidad de El Salvador (UES) (2021). Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. Recuperado en marzo de 2021, de https://sic.ues.edu.sv/

Universidad de El Salvador (UES) (s.f.). Centro de Estudios de Género. Recuperado en marzo de 2021, de https://genero.ues.edu.sv/

Universidad de Sonsonate (s.f.). Unidad de Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de http://ui.usonsonate.edu.sv/acercade.html

Universidad Don Bosco (2021). Presentación. Recuperado en marzo de 2021, de http://www.udb.edu.sv/udb/pagina/presentacion_investigacion

Universidad Dr. José Matías Delgado (2018). CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS Y HUMANIDADES, CICH. Recuperado en marzo de 2021, de https://www.ujmd.edu.sv/unidades-academico-administrativas/centro-de-investigaciones-en-ciencias-y-humanidades-cich/

Universidad Evangélica de El Salvador (2019). Memoria de Labores 2019.

Universidad Evangélica de El Salvador (2021a). COMITÉ DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD CEIS-UEES. Recuperado el marzo de 2021, de Universidad Evangélica de El Salvador: https://www.uees.edu.sv/comite-de-etica-para-la-investigacion-en-salud-ceis-uees/

Universidad Evangélica de El Salvador (2021b). Dirección de Publicaciones. Editorial UEES. Recuperado en marzo de 2021, de https://www.uees.edu.sv/editorial-uees/

Universidad Evangélica de El Salvador (2021c). Dirección de Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de https://www.uees.edu.sv/investigacion/

Universidad Francisco Gavidia (UFG) (2021). Observatorio de Políticas Públicas UFG. Recuperado en marzo de 2021, de http://comunicaciones.ufg.edu.sv/observatorios

Universidad Francisco Gavidia (2019). Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI). ¿Qué es el ICTI? Recuperado en marzo de 2021, de http://icti.ufg.edu.sv/

Universidad Gerardo Barrios (2021a). Vicerrectoría de Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de https://www.ugb.edu.sv/investigacion/investigacion/vicerrectoria-de-investigacion.html

Universidad Gerardo Barrios (2021b). Editorial UGB. Recuperado en marzo de 2021, de https://www.ugb.edu.sv/investigacion/editorial/editorial.html

Universidad Luterana Salvadoreña (s.f.). Investigación CURC. Obtenido de Universidad Luterana Salvadoreña. Centro Universitario Regional de Cabañas: Investigación

Universidad Panamericana San Salvador (s.f.). Antecedentes y políticas. Recuperado en marzo de 2021, de http://www.upan.edu.sv/html/Antecedentes-Y-Politicas.html

Universidad Panamericana San Salvador (s.f.). Investigaciones. Recuperado en marzo de 2021, de http://www.upan.edu.sv/html/Investigaciones.html

Universidad Pedagógica de El Salvador (2021) Centro de Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de http://pedagogica.edu.sv/centro-de-investigacion/

Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) (2021). ¿Quiénes somos en ICTUSAM? Recuperado en marzo de 2021, de https://www.usam.edu.sv/ictusam/quienes-somos/

Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) (2021). Personal adscrito a ICTUSAM. Recuperado en marzo de 2021, de https://www.usam.edu.sv/ictusam/personal-adscrito-ictusam/#investigadores

Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC). (2021). Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de https://www.utec.edu.sv/vips/investigacion/

Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) (s.f.). Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS). ¿Qué es el CIOPS? Recuperado el marzo de 2021, de https://www.utec.edu.sv/Inicio/Ciops/Ciops

UNIVO (2020). Dirección de Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de Universidad de Oriente: https://www.univo.edu.sv/direccion-de-investigacion/

UNSSA (s.f.). Organigrama Institucional. Recuperado en marzo de 2021, de Universidad Nueva San Salvador: http://www.unssa.edu.sv/index.php/institucional/organigrama

UPES (2017). Instituto de Investigaciones UPES. Recuperado en marzo de 2021, de Universidad Politécnica de El Salvador: http://www.upes.edu.sv/investigaciones/index.html

USAID (2012). El Salvador: Evaluación de la educación superior y recomendaciones. San Salvador: USAID. Obtenido de https://docplayer.es/36985354-El-salvador-evaluacion-de-la-educacion-superior-y-recomendaciones.html

USAID (2020). Country development cooperation strategy (CDCS). San Salvador: USAID.

UTLA. (2021). Investigación. Recuperado en marzo de 2021, de Universidad Técnica Latinoamericana: http://utla.edu.sv/index.php/investigacion

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES • DES

COMISIÓN

Coordinadora de comisión

Elena María de Alfaro

Directora

Helga Cuéllar-Marchelli

Investigadores

Alejandro Flores
Carlos González
Kriscia Hernández

Personal de apoyo

Ana Deysi de Ramírez

Editora de Publicaciones

Yolanda Cabrera de González

Diagramadora de publicaciones

Paola María Molina Guzmán

FUSADES
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

Departamento de Estudios Sociales • **DES**
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social,
FUSADES

Edificio FUSADES, Bulevar y Urbanización Santa Elena,
Antiguo Cuscatlán, El Salvador, Centroamérica, Apartado Postal 01-278,
Tels.: (503) 2248-5600, (503) 2248-5671

www.FUSADES.org